

Hugo del Campo

Argentina. 1955-2005.

Como el ave Fénix...

EL AUTOR

Hugo del Campo nació en Buenos Aires en 1941. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Enseñó en esa facultad y en las Universidades Nacionales de Lomas de Zamora, del Sur y de La Pampa entre 1966 y 1975. Encarcelado por “penetración ideológica” en esa última fecha, reanudó su actividad docente desde 1983 en las universidades de Paris IV – Sorbonne y Marne-la-Vallée (Francia).

Publicó *Los anarquistas* (CEAL, 1971); *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable* (Clacso, 1983; 2ª edición Siglo XXI, 2005); *El “sindicalismo revolucionario” (selección de textos)* (CEAL, 1985); “Sindicatos, partidos ‘obreros’ y Estado en la Argentina pre-peronista” en Waldo Ansaldi y José Luis Moreno (comp.) *Estado y sociedad en el pensamiento nacional* (Cántaro, 1989; 2ª ed. 1996) y artículos en *Polémica*, *Documentos de Polémica*, *Historia del movimiento obrero*, *Historia de América en el siglo XX*, *Cuadernos del Sur* y el *Anuario de estudios histórico-sociales de la Universidad de Tandil*.

NOTA PRELIMINAR

Luis Alberto Romero

Hacia 2006 le encargué a Hugo del Campo la preparación de un volumen sobre la historia argentina en la segunda mitad del siglo XX, destinada a una colección de alta divulgación, que dirijo. Hugo concluyó su tarea poco antes de fallecer. Para poder completar el volumen debíamos todavía resolver con él una serie de cuestiones y de ajustes. Sabíamos que, aunque eran cuestiones menores, no sería fácil llegar a un acuerdo, pues Hugo defendía con firmeza sus puntos de vista. Por eso decidimos que, sin su participación y autorización, no sería apropiado publicarlo. Sus amigos, y particularmente María Dolores Béjar, queremos que su texto, muy valioso, sea conocido.

DIÁLOGO CON HUGO AL CALOR DE ESTE LIBRO

María Dolores Béjar

Hugo del Campo pensó y escribió este libro en tres sitios: en Vejer de la Frontera, a un paso de África, en Buenos Aires y, básicamente, en París. Por esos azares que atraviesan la historia, la propuesta llegó casi con su jubilación y Hugo se sumergió, serena y apasionadamente, en el pasado reciente de la Argentina. Aceptó comprarse una notebook. Hasta ese momento, en cada encuentro me aseguraba: “jamás dejaré mis cuadernos, mi lapicera fuente, mi máquina de escribir” pero, como le anticipé, acabó no pudiendo prescindir de la misma.

Trasladó una gran cantidad de libros a su departamento parisino y consultó con gusto la prensa vía internet. Casi nunca me comentó sus notas e impresiones sobre el pasado más remoto. Sólo lo hizo cuando me anunció el inicio de su tarea en enero de 2007 con un comentario que deseo compartir: “Estoy tratando de explicar que en 1955 *democracia* significaba proscripción de la mayoría; *nacionalismo*, anti liberalismo; *liberalismo*, antiperonismo (lo que no implica que los *nacionalistas* fueran peronistas...) Para aclarar esos galimatías me inventé un lector extranjero -o demasiado joven- al que me dirijo cada vez que una palabra no significa lo mismo en la Argentina y en el resto del mundo. Así, por ejemplo, le explico que para los militares argentinos *comunista* es lo que en países menos advertidos se llama *progresista*, lo que me permite contar -que no explicar- que fue el *comunista* Frondizi el que prohibió el PC (que, por otra

parte, lo había votado) Y a medida que me interno en esos laberintos me dan ganas de cambiar el enfoque y el título del libro en el sentido del *asunto*, por ejemplo: Una historia surrealista de la Argentina”.

Sus correos comenzaron a llegar con frecuencia a medida que cotejaba evaluaciones y especialmente apuntaba datos cuantitativos sobre el gobierno de Néstor Kirchner.

Hugo nunca fue peronista ni antiperonista. Siempre se posicionó en el campo de la izquierda. Nuestra única discusión fue en París cuando lo visité en el 2008, poco antes de su muerte: a partir de mi comentario escéptico sobre la revolución bolchevique, sus ojos se entrecerraron y su voz se tensó para *golpearme* con un: “¿te estás volviendo una posmoderna?”

El gobierno de Néstor Kirchner lo sorprendió en relación con lo que su recopilación de números mostraba respecto a los avances en materia social y económica. Al mismo tiempo, observaba con lucidez las limitaciones de un proceso en el que “como a fines del siglo XIX seguimos dependiendo de los ciclos del capitalismo mundial”.

Por fin empezó a sentirse reparado por sus cinco años de cárcel donde estuvo, luego de haber sido secuestrado, por haber propuesto en la Universidad de Bahía Blanca en 1974 un programa de Historia Contemporánea que un juez de la dictadura militar calificó como “subversivo”. En todas sus manifestaciones Hugo fue medido, equilibrado. Pero la puesta en marcha de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado le produjeron una gran sorpresa ya no lo esperaba y un enorme reconocimiento de la decisión de Néstor Kirchner.

Así como no fue peronista tampoco fue kirchnerista, pero en mayo del 2008 cuando los representantes de los grupos rurales se reunieron en Rosario en una enorme movilización para rechazar el aumento de las retenciones, cuando ambos leíamos los diarios desde su PC en París, Hugo exclamó: “tanto tiempo estudiando historia argentina y recién en este momento empiezo a entender el golpe del 55, ahora sé que no hubiera estado entre quienes lo celebraron, si no entre quienes tuvieron bronca y dolor”.

Cuando lo dejé en París a fines de mayo, le restaban las últimas correcciones. Hugo se fue a Vejer para concluir el trabajo y en julio de 2008 le puso punto final. Su muerte impidió que este libro integrara la colección para la que fue pensado. Nuestra iniciativa de hacerlo circular en la web hará posible que alumnos, docentes, lectores en general, puedan sumergirse en un texto comprometido, lúcido, escrito al calor de los hechos. Hugo no dudó en debatir consigo mismo y cuando evaluó que fuentes históricas confiables le exigían extraer conclusiones distintas a sus creencias aceptó ser fiel a su labor como historiador.

INDICE

Prólogo

Introducción

I. El descenso a los infiernos

¿Qué hacer con el peronismo?

Gobiernos bajo tutela

Botas sí, votos no

Peronistas contra peronistas

El Estado terrorista

II. Una difícil reconstrucción

Democracia con hiperinflación

Peronismo de mercado

Cacerolazos y puebladas

La caja de sorpresas

Epílogo

Anexos

Abreviaturas

Presidencias

Cronología

Bibliografía

PRÓLOGO

En 1955, yo tenía catorce años y empezaba a interesarme por la política. En mi casa eran antiperonistas, y cuando hablaban de política en el comedor que daba a la calle, me mandaban a la vereda para vigilar que nadie escuchara. En el colegio, los chicos de la Acción Católica llevaban en la solapa una cruz con la V de la victoria, símbolo de Cristo Rey. Un día, mi hermano me mostró con mucho sigilo una hoja de papel doblada en múltiples pliegues para que no abultara en el bolsillo: era un periódico radical, el primero que yo veía. De pronto, en los últimos meses del gobierno peronista, una apertura permitió el acceso de dirigentes opositores a la radio: conocí entonces las voces de Frondizi y otros. Poco después, empecé a leer *Propósitos*.

Desde entonces, mi vida fue más o menos arrastrada por los vaivenes de la política argentina hasta que, en 1975, mis clases de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional del Sur me llevaron a la cárcel. Al salir, seis años después, me radiqué en Europa. Desde 1983 volví todos los años al país, tratando de mantenerme al tanto de lo que ocurría.

Es por eso que, cuando me propusieron la preparación de este libro, lo acepté sin demasiada vacilación. Más que el desafío intelectual de intentar sintetizar en tan pocas páginas un período tan complejo, lo que me atraía era la posibilidad de reconstruir el marco político en el que se desarrolló mi propia vida, una especie de confrontación entre mi memoria y la bibliografía, entre el hecho vivido,, por un lado, y visto con cincuenta años de perspectiva, por otro.

El proyecto también me interesó por su carácter en gran medida pedagógico. Desde que empecé a trabajar como maestro, a los dieciocho años, nunca dejé de enseñar. En el nivel primario, secundario, universitario, incluso en la cárcel daba cursos a mis compañeros cuando era posible... A través de estas páginas intentaré continuar con esa labor docente de toda la vida.

De modo que esos son los dos objetivos de este libro: reconstruir las condiciones políticas en que se desarrolló la vida de un argentino en la segunda mitad del siglo XX y tratar de explicar su evolución.

Más habituado a dar clases que a escribir, algo me faltará en este recorrido: las preguntas de los estudiantes, sus comentarios, el diálogo... Sin embargo, creo que toda lectura es, en realidad, un diálogo imaginario entre el lector y el autor y espero que el que se entable a partir de estas líneas sea fructífero.

Agradezco los comentarios de Luis Alberto Romero, que me ayudaron a tratar de mejorar este texto.

Vejer de la Frontera, septiembre de 2007

INTRODUCCIÓN

La época que estudia este libro incluye los años más agitados y violentos de la historia argentina reciente, de 1955 a 1983, y la difícil reconstrucción que se inicia desde entonces. Pese a profundas recaídas, como la que tuvo lugar en 2001 y 2002, pareciera que el país renace de sus cenizas... como el ave Fénix.

Cuesta abajo

En los veintiocho años del primer periodo se suceden dieciséis presidentes: siete constitucionales y nueve *de facto*. Los gobiernos elegidos por votación duran, en total, once años; los gobiernos militares, diecisiete. Sólo uno de esos mandatarios (Jorge Rafael Videla) permaneció más de cuatro años en su puesto. Ningún presidente civil terminó su mandato constitucional; tres fueron derrocados por golpes de estado militares.

Estos datos escuetos ilustran tres de las principales características del periodo: la fuerte inestabilidad política, la alternancia de gobiernos civiles elegidos y dictaduras militares y el predominio de los gobiernos *de facto*.

Un sistema corporativo

En la primera parte de este libro explicaremos el desarrollo de ese proceso. Pero hay un aspecto esencial que es preferible señalar ya desde el comienzo:

la incapacidad del sistema político argentino para integrar al peronismo entre 1955 y 1973.

La experiencia del gobierno peronista (1946-1955) había dividido al país en dos campos inconciliables. Los sectores más pobres y numerosos de la población recordaban al gobierno peronista como el único que se había interesado realmente por sus problemas y que había mejorado de manera sustancial sus condiciones de vida. El retorno de Perón al país y al gobierno era entonces su máxima aspiración, vivida muchas veces en forma dramática (“La vida por Perón”).

En cambio, para otros sectores de la sociedad argentina (de clase alta y media en especial) el gobierno peronista había sido una dictadura personalista que reprimió toda forma de oposición y utilizó el monopolio de los medios de comunicación en manos del estado para abrumar a la sociedad con una propaganda masiva. El apoyo popular de que gozaba el peronismo era considerado producto de esa demagogia desenfrenada y se traducía, según estos sectores, en un culto a la personalidad, incompatible con los valores republicanos.

Para la mayoría de los empresarios, en particular, el peronismo significaba altos salarios obtenidos por los poderosos sindicatos con el apoyo del gobierno, que limitaban sus beneficios y aumentaban los costes de producción, y que hacían sus productos poco competitivos en los mercados exteriores. Dentro de la fábrica o el taller, el poder de las comisiones internas y de los delegados desafiaba la autoridad de la gerencia sobre la organización del trabajo y sus

ritmos, y esa “indisciplina” –según esos empresarios- no permitía desarrollar la racionalización ni la productividad. Por todos los medios había que evitar, entonces, el retorno del peronismo, y el medio más efectivo era el poder militar: minoritario en la sociedad, el antiperonismo había llegado a predominar en las fuerzas armadas desde 1955.

Esta posición se impuso con la autodenominada “revolución libertadora”, y se dio entonces la paradoja de que, para defender a la *democracia* contra la *dictadura de la mayoría*, el peronismo fue proscripto.

Borrado del sistema político, volvió entonces a sus orígenes y se refugió en las organizaciones sindicales. Importantes en aquella época debido al número de sus afiliados, sus recursos financieros y su capacidad de presión y de movilización, éstas se convirtieron así en la *columna vertebral* del peronismo y uno de los actores principales del sistema político. Podían ser la principal base de sustentación de un gobierno, como el de “Isabel” Perón, o contribuir decisivamente a voltearlo, como ocurrió con el de Arturo Illia. Las organizaciones sindicales eran los interlocutores obligados de las asociaciones patronales y de cualquier gobierno, civil o militar. Además, a partir de los sindicatos se constituyó una poderosa burocracia con intereses propios, algunos de cuyos miembros llegaron a figurar entre los principales actores de la política nacional (Augusto Timoteo Vandor, por ejemplo).

Frente a estas poderosas corporaciones, los sectores económica y socialmente dominantes recurrieron, para imponer sus intereses, a la alianza con otra corporación, a la que los unían múltiples vinculaciones: las fuerzas armadas.

Éstas se convirtieron así en el otro actor fundamental del sistema político. Cada vez que un gobierno apoyado por los sindicatos amenazaba –o no defendía en forma eficaz- los intereses de las clases dominantes, las fuerzas armadas lo deponían (Juan Domingo Perón en 1955, “Isabel” Perón en 1976). Los gobiernos civiles que no eran capaces de impedir el triunfo –real o potencial- del peronismo, también fueron depuestos (Arturo Frondizi en 1962; Arturo Illia en 1966). Pero cuando llegaba el momento de las elecciones eran los candidatos apoyados directa o indirectamente por el peronismo los que se imponían: Arturo Frondizi en 1958, Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón en 1973. Sobre esta dialéctica se teje la trama política del periodo.

A lo largo de estos años, los sectores económicamente dominantes no pudieron organizar una fuerza política capaz de batir al peronismo en las urnas; entonces, defendían sus intereses directamente, a través de sus organizaciones corporativas, o indirectamente, a través de su alianza con gobiernos militares. Sólo éstos permitían aplicar políticas económicas impopulares que favorecían al gran capital nacional y extranjero y limitaban las conquistas alcanzadas por los trabajadores. La Iglesia es la otra corporación que, en defensa de sus propios intereses, solía acompañar a esos gobiernos militares, y podía desempeñar un papel político decisivo, como ocurrió con la caída de Perón en 1955.

En este sistema, dominado por las corporaciones, los partidos políticos sólo tenían un papel secundario: prácticamente se limitaban a encauzar los votos - en unas elecciones viciadas, hasta 1973, por la proscripción del peronismo-, y a animar las instituciones representativas en los breves periodos de vigencia de la constitución.

Frente a esta reiterada alternancia de gobiernos civiles débiles y dictaduras militares, ningún proyecto reformista parecía viable. Ante ese callejón sin salida, eran cada vez más los que pensaban que sólo la violencia revolucionaria podía enfrentar a la violencia represiva y cambiar una sociedad injusta.

Una espiral de violencia

Desde 1955 se produjo, entonces, un incremento permanente de la violencia política que, aunque no era nueva en la Argentina, alcanzó niveles inusitados. En junio de ese año, el bombardeo de la Casa Rosada (y de la Plaza de Mayo en horas de afluencia) por parte de aviones de la marina fue el procedimiento elegido para desalojar al presidente del poder y dejó un saldo de trescientos muertos civiles. Esa misma noche fueron saqueadas e incendiadas la Curia metropolitana y varias iglesias del centro de Buenos Aires, sin que la policía hiciera nada por impedirlo.

Al año siguiente, el fusilamiento del general Valle y de otros militares peronistas que preparaban una sublevación reintrodujo una práctica en desuso desde mediados del siglo XIX. Al mismo tiempo, los fusilamientos clandestinos, en los basurales de José León Suárez, de civiles comprometidos –o no– con el alzamiento, constituyeron una primera manifestación de terrorismo estatal. Bombas artesanales y sabotajes fueron la respuesta de la resistencia peronista.

Desde 1966 se estableció una dictadura militar que reprimió a trabajadores, estudiantes, intelectuales... y que provocó estallidos de protesta, como el cordobazo y el rosariazo.

En ese contexto de violencia represiva, comenzaron a aparecer los grupos guerrilleros. En 1959 los Uturuncos inauguraron el primer esbozo de guerrilla rural en Tucumán. El secuestro y la ejecución -o asesinato- de Aramburu – según el punto de vista- señaló la aparición pública de Montoneros en 1970. Poco después, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) creó su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Después de la “ejecución” del simbólico Aramburu, los militantes de origen peronista eliminaron figuras claves de la burocracia sindical: Augusto T. Vandor, José Alonso, José Ignacio Rucci... Por su parte, el ERP intentó crear un “foco revolucionario” en los montes tucumanos, atacó cuarteles y asesinó también a decenas de jefes militares.

En este contexto, el enfrentamiento entre distintas vertientes del peronismo (la llamada “tendencia revolucionaria” y la burocracia sindical) se tradujo en la masacre de Ezeiza, en el momento del arribo de Perón al país. Más tarde, en el ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, se organizó la Triple A, que en los años siguientes asesinará a centenares de dirigentes de izquierda, especialmente peronistas.

La ideología militar, centrada hasta entonces en la doctrina de la seguridad nacional y las fronteras ideológicas –según la cual el enemigo era el comunismo y su probable antesala, el peronismo- encontró en esa violencia generalizada el pretexto para evolucionar hacia la contra-insurgencia, articulada a partir de la idea de un enemigo mucho más peligroso y omnipresente: la denominada “subversión”. Por ella se entendía cualquier tipo de cuestionamiento al orden

económico, social o político existentes; cualquier tipo de organización popular o de pensamiento crítico. Así concebida, la *subversión* parecía infiltrada en toda la sociedad y se entendía que sólo podía ser eliminada con una operación de gran envergadura. Según este discurso, la *civilización occidental y cristiana* sólo podía ser salvada a costa de un genocidio.

Desde 1975, las fuerzas armadas pusieron en práctica esa ideología: además de liquidar a los grupos armados y sus organizaciones de superficie, asesinaron a dirigentes sindicales combativos, delegados de fábricas, organizadores barriales, militantes estudiantiles, intelectuales críticos, artistas y sacerdotes comprometidos, abogados defensores de presos políticos... Miles de desaparecidos, presos políticos, exiliados: era, para los militares, el “Proceso de reorganización nacional”, la llamada “guerra sucia” contra la *subversión*; para sus víctimas y para gran parte de la sociedad argentina, era una forma de terrorismo de estado.

Aplicada en forma masiva, esta represión generalizada contribuyó a silenciar toda posible reacción de la sociedad, con muy pocas excepciones. Al principio, sólo las Madres de Plaza de Mayo se atrevieron a testimoniar su dolor e indignación, acompañadas después por los otros organismos defensores de los derechos humanos. Esta paralización de la sociedad permitió la ejecución de una política económica igualmente drástica, que destruyó sectores enteros de la economía argentina y alteró sustancialmente la estructura social. Porque allí estaban – para estos militares y sus aliados- las raíces de la subversión.

Finalmente, ante la creciente impopularidad y el aislamiento internacional de la

dictadura, el régimen intentó un manotazo de ahogado para perpetuarse: la guerra de Malvinas. Tras el fracaso, totalmente desacreditado, el gobierno militar debió finalmente retirarse, dejando un país económica y socialmente devastado.

Remontando la cuesta

El periodo que se inicia entonces contrasta fuertemente con el anterior. Todos los gobiernos que se suceden son constitucionales; casi todos terminan su mandato: aunque Raúl Alfonsín debe anticipar la entrega del gobierno, sólo Fernando De la Rúa se ve obligado a renunciar, ante la presión de la calle. No hay golpes de estado ni dictaduras militares. Dos gobiernos entregan el poder a un sucesor del partido rival, cosa que no ocurría desde 1916. La corporación sindical y la militar pierden su protagonismo; la Iglesia es la única que conserva intacta su influencia, junto con los *lobbies* empresarios. Los partidos políticos recuperan las funciones que les atribuía la tradición liberal, encauzando la participación de la ciudadanía en el gobierno, y el sistema democrático es revalorizado por la sociedad como base fundamental de la convivencia.

La represión estatal no es sistemática, aunque las protestas de diciembre de 2001 se saldaron con treinta y dos muertos. La única acción de un grupo armado es el ataque al cuartel de La Tablada, en 1989. Parece que, por primera vez desde 1930, funcionara realmente el sistema democrático-liberal. Claro que la instalación de ese sistema no fue fácil. Después de tantos años de proscripción y dictaduras, con experiencias democráticas tan breves, se trataba de

reinventar un sistema político que prácticamente no había existido en la Argentina durante los últimos cincuenta años. Ése fue el gran logro del gobierno de Alfonsín.

No pudo resolver, en cambio, la situación económica: la gigantesca deuda externa heredada del “poceso” no hizo más que aumentar durante las décadas siguientes y se convirtió en el principal obstáculo que impedía el crecimiento de la economía. La inflación crónica y elevada desembocó en picos hiperinflacionarios en 1989 y 1990: sólo Carlos Menem y Domingo Cavallo lograron controlarla.

La cuadratura del círculo

El repliegue de las fuerzas armadas y su desaparición de la escena política dejó al gran capital nacional y extranjero sin su *partido* preferido. Pronto encontrará, sin embargo, un reemplazante, con la ventaja adicional de que éste es capaz de ganar las elecciones puesto que lleva la etiqueta “peronista”. En el periodo anterior, habían sido principalmente las dictaduras militares las que impusieron la ortodoxia liberal, la preferida del *establishment*, a través de ministros como Álvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. En este periodo, en cambio, las políticas neoliberales se concentraron sobre todo en el gobierno constitucional de Carlos Menem.

Estas políticas estaban por entonces de moda en el Primer Mundo (Ronald Reagan en los Estados Unidos; Margaret Thatcher en Gran Bretaña) y eran predicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Menem fue su *mejor*

alumno.

Se trataba de *achicar el estado* mediante la privatización de sus empresas y el abandono de muchas de sus funciones; de *desreglamentar* la economía, dejando actuar a las leyes del mercado; de eliminar la protección de la industria nacional abriendo la puerta a las importaciones. Lo que permitió a Menem aplicar estas políticas conservando la mayoría electoral fue sobre todo el éxito de su ministro de economía, Domingo F. Cavallo, contra el principal enemigo de los argentinos en ese momento: la inflación. La *convertibilidad* (paridad 1 peso- 1 dólar) permitió controlarla o, al menos, dejarla en estado latente. Teniendo en cuenta la hiperinflación con que terminó el gobierno de Alfonsín y empezó el gobierno de Menem, eso significó un respiro para todos.

Pero las consecuencias negativas de esas políticas no tardaron en manifestarse. El peso, sobrevaluado, que dificultaba las exportaciones y estimulaba las importaciones, perjudicaba a muchos sectores y aumentaba el déficit de la balanza comercial. Una vez privatizada la mayoría de las empresas estatales, las divisas que entraban para pagarlas y que compensaban en parte ese déficit iban disminuyendo. La concentración y centralización del capital en manos de grandes grupos argentinos y extranjeros, así como la importación masiva de bienes de consumo manufacturados producían la desaparición de gran número de pequeñas y medianas empresas nacionales. La utilización de nuevas tecnologías en las grandes empresas multinacionales reducía la necesidad de mano de obra y la denominada “racionalización” de las empresas estatales y privatizadas se traducía en despidos masivos. Todo esto provocaba un rápido incremento de la desocupación, que alcanzaría a más del 18 por

ciento de la población activa en 1996.

Lejos del *primer mundo* prometido, el país se iba acercando rápidamente al tercero, con un aumento de la exclusión y la pobreza en los sectores sociales y geográficos que quedaban al margen de la modernización. En este contexto, la Alianza formada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaso) centró su campaña en la denuncia de la corrupción del gobierno menemista, pero muchos de los votos que recibió traducían el descontento de amplios sectores ante las consecuencias sociales del modelo neoliberal. La insistencia del gobierno de De la Rúa en mantener y ampliar las políticas *de ajuste* agravaron aún más la situación social, y el “corralito” ideado por Cavallo para salvar a los bancos fue vivido por muchos de los pequeños ahorristas afectados como una expropiación de sus depósitos. Entonces, se produjo el estallido. Cacerolazos y saqueos de supermercados obligaron a De la Rúa a renunciar y desembocaron en un peligroso vacío de poder y el descrédito del conjunto de la clase política: “que se vayan todos”.

En ese marco tuvo lugar la declaración del *default*, es decir, la cesación del pago de la deuda externa, y el país quedó afuera de los circuitos financieros internacionales. 2001 fue el año en que la crisis económica y social tocó fondo. El abandono de la convertibilidad, con una fuerte devaluación, precedida por una gigantesca fuga de capitales, implicó una colosal transferencia de riqueza que profundizó el abismo entre los sectores privilegiados y los desfavorecidos.

Impunidad o justicia

Otro factor que haría peligrar la estabilidad del nuevo sistema fue una herencia de la última dictadura militar, que atravesó todo el periodo democrático. La cuestión que se planteaba era qué hacer con los crímenes cometidos durante el “proceso”.

Para la casi totalidad de los militares –ya sea porque participaron en el terrorismo de estado o, en el caso de los más jóvenes, por espíritu de cuerpo- el problema no era tal: aunque “sucio”, había sido una guerra, la habían ganado, y un ejército vencedor no tiene que rendir cuentas a nadie. La mayor parte de la derecha compartía este punto de vista o consideraba, al menos, que era un tema superado y que agitarlo impedía mirar hacia delante.

Para los familiares y amigos de los desaparecidos, para quienes fueron torturados o pasaron años en la cárcel o, en general, para los que veían el asunto desde un punto de vista ético, se trataba en cambio de una cuestión de justicia. La reconstrucción de una convivencia democrática no podía basarse en la impunidad; los organismos defensores de los derechos humanos y los partidos de izquierda compartían esta posición.

En este marco, Raúl Alfonsín hizo de la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos y el juicio a los culpables uno de los temas claves de su campaña electoral. Una vez en el gobierno, promovió la formación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y el juicio a los miembros de las juntas militares que habían gobernado durante el “proceso”. Eso produjo agitación y un estado deliberativo en las fuerzas armadas, que se

tradujeron en las rebeliones militares de la Semana Santa de 1987, de Monte Caseros y Villa Martelli en 1988; aparecieron entonces los denominados “carapintadas”. Ante la amenaza que estos movimientos representaban para la estabilidad del sistema democrático, el gobierno cedió a las presiones y dictó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, interrumpiendo los juicios.

Sin mayores escrúpulos éticos, Carlos Menem fue más lejos, decretando el indulto de los militares condenados por violación de los derechos humanos o por rebelión después de 1983. Con estas medidas, parecía que la impunidad había triunfado.

Sólo durante el gobierno de Néstor Kirchner se anularon las leyes de impunidad y el indulto, y se reanudaron los juicios. Pero el secuestro de Jorge Julio López, testigo en uno de esos procesos, muestra la capacidad de acción que conservan todavía algunos grupos remanentes y su decisión de impedir que se haga justicia.

La caja de sorpresas

Luego de cuatro elecciones presidenciales en las que se destacaba una clara mayoría (Alfonsín, Menem durante dos periodos, De la Rúa), la crisis política de 2001 y 2002 produjo la fragmentación de los grandes partidos tradicionales y la dispersión del electorado. En las elecciones de 2003, tres candidatos se presentaron con la apelación “peronista”; otros tres eran radicales o ex radicales. El candidato más votado, Carlos Menem, no recibió más que un 24 por ciento de los votos. Como no se presentó a la segunda vuelta, asumió la

presidencia el candidato que le seguía en número de votos, el poco conocido Néstor Kirchner, quien había obtenido un 22 por ciento.

Los primeros actos del presidente fueron tan inesperados como su elección: pase a retiro de las cúpulas militares, depuración de la Corte Suprema menemista, anulación de las leyes de impunidad y reanudación de los juicios. Ya pocos esperaban, después de veinte años, que se hiciera justicia.

Finalmente, otra sorpresa, cuyo responsable no fue únicamente Kirchner, sino también el ministro de economía nombrado por Eduardo Duhalde durante su breve presidencia, y mantenido por su sucesor: Roberto Lavagna. ¡El año 2004 cerró con superávit en las cuentas nacionales! Esto se debía al auge de las exportaciones, consecuencia de la fuerte demanda y de los buenos precios de los cereales y el petróleo en el mercado mundial, e impulsadas por la devaluación y el mantenimiento de un tipo de cambio favorable. El estado, por su parte, participó de esos ingresos a través de las retenciones, y es así como el habitual déficit presupuestario se transformó en excedente. Esto permitió que el estado volviera a invertir (Plan Nacional de Obras Públicas, Plan Federal de Construcción de Viviendas), contribuyendo así a la reactivación de la economía.

Desde el año anterior se había recuperado una tasa considerable de crecimiento económico, aumentando también los ingresos fiscales a través de los impuestos internos. Esto permitió al gobierno pagar sus deudas al FMI, liberándose así de su molesta tutela, y canjear la deuda externa privada en condiciones favorables. Asimismo, la disminución de la desocupación permitió a los trabajadores mejorar sus salarios de convenio, mientras que el gobierno

aumentó el salario mínimo y el monto de las jubilaciones, apoyando así la recuperación del mercado interno.

Claro que queda pendiente, todavía, la *deuda social*. Aunque en disminución, el número de pobres e indigentes, consecuencia en gran medida de la perduración del trabajo en negro y de los bajos salarios, continúa siendo inaceptable.

Pero, como en 1973 y en 1983, en 2003 la esperanza renace. Sólo el tiempo dirá si sus fundamentos son más sólidos que entonces.

I. EL DESCENSO A LOS INFIERNOS

Con la caída del peronismo comienza un proceso de deterioro político y social que culminará con el baño de sangre de 1975 a 1983; de ahí el título de esta primera parte.

Por cierto, la Argentina de 1955 distaba de ser un paraíso. La concentración del poder en manos de Perón volvía ficticias las formas constitucionales: tanto el parlamento como la justicia estaban totalmente subordinados al Poder Ejecutivo. Las libertades individuales estaban limitadas, legalmente, por la vigencia del *estado de guerra interno*, pero sobre todo, de hecho, por la acción intimidatoria de la policía. Casi toda la prensa escrita estaba en manos del estado o de personajes cercanos al régimen: clausurada *La Vanguardia*, expropiada *La Prensa*, el único diario no oficialista, *La Nación*, dependía de la asignación de cuotas de papel cada vez más mezquinas. El estado controlaba también todas las radios y la televisión: la oposición no tenía acceso a ellas.

La Confederación General del Trabajo (CGT), utilizada para controlar el movimiento obrero desde arriba, se había convertido en una correa de transmisión de las decisiones presidenciales. *La razón de mi vida*, de Eva Perón, era libro de lectura obligatorio en las escuelas primarias; en las secundarias, se aprendía la *Doctrina Nacional*. La figura de desacato al presidente permitía encarcelar a una persona por sus expresiones. En 1954, la asociación de abogados radicales censaba seiscientos ochenta y dos presos políticos y gremiales. Era, en suma, la *dictadura*, la *segunda tiranía* de la que hablaba la oposición (comparándola con la de Rosas), o aun el régimen *nazi-peronista*, *mala copia del fascismo europeo*, como también se lo denominaba.

La violencia verbal no era rara en los discursos de Perón, y a veces era seguida por la violencia física de sus partidarios. Por ejemplo, el 15 de abril de 1953, ante el estallido de dos bombas en un acto en la Plaza de Mayo, Perón –desde los balcones de la Casa Rosada- amenazó con “andar con el alambre de fardo en el bolsillo” e incitó a “dar leña”. Esa noche ardieron la Casa Radical, la Casa del Pueblo, socialista, y el Jockey Club. La policía detuvo a centenares de sospechosos de participar en el atentado terrorista, entre ellos Ricardo Balbín y Victoria Ocampo.

Sin embargo, para la mayoría de la población –según se manifestaba en elecciones periódicas y limpias- nada de eso tenía importancia. Totalmente identificada con el gobierno *del pueblo*, no sólo no sufría esas restricciones sino que justificaba su aplicación a los *contreras*. En las elecciones de 1954 el peronismo obtuvo el 62 por ciento de los votos.

En esos años, la Argentina era un país próspero, el más rico de América Latina y uno de los más industrializados. Su sociedad era más homogénea y menos polarizada que la de casi todos sus vecinos, de los que la distinguían también los niveles alcanzados en salud y educación. Tenía la legislación social más avanzada de la región y una de las más avanzadas del mundo. La desocupación casi no existía, el trabajo en negro tampoco, y la mayoría de los trabajadores tenían salarios que les permitían vivir dignamente. Todos tenían acceso a la educación primaria, secundaria y, cada vez más, universitaria. Las obras sociales de los sindicatos y los hospitales públicos aseguraban servicios médicos de calidad al alcance de todos. Las comisiones internas y el apoyo de los organismos oficiales garantizaban el respeto del trabajador en sus lugares

de trabajo y apuntalaban su sentimiento de dignidad. Todo esto se debía en gran medida a las políticas de Perón y explica el apoyo de los obreros y sectores populares a su gobierno.

Mientras tanto, en la Sección Especial de la Policía Federal y en las comisarías se continuaba practicando la tortura, como era habitual desde 1930. Sin embargo, después de su caída, Perón pudo afirmar que durante sus nueve años de gobierno sólo hubo un desaparecido: el Dr. Juan Ingalinella, militante comunista de Rosario, víctima de la tortura policial en 1955. Aunque podrían citarse otros casos, lo cierto es que el régimen peronista no practicó el asesinato de opositores, que se generalizaría veinte años después.

¿Qué hacer con el peronismo?

Desde 1952, el gobierno peronista enfrentó crecientes dificultades. En un contexto económico que empezaba a serle desfavorable, se notaba la escasa competitividad de una industria protegida y subsidiada, incapaz de exportar. La producción agropecuaria, desalentada por una política de moneda fuerte y por la relación de precios internos, se estancaba. Faltaban así las divisas necesarias para pagar las importaciones de materias primas, combustible y maquinarias indispensables para la industria. Los equipos se volvían obsoletos y, junto con el deterioro de los servicios (electricidad, transporte), reducían la productividad.

A falta de capitales que permitieran aumentarla introduciendo innovaciones técnicas, se puso el acento en la disciplina laboral reclamada por los patrones

(ausentismo, poder de los delegados en el taller o la planta...), lo que fue sentido por muchos trabajadores como una restricción a sus conquistas. Para contener la inflación, se tomaron medidas tendientes a reducir el consumo (eliminación de subsidios, liberación de alquileres...) y se congelaron los convenios colectivos por dos años. No era lo que sus partidarios esperaban del gobierno.

Una ley de radicación de capitales favoreció las inversiones extranjeras y se negoció un contrato petrolero con una filial de la Standard Oil. Las relaciones con los Estados Unidos mejoraron considerablemente con el apoyo del gobierno argentino a las intervenciones norteamericanas en Corea y en Guatemala. Todo esto fue visto como un retroceso por los sectores nacionalistas dentro y fuera del peronismo.

Finalmente, en 1954, el gobierno peronista entró en conflicto con la Iglesia, que lo había apoyado hasta entonces. La Fundación Eva Perón competía con las tradicionales instituciones católicas de beneficencia; la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) con sus organismos de encuadramiento de la juventud (Acción Católica); la fundación del Partido Demócrata Cristiano fue vista por Perón como un intento de competencia política. Poco dispuesto a escuchar las críticas, que comenzaban a manifestarse en los medios católicos, el gobierno respondió con una serie de medidas que desafiaban la influencia de la Iglesia en cuestiones claves: supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas, autorización del divorcio vincular, reapertura de los prostíbulos. Finalmente, un proyecto de reforma constitucional preveía la separación de la Iglesia y el estado.

La Iglesia respondió movilizando todos sus recursos: a la campaña de los medios de comunicación oficialistas respondían los curas desde el púlpito y los laicos en la calle. Además de movilizar sus propias fuerzas –buena parte de las clases medias-, sirvió de aglutinante de toda la oposición (como pudo verse en la procesión de Corpus Christi el 8 de junio de 1955, en la que participaron, por ejemplo, socialistas y comunistas). Los partidos opositores no respondieron en forma favorable a la propuesta de *pacificación* lanzada entonces por Perón y esperaban –activa o pasivamente- el derrocamiento de su gobierno.

Perón advirtió entonces la debilidad de sus apoyos. El Partido Peronista (PP), edificado sobre la obsecuencia y la adulación, cuyos miembros parecían más empleados públicos que militantes, se mostró incapaz de mover un dedo para defender al gobierno en dificultades. La CGT, también burocratizada, aunque el 31 de agosto de ese mismo año reunió una multitud para rechazar el retiro de Perón, ante la inminencia del golpe no insistió en su ofrecimiento de reservistas voluntarios al ministro de ejército para hacerle frente. En cuanto al temido reparto de armas a los obreros con que se había amenazado alguna vez, nadie parece haber pensado en ello.

De modo que el destino del gobierno peronista estaba en manos de las fuerzas armadas. Éstas, que lo habían apoyado desde 1946, fueron pasando progresivamente a la oposición: relacionadas familiar y socialmente con las clases altas y medias antiperonistas, desconfiadas del papel central asignado a la CGT en el régimen, hostiles a la *peronización* del ejército, algunos militares ya habían intentado un golpe en 1951. Tres años después, el conflicto del gobierno con la Iglesia empujó a muchos militares católicos a tomar partido

contra el peronismo.

“Deben ser los gorilas...”

Era el estribillo de una cancioncita de moda: “Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí...” Cuando empezaron a circular los rumores sobre conspiraciones militares, el humor popular estableció la relación: el viejo e inofensivo *contrera* se convirtió en el peligroso *gorila*. Éstos, relativamente dispersos en el ejército, estaban mucho más cohesionados y dominantes en la marina. También se organizaron *comandos civiles* armados dispuestos a secundarlos, con la participación de militantes de los partidos políticos autodenominados “democráticos” (radicales, conservadores, socialistas, demócratas progresistas, demócratas cristianos) y de grupos nacionalistas.

Varias conspiraciones estaban en marcha en el ejército y la marina cuando el violento discurso de Perón del 31 de agosto –en el que anunció que por cada uno de sus partidarios caerían cinco de sus enemigos- pareció marcar el fin de la *pacificación*. La propuesta de la CGT, que ofreció al ministro de ejército su colaboración para combatir a los conspiradores, despertó el fantasma de las milicias obreras, algo muy temido por los militares porque suponía el peligro de la guerra civil.

En esas circunstancias, el 16 de septiembre de 1955, el general Eduardo A. Lonardi proclamó en Córdoba la “revolución libertadora”, mientras el contralmirante Isaac F. Rojas asumía el mando de la flota de mar en marcha hacia el Río de la Plata. Aunque la mayor parte del ejército no participaba en el

levantamiento, tampoco mostraba demasiada disposición a combatir a los insurrectos. El 20 de septiembre, luego de delegar el mando en una junta militar, Perón se refugió en la embajada de Paraguay (“Ay, pobre Paraguay”, coreaban los manifestantes).

Terminaba así una de las experiencias políticas más importantes para los argentinos en el siglo XX. La década peronista había transformado el país económica, social y políticamente y dejaba un recuerdo que con los años se mostraría indeleble. Pero eso no se sabía en aquellos días, de ahí que el principal problema que se planteaba a los llamados “libertadores” era qué hacer con el peronismo.

“Ni vencedores ni vencidos”

En principio, según la visión antiperonista de la realidad, el problema no parecía tan grave. Si se consideraba que la *dictadura* peronista se había basado en la represión de los opositores, el reparto de dádivas y prebendas entre sus partidarios y el monopolio de los medios de comunicación, era lógico pensar que, al perder el uso de esos instrumentos, el peronismo se desbandaría rápidamente. Esto sólo resultó cierto en el caso del partido, pero no en el de los sindicatos ni los barrios populares, donde permaneció sólidamente implantado.

Dos posiciones se delinearon entonces en las fuerzas armadas: nacionalistas y liberales. Antes de seguir, apuntemos que muchas palabras adquieren en la época un significado que no es el mismo que tienen en la actualidad, ni en el resto del mundo hispanohablante ni en idiomas extranjeros. Ya hemos dicho

que “democracia” fue, en este contexto, proscripción de la mayoría. “Nacionalismo” significaba entonces, en términos generales, anti-liberalismo. Y “liberalismo” no era lo mismo que en Europa ni en los Estados Unidos, sino que aquí se traducía como anti-peronismo. Claro que esto no significa que todos los *nacionalistas* fueran peronistas; Lonardi y el grupo que lo rodeaba son ejemplo de lo contrario. Es que la ideología *nacionalista* incluía otros aspectos: por ejemplo, la reivindicación de la raigambre hispánica como matriz esencial de la nacionalidad y del catolicismo como elemento fundamental de su esencia. Por eso, cuando Perón se enfrentó con la Iglesia, muchos de los que habían apoyado su ascenso al poder desde 1943 y su gobierno hasta 1954 pasaron a la oposición.

Para los *nacionalistas*, el peronismo tenía el mérito de haber inculcado a sus seguidores, durante diez años, una ideología *humanista y cristiana* (es decir, básicamente anticomunista) y de constituir así una barrera que impedía la difusión del comunismo en los medios obreros. El estado semi-corporativo que había establecido –en el que sindicatos, organizaciones patronales, fuerzas armadas, Iglesia (hasta la ruptura) sustituían de hecho a los partidos como actores políticos principales- no estaba muy lejos del que algunos de estos sectores *nacionalistas* consideraban ideal. Aseguraba el orden, la autoridad, la cohesión social, la unidad de la nación... todo lo contrario del estado liberal al que adhería, en cambio, una buena parte de la opinión católica.

Lo único que molestaba en este cuadro era Perón: personalista e imprevisible. Se trataba, entonces, de constituir una suerte de peronismo sin Perón, lo que implicaba mantener en pie tanto al PP como a la CGT para permitir luego su

cooptación. Esta tendencia planteaba entonces el lema “Ni vencedores ni vencidos”, que retomaba el de Justo José de Urquiza después de la batalla de Caseros, en 1852.

Pero este proyecto se enfrentaba a varias dificultades. Por empezar, desde el exilio, Perón defendería su liderazgo único con uñas y dientes. En segundo lugar, los *nacionalistas* no disponían de ninguna figura capaz de reemplazarlo. Finalmente, los peronistas no aceptaban otro líder (“Perón sí, otro no”). El único partido político afín a estos grupos nacionalistas católicos, que se organizó en esos días, fue la Unión Federal (UF).

Los *liberales* pensaban que la cooptación de las organizaciones peronistas no era posible y que, para que pudiera funcionar un sistema democrático-liberal, era preciso eliminar por completo al peronismo, no sólo de las instituciones y de la competencia electoral, sino incluso de la memoria de los argentinos.

Esta era la posición predominante en la marina y en una parte del ejército; ellos eran los verdaderos *gorilas*. Contaban, además, con el apoyo de los partidos políticos “democráticos”: la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Demócrata (PD), el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido Socialista (PS) y el recientemente creado Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su lema: “Mayo, Caseros, Revolución Libertadora”.

El 23 de septiembre de 1955, Lonardi asumió la presidencia ante una multitud comparable a las que solía reunir Perón en la Plaza de Mayo, pero de distinta composición social y que esta vez gritaba “libertad”. Rodeado de nacionalistas católicos (como su asesor Clemente Villada Achával), formó su gobierno con

ministros de las dos tendencias (Mario Amadeo, *nacionalista*, en el Ministerio de Relaciones Exteriores; Eduardo Busso, *liberal*, en el Ministerio del Interior) y no tomó ninguna medida contra el PP ni contra la CGT. Por ello, fue blanco de las críticas de los sectores *liberales* y de los partidos “democráticos”, que habían aceptado colaborar con el gobierno integrando una Junta Consultiva presidida por el contraalmirante Rojas. Finalmente, cuando Lonardi intentó reforzar el ala *nacionalista* de su gabinete con el nombramiento de un ministro de esa tendencia, los miembros de la Junta Consultiva renunciaron (“Rojas sí, nazis no”, coreaban sus partidarios) y el 13 de noviembre el presidente fue obligado a dimitir. El general Pedro Eugenio Aramburu, jefe del ala *liberal*, asumió la presidencia en su reemplazo, y Rojas continuó ejerciendo la vicepresidencia, fortalecido por la nueva situación.

La Junta Consultiva se reconstituyó, eliminando a los representantes de la UF que no se habían solidarizado con los demás y reemplazándolos por miembros del PDC. El intento *nacionalista* había fracasado, llegaba la hora de la *desperonización*.

La desperonización

El modelo era la *desnazificación* de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial: se trataba de eliminar totalmente el peronismo de la política y aun de la cabeza de los argentinos. La identidad política peronista debía disolverse y sus partidarios serían absorbidos por los partidos “democráticos”, que

expresarían las distintas corrientes de opinión y competirían libremente por el gobierno en un sistema en el que la mayoría respetaría los derechos y libertades de las minorías.

Para este *lavado de cerebros*, el gobierno contaba con la casi totalidad de los medios de comunicación (radios, televisión, diarios, revistas) que permanecían en manos del estado. En la enseñanza secundaria, una nueva asignatura, *Educación democrática*, reemplazó a la que había difundido la propaganda peronista con el nombre de *Cultura ciudadana*. La propaganda antiperonista no fue menos masiva que la del *régimen depuesto*, pero su éxito fue menor.

Esta vez, la CGT reaccionó, proclamando un paro general por tiempo indeterminado. Pero ya era tarde: la central fue intervenida y sus principales dirigentes detenidos e inhabilitados; lo mismo se hizo con los sindicatos más importantes. Las dos ramas del PP (masculina y femenina) fueron disueltas, y quienes habían desempeñado cargos públicos durante el *régimen depuesto* fueron inhabilitados. Se prohibió todo tipo de propaganda peronista, incluyendo los símbolos del partido y los nombres de sus líderes históricos; para evitar mencionar a los innombrables, la prensa hablaba, por ejemplo, de “la segunda esposa del tirano prófugo”. El cadáver embalsamado de Evita fue secuestrado y escondido en Europa, como para anular su poder simbólico.

Una junta de recuperación patrimonial investigó las cuentas y los bienes de los funcionarios peronistas y muchos fueron encausados por enriquecimiento ilícito. Los vestidos *haute-couture* y las joyas de Evita fueron exhibidos como prueba del lujo que había rodeado a la *abanderada de los humildes*. Incluso las

relaciones de Perón con una adolescente de la UES se hicieron públicas. Sin embargo, nada de eso impresionaba a los destinatarios de esa propaganda, que respondían: “Puto y ladrón, lo queremos a Perón”.

De pronto, la comedia se transformó en drama: un grupo de oficiales retirados, suboficiales y civiles, dirigidos por el general Juan José Valle, intentó organizar un levantamiento. El 9 de junio de 1956, veintisiete presuntos implicados fueron fusilados: los militares (entre ellos, el general Valle), después de juicios sumarios, en establecimientos castrenses; los civiles, en forma clandestina, en los basurales de José León Suárez, inaugurando la práctica del terrorismo de estado. Hacía casi un siglo que no se aplicaba en Argentina la pena de muerte por razones políticas (con la excepción del anarquista Severino Di Giovanni), pero estos fusilamientos sólo fueron recibidos con horror por los peronistas, que, desde entonces, llamaron “fusiladora” a la revolución. En cambio, casi todos los “democráticos” coincidieron con la aprobación de Américo Ghioldi: “Se acabó la leche de la clemencia”. Poco después, *caños* (bombas artesanales) y sabotajes revelaban la actividad de una resistencia peronista. Catorce años más tarde, los fusilamientos de 1956 fueron uno de los cargos presentados por Montoneros para justificar la *ejecución* de Aramburu.

En marzo de 1957, se fugó del penal de Río Gallegos un grupo de presos políticos entre los que se contaban Héctor J. Cámpora (ex presidente de la Cámara de Diputados), José Espejo (ex secretario general de la CGT), Guillermo Patricio Kelly (dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista), el empresario Jorge Antonio y el futuro inspirador del peronismo revolucionario, John William Cooke. Para otros cientos de peronistas, la “libertadora” significó

años de prisión y de persecuciones.

Volver al campo

En cuanto a la situación económica, Lonardi había encargado a Raúl Prebisch, prestigioso secretario general de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, un estudio, del que pronto presentó un informe preliminar. Este señalaba, como principal problema, el cuello de botella del sector externo: el valor de las exportaciones era insuficiente para adquirir los insumos necesarios para la industria. La culpa se atribuía al *régimen depuesto*, que había desalentado la producción agropecuaria utilizando las divisas generadas por las exportaciones para financiar al sector industrial; dilapidado las reservas de oro y divisas en la repatriación de la deuda externa y las nacionalizaciones y favorecido a la industria liviana a expensas de la producción de energía y de la industria pesada. El otro problema que este informe detectaba era la inflación, consecuencia de la política monetaria y salarial expansiva, el déficit fiscal y la emisión para cubrirlo.

Las propuestas incluían entonces una serie de medidas para estimular la producción agropecuaria y las exportaciones tradicionales; otras, destinadas a reducir el gasto público (racionalización de la administración, privatización de empresas públicas, eliminación de subsidios). Recomendaba también recurrir al capital extranjero, en forma de inversiones directas o de créditos, y reducir la intervención del estado en la economía y las excesivas reglamentaciones que pesaban sobre esa actividad.

Algunas de estas recomendaciones fueron puestas en práctica: devaluación del peso; unificación del tipo de cambio y fluctuación en un mercado libre; adhesión al FMI y al Banco Mundial. Las medidas favorables al agro (tipo de cambio elevado, escasa imposición a las exportaciones) eran criticadas por los sectores industrialistas, que acusaban al gobierno de pretender retornar a una economía agro-exportadora (las caricaturas de la época representaban a Aramburu como una vaca). Pero no hubo una política económica coherente ni continuada: en tres años se sucedieron cuatro ministros de economía.

En cambio, sí se avanzó decididamente en la recuperación de la *disciplina* laboral. Con la disolución de las comisiones internas y con el apoyo del estado, patrones y gerentes pudieron afirmar su autoridad en los lugares de trabajo y *racionalizar* los procesos productivos, aumentando la intensidad del trabajo y despidiendo personal. Esos despidos solían ser selectivos y afectaban a los delegados más activos, considerados como obstáculos a la productividad, en un clima de revancha patronal. La suspensión de los convenios colectivos, por su parte, significó una caída del salario real que disminuía el coste del trabajo. Multitud de huelgas se convocaban para protestar contra este deterioro pero, con los sindicatos intervenidos y el apoyo del estado a los patrones, pocas tenían éxito. Todo eso reforzó la identificación de la clase obrera con el peronismo: los hechos eran más elocuentes que la propaganda oficial.

En septiembre de 1957, se intentó la normalización de la CGT, pero el Congreso normalizador mostró una profunda división del movimiento obrero, paralela a la que atravesaba al conjunto de la sociedad. Por un lado, los *32 gremios democráticos*, antiperonistas, recuperados muchos de ellos por sus

antiguos dirigentes socialistas; por otro, las *62 organizaciones peronistas*, que incluían a los sindicatos más importantes. Inhabilitados los antiguos dirigentes – y poco preparados para gestionar una situación tan conflictiva con el gobierno– una nueva capa de sindicalistas comenzaba a emerger: sus figuras más representativas serían José Alonso de la Asociación Obrera Textil (AOT) y Augusto T. Vandor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En ese contexto, aumentaron las tensiones dentro de las fuerzas armadas alrededor de la fijación de un cronograma para la salida electoral. La enigmática frase de Aramburu, “Ni un minuto antes ni uno después”, ya no bastaba. La marina y los sectores más *gorilas* del ejército no querían llamar a elecciones antes de terminar la *desperonización*, eran denominados *quedantistas*. La mayoría del ejército, temiendo las divisiones internas que producía la permanencia en el poder, prefería hacerlo cuanto antes. Pero: ¿a quién se le entregaría el poder?

Para algunos, sólo debía entregarse el poder a un partido político que se identificara con la “revolución libertadora”: eran los *continuistas*; otros pensaban que debía entregarse a quienquiera ganara las elecciones y que el ejército debía retirarse del terreno político: eran los *profesionalistas*. El debate no era abstracto, porque se refería a los partidos que podían obtener realmente la mayoría electoral: las dos fracciones en que se había dividido la UCR: la UCR del Pueblo (UCRP), próxima al gobierno, y la UCR Intransigente (UCRI), que se oponía a su política económica y a la *desperonización*. También se habían dividido los conservadores en un Partido Demócrata Nacional (PDN), antiperonista, y un Partido Conservador Popular (PCP, Vicente Solano Lima)

próximo al peronismo. El PS se escindió en un PS Democrático (PSD, antiperonista, Américo Ghioldi) y un PS Argentino (PSA, Alfredo Palacios, que trataba de recuperar la confianza de los trabajadores).

En este contexto, para saber a qué atenerse en cuanto al peso relativo de estas fuerzas políticas, el gobierno *de facto* decidió convocar a elecciones para reunir una convención constituyente, antes de las elecciones presidenciales.

El recuento globular

La reunión de una convención no era, en realidad, indispensable. El gobierno había derogado por decreto la constitución de 1949 y pocos pensaban introducir modificaciones sustanciales a la de 1853. Pero la elección de julio de 1957 sirvió para despejar las incógnitas en cuanto al panorama político real, por eso se habló de un *recuento globular*. Para que fuera más preciso (y para aumentar la representación de los pequeños partidos) se estableció un sistema de representación proporcional. No hubo grandes sorpresas: el peronismo, pese a no disponer de ninguna estructura organizativa ni de medios de difusión, obtuvo más de dos millones de votos en blanco, el 24 por ciento del padrón electoral. Si a ello se le suman casi un millón de abstenciones –lo que, por cierto, es discutible– llegaría al 35 por ciento. Seguía siendo, pues, la primera minoría.

Los dos partidos radicales obtenían porcentajes más o menos similares (UCRP 24 por ciento, UCRI 21 por ciento) y el 30 por ciento restante se dividía entre los otros partidos “democráticos” (18% del padrón), el partido comunista (PC), la UF, y una treintena de pequeños partidos.

La convención constituyente no llegó a funcionar mucho tiempo: al retirarse los convencionales de la UCRI –que no reconocían su legitimidad-, y luego los sabattinistas y conservadores, quedó sin quórum para sesionar. La actividad política se concentró entonces en la preparación de las elecciones presidenciales, convocadas para el 24 de febrero de 1958.

El *recuento* había demostrado que ningún partido alcanzaba, en forma aislada, una mayoría suficiente. Las alianzas políticas –que Yrigoyen había bautizado *contubernio*- recordaban demasiado a las de la *década infame*, igualmente condenada por peronistas y radicales. Ambas fracciones de la UCR eran dirigidas por miembros de la tendencia denominada *intransigente*, particularmente hostil a las alianzas extra-partidarias. No había muchas alternativas: ganaría las presidenciales quien obtuviera el voto peronista. Tampoco en esto había muchas posibilidades: el único candidato que podía pretenderlo era Frondizi.

Líder del Movimiento de Intransigencia y Renovación y presidente del comité nacional de la UCR desde 1954, Frondizi había dirigido la oposición al peronismo, básicamente en el ámbito parlamentario. Joven y brillante intelectual, representaba la tradición más progresista del radicalismo (el programa de Avellaneda de 1945), cuyas ideas y estilo había modernizado considerablemente.

Pero todo esto despertaba también reacciones contrarias, no sólo del sector *unionista*, minoritario en el partido, sino también entre los sabattinistas e incluso dentro de su propia tendencia, por ejemplo, Ricardo Balbín en la provincia de

Buenos Aires. La proclamación de su candidatura presidencial por la convención nacional en noviembre de 1956 precipitó la división. Desde entonces, las dos UCR se fueron diferenciando, principalmente, debido a sus posiciones frente al gobierno. Mientras la UCRP, dirigida por Balbín, apoyaba en términos generales la política *liberal* (el ministro del Interior pertenecía a este partido), la UCRI adoptaba progresivamente actitudes cada vez más críticas frente a la política económica y la proscripción del peronismo. Eso le permitiría acercarse a los dirigentes peronistas y facilitaría el camino de la negociación.

En esa negociación, tanto Frondizi como Perón tenían algo que ofrecer y algo que ganar. Perón podía ofrecer dos millones de votos; Frondizi, la posibilidad de llegar al gobierno en las condiciones impuestas por la “libertadora”. Pagaría esos votos prestados con la legalización del partido y la devolución de los sindicatos. El pacto, negociado por Rogelio Frigerio y John W. Cooke y mantenido secreto, permitió el triunfo de Frondizi pero se convirtió, también, en el principal problema que debió enfrentar su gobierno.

Los vencedores vencidos

Es el título de un libro sobre la “revolución libertadora” que expresa cabalmente el sentimiento de sus partidarios ante el triunfo de Frondizi, que era también el triunfo de Perón. El fracaso de estos “libertadores” en su objetivo principal – eliminar el peronismo- determinaría en gran medida la evolución política de las décadas siguientes.

Algo parecido había ocurrido en 1930. El ejército, dirigido por el general José F.

Uriburu, había intentado entonces eliminar la supuesta *demagogia* yrigoyenista, sustituyendo el sistema democrático-liberal por un sistema corporativo. Al fracasar, debió ceder el poder a los partidos liberales conservadores, que sólo pudieron evitar el retorno de la *demagogia* recurriendo al *fraude patriótico* durante todo el decenio.

Sólo el régimen militar de 1943 a 1946 había logrado introducir cambios duraderos en el sistema político y asegurar su continuidad mediante el triunfo electoral. Pero el artífice de ese éxito había sido Perón, y no había ningún Perón entre los “libertadores”.

Gobiernos bajo tutela

Desde 1930, los militares argentinos se sentían obligados a *salvar a la patria* cada diez años aproximadamente (1930, 1943, 1955, 1966, 1976). Ante una crisis política, consideraban que había llegado *la hora de la espada*, única que podía cortar el nudo gordiano, y tomaban el poder, sin encontrar demasiada resistencia y con el apoyo de los sectores civiles más o menos amplios que solían pedir su intervención. Pero, hasta 1966, siempre habían considerado esta toma del poder como una situación transitoria y, dos o tres años después, restablecían el sistema constitucional.

Claro que, para que la “revolución” no hubiera sido en vano, todas trataban de dejar un heredero, consustanciado con el proyecto militar y dispuesto a continuarlo. Los únicos que lo lograron plenamente fueron quienes gobernaron entre 1943 y 1946. Perón se presentaba como el continuador de la *revolución* del 4 de junio, y ese fue el argumento principal que llevó a la mayoría de los militares de la época a apoyar su candidatura y, luego, su gobierno, y que dejó a los sectores anti-peronistas de las fuerzas armadas en minoría hasta 1955.

La “revolución libertadora” no tuvo la misma suerte: su heredera “legítima”, la UCRP, a pesar de contar con el apoyo del gobierno, fue derrotada por el pacto Perón-Frondizi. Los militares se retiraron del poder con amargura y, a partir de entonces, el síndrome se transformó en una enfermedad permanente. Autoproclamados custodios de *la libertad, la democracia y la civilización occidental y cristiana* (es decir, del antiperonismo y el anticomunismo), se impusieron el deber de vigilar constante y atentamente a los gobiernos elegidos

para que no atentaran contra esos principios fundamentales, y de intervenir cuando tomaran un rumbo que creían equivocado. Es lo que Alain Rouquié llamó “golpe de estado permanente”.

Elegido por más de cuatro millones de votos (contra los dos millones y medio obtenidos por Balbín), Frondizi era mirado con especial desconfianza por los militares. Era un intelectual –es decir, alguien retorcido y capaz de embrollar con su dialéctica-, que había firmado un pacto con *el diablo* (a quien debía al menos la mitad de sus votos) y, para colmo, disimulaba sus ideas *comunistas*, ya que había sido secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Para el lector extranjero o demasiado joven, habría que recordar que, en el lenguaje de los militares argentinos, *comunista* era lo que en países menos advertidos se llamaba *progresista*, es decir, la ideología más nociva y peligrosa.que se podía portar)

Porque, al mirar más allá de las fronteras del país, esos militares habían descubierto que el peronismo podía ser la antesala de otra amenaza más general: el comunismo. Así, cuando las elecciones provinciales de Mendoza, en marzo de 1959, mostraron un fuerte incremento de votos por el PC (que duplicó los recibidos el año anterior), cundió una ola de pánico entre los militares macartistas: el tan temido trasvase del peronismo al comunismo se estaba realizando. Un mes después, Frondizi fue obligado a prohibir toda actividad del PC y de sus organizaciones afines -que habían apoyado su candidatura-, clausurando sus locales y publicaciones. Con eso, por cierto, no bastaba: se sostenía que el comunismo era experto en todo tipo de infiltraciones, por lo cual era preciso redoblar la vigilancia para que el sospechoso presidente no

precipitara al país en un abismo.

Las "traiciones" de Frondizi

Los comunistas no serían los únicos en sentirse traicionados por Frondizi. Éste había introducido también en la Argentina las ideas *desarrollistas*, en boga por entonces en América Latina y el Tercer Mundo, divulgadas en especial por un difundido libro del economista norteamericano Walt Whitman Rostow, *Las etapas del desarrollo económico*. Después de analizar el proceso que había llevado a su situación actual a los países *desarrollados*, Rostow concluía que los *subdesarrollados* debían seguir el mismo camino: a partir de un determinado momento (el *take-off* o despegue) la producción industrial superaría a la agropecuaria; ésta aumentaría su productividad permitiendo el traspaso de mano de obra al sector secundario; la industria pesada completaría la estructura productiva y el país iría sustituyendo sus exportaciones de materias primas y alimentos por manufacturas de mayor valor agregado, reduciendo los efectos del deterioro de los términos del intercambio y su dependencia de los países centrales. Se iniciaría así un periodo de *crecimiento autosustentado* que lo llevaría al *desarrollo*.

Pero, mientras que ese proceso había sido espontáneo en el siglo XIX, a mediados del XX era preciso provocarlo, lo cual implicaba una voluntad política. Para producir el *take-off* se necesitaba una inversión masiva de capitales que, dada la escasez del capital privado en los países *subdesarrollados*, sólo podía provenir del estado y de la inversión extranjera. El primero realizaría las

inversiones menos rentables a corto plazo (infraestructuras, energía, industria pesada), atrayendo al capital extranjero para las más rentables y dinámicas (como la industria del automóvil). Una reforma agraria permitiría modernizar la agricultura y ampliar el mercado interno.

Fue a partir de estas ideas que Frondizi había criticado la política económica de la “revolución libertadora”. Según Frondizi, esta política, favorable al sector agropecuario, pretendía un imposible retorno a la Argentina agroexportadora anterior a 1930 y negaba la importancia adquirida desde entonces por la industria. Además, iba acompañada por un deterioro del salario real y de la participación de los asalariados en el ingreso nacional (que, efectivamente, durante la “libertadora” había pasado del 50 al 45 por ciento)

Para combatirla, Frondizi llamaba a la formación de un frente *nacional y popular*, integrado por los sectores *progresistas* de la burguesía nacional, la clase obrera y los sectores populares. En este sentido, coincidía con la propuesta del PC, lo cual le ganó el apoyo inicial de éste. La prestigiosa revista *Qué sucedió en 7 días*, dirigida por Rogelio Frigerio, difundía estas ideas en los medios juveniles y de izquierda.

Para completar la marcha hacia una *economía industrial integrada* –según esta propuesta– la Argentina debía desarrollar fundamentalmente las industrias básicas (siderurgia, químicas, cemento), las que elaboraban bienes de producción (maquinaria, tractores) y de consumo duraderos (automóviles, camiones). Una parte de las divisas necesarias para equipar esas industrias podría obtenerse del autoabastecimiento en petróleo, que representaba

alrededor de un 20 por ciento del valor de las importaciones. Otra, del capital extranjero, cuya inversión en América Latina era impulsada en los Estados Unidos por la *Alianza para el Progreso* de John F. Kennedy. El estado completaría la red vial, permitiendo así la integración del territorio, y produciría también la energía eléctrica necesaria. Era el programa que seguía Brasil desde 1956 (impulsado por Juscelino Kubitschek) y que, aplicado en forma coherente y continuada, tendría allí un éxito considerable.

Pero lo que más contribuyó a la popularidad de Frondizi fue su posición sobre el petróleo. La importación de combustible pesaba cada vez más en la balanza comercial. Ese fue uno de los motivos que llevó a Perón a negociar un contrato con la Standard Oil para que ésta lo produjera en el país. Pero esto chocaba con un tabú de la política argentina: el que reservaba el monopolio de todas las etapas de la actividad petrolera a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Frondizi fue uno de los más agudos críticos de ese contrato y escribió un libro, *Petróleo y política*, sobre el poder de las grandes empresas petroleras, la amenaza que representaban las concesiones para la independencia económica y la soberanía nacional y la necesidad de mantener el monopolio de YPF. Fue sobre todo este discurso anti-imperialista el que le valió el apoyo de la mayor parte de la izquierda argentina, así como de los grupos nacionalistas.

Cuál no sería la sorpresa de esos sectores y también la del propio partido del presidente cuando, en julio de 1958, se supo que el gobierno había firmado una serie de contratos (que éste llamaba *locación de obras* y la oposición, *concesiones*) con varias empresas norteamericanas, sin que mediara ninguna discusión pública ni parlamentaria. Frondizi presentaba los contratos como el

comienzo de la *batalla del petróleo*, que llevaría al autoabastecimiento; distinguía entre nacionalismo *de medios* y *de fines*, entre la teoría y la práctica, etcétera. Para los que habían apoyado sus posiciones anteriores fue una simple traición a sus compromisos electorales. Los partidos opositores declararon que no reconocerían la legitimidad de esos contratos y el vicepresidente Alejandro Gómez, que se oponía a este giro, por lo cual era acusado de conspiración, renunció.

Entre la estabilización y el desarrollo

El programa desarrollista pronto tuvo que ceder la prioridad a preocupaciones más inmediatas: a fines de 1958, la inflación alcanzaba un 68 por ciento. Reflejaba, en parte, el aumento salarial del 60 por ciento, con el que Frondizi comenzó a pagar su deuda al sindicalismo peronista y que los empresarios rápidamente trasladaron a los precios. Pero también se debía al financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión. El gobierno lanzó entonces un plan de estabilización bastante ortodoxo: mercado de cambios único y libre, con devaluación del peso; reducción del gasto público (limitación de salarios y congelamiento de vacantes para el personal del estado; suspensión de inversiones estatales; aumento de tarifas de los servicios públicos...) Eso no impidió que la inflación siguiera subiendo (alcanzó el 129 por ciento en 1959) y que el gobierno recurriera, en junio de ese año, a quien decía tener la fórmula mágica para frenarla: el capitán-ingeniero Álvaro Alsogaray, conocido por su ortodoxia liberal, en las antípodas de las teorías desarrollistas. Hermano de un

prestigioso general y muy popular entre los militares y las corporaciones empresarias -aunque considerado poco serio por sus colegas-, Alsogaray continuó en la misma línea y logró una cierta estabilidad, financiada en gran parte por el crédito externo (FMI). Aunque presentada como provisoria (por medio de una frase que se hizo famosa: "hay que pasar el invierno"), esta política desembocó en una recesión que contrastaba demasiado con el desarrollo prometido y aumentó la decepción de quienes habían votado un proyecto distinto.

Otras medidas, más acordes con la perspectiva desarrollista, estaban contenidas en la nueva ley de radicación de capitales, que ampliaba las ventajas concedidas al capital extranjero por la ley dictada a fines del peronismo, en especial en cuanto a remisión de beneficios y repatriación de capitales. Los contratos petroleros habían sido muy bien recibidos en el exterior y comenzaban a cambiar la imagen de una Argentina hostil al capital extranjero. Las inversiones norteamericanas, así como las europeas (francesas, italianas, alemanas), aumentaron en forma explosiva: de 20 millones de dólares en 1957 pasaron a 248 millones dos años después, y a 348 millones en 1961.

La mayor parte de estas inversiones se realizó en el sector de las industrias químicas (particularmente petroquímicas) y, sobre todo, del automóvil, cuya producción se triplicó en tres años. Mientras tanto, el estado invirtió en la siderurgia (Somisa), la electricidad (Segba), la red vial (que, a su vez, estimulaba la producción de cemento). También se logró el autoabastecimiento de petróleo, y en 1960 y 1961 el crecimiento del producto bruto interno (PBI) alcanzó un promedio del 8 por ciento, comparable al de los primeros años del

peronismo.

En cambio, no se solucionó el problema de la balanza comercial. El crecimiento de la producción industrial, si bien permitió sustituir ciertas importaciones (bienes de consumo), aumentó otras (materias primas, equipos); el denominado “coste argentino” no permitía a las nuevas industrias competir en los mercados externos, de modo que las exportaciones siguieron siendo las tradicionales, poco estimuladas por las políticas desarrollistas. El déficit de la balanza de pagos se financiaba con préstamos del FMI, el Eximbank y la banca privada extranjera. La independencia económica que, según las teorías desarrollistas, estaría al final del camino, tardaba en vislumbrarse.

Un presidente “criptocomunista”

Quizás para compensar esas desilusiones, Frondizi trató de cumplir, al menos, con otra de sus promesas electorales: una política exterior independiente. La ocasión de demostrarla se presentó con la cuestión de Cuba. Desde que Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de su revolución, los Estados Unidos iniciaron una campaña para aislar a Cuba y expulsarla de la Organización de Estados Americanos (OEA). Frondizi reiteró entonces los tradicionales principios de la política exterior argentina: autodeterminación de los pueblos y no intervención.

La elección de Alfredo Palacios como senador por la Capital Federal en febrero de 1961, con el voto de casi toda la izquierda y buena parte del peronismo, después de una campaña basada en la defensa de la revolución cubana,

mostraba que el tema era movilizador y daba réditos electorales. Poco después, Frondizi se entrevistaba en secreto con el ministro de Industria cubano, Ernesto “Che” Guevara, quien asistía a una conferencia interamericana en Montevideo. Finalmente, en la reunión de cancilleres de Punta del Este, en 1962, la Argentina se abstuvo en la votación de las sanciones propuestas contra Cuba. Los militares descubrieron entonces algo que ya sospechaban: Frondizi era “cripto-comunista”. Al poco tiempo, el gobierno argentino era obligado a romper relaciones con La Habana.

La última supuesta traición de Frondizi se vincula a la enseñanza: la UCR había favorecido el triunfo de la Reforma Universitaria de 1918, que postulaba, entre otras cosas, el monopolio del otorgamiento de títulos habilitantes por las universidades estatales. Para ganarse la buena voluntad de la Iglesia y de los sectores católicos, el gobierno de Frondizi reconoció ese derecho a las universidades privadas (en aquel momento casi todas católicas). Eso desencadenó la lucha entre los partidarios de la enseñanza laica y los de la enseñanza denominada “libre”, que compitieron entre sí en enormes manifestaciones.

Pero, en realidad, no eran estos problemas los que más ocupaban la atención de Frondizi. Su principal preocupación era la supervivencia de su gobierno, que debía transitar por un estrecho sendero entre las presiones del peronismo y las de los militares.

En la cuerda floja

Efectivamente, si era posible traicionar a comunistas, desarrollistas, anti-imperialistas y reformistas sin mayores consecuencias, no era posible hacer lo mismo con el peronismo. Cada decisión que Frondizi tomaba para cumplir con sus compromisos con el peronismo implicaba un choque con los militares. Mantener el equilibrio sobre esa cuerda floja obligaba a toda clase de contorsiones y malabarismos, que parecían confirmar la reputación de maniobrero inescrupuloso del presidente *maquiavélico*.

Los compromisos de Frondizi con el peronismo eran fundamentalmente dos: la devolución de los sindicatos intervenidos a sus dirigentes y la legalización del partido. Por empezar, dictó una amnistía política y sindical, que ponía fin a las inhabilitaciones de dirigentes. Luego, una Ley de Asociaciones Profesionales similar a la que había regido durante el peronismo, que reconocía un sindicato único por rama, establecía la retención de las aportaciones a los sindicatos por los empleadores y aseguraba a las organizaciones sindicales el control de las obras sociales, una de las fuentes principales de sus finanzas. Además, fueron levántandose las intervenciones, lo que permitió la normalización de esas organizaciones.

Toda esta política era denunciada por la oposición –y sobre todo por las 32 organizaciones- que veían en ella una entrega de los sindicatos a los dirigentes peronistas. Desde 1955, los sindicalistas denominados “libres” (socialistas y radicales) intentaron recuperar las organizaciones que antes del peronismo habían estado en sus manos. Algunos, con el apoyo de *comandos cívicos*,

ocuparon los locales sindicales, mientras que otros colaboraban con los interventores militares como asesores. No obstante, cuando se llevaron a cabo las elecciones, sólo en muy pocas organizaciones estos sindicalistas lograron legitimar sus posiciones por medio del voto. En la mayoría de los sindicatos –en especial en los más grandes- triunfaban los candidatos peronistas. No eran, en general, los viejos dirigentes, anteriores al 55, sino una nueva generación formada en los forcejeos con la “libertadora”, como el nuevo secretario general de la UOM, Augusto T. Vandor, que dirigía también las 62 organizaciones peronistas.

En cuanto a la CGT, que Aramburu había puesto en manos de una comisión administrativa provisoria integrada por miembros de las 32 organizaciones, fue intervenida hasta 1962 y entregada entonces a la Comisión de los 20, formada por mitades por miembros de las 62 y por independientes, que convocó el Congreso que debía concretar su normalización.

Esto no era visto con buenos ojos por los militares quienes, sin embargo, tuvieron que aceptar que la intervención de los sindicatos no podía ser permanente y que no era posible forzar la elección de los afiliados. El proceso de normalización sindical fue acompañado por un incremento de las huelgas, a través de las cuales los asalariados trataban de recuperar un poder adquisitivo devorado por la inflación. El aumento otorgado por Frondizi al tomar el gobierno pronto se esfumó, y la prórroga por un año de los convenios colectivos significó un congelamiento de los salarios en momentos de fuerte inflación. La pérdida de poder adquisitivo hizo que la participación de los salarios en la renta nacional bajara del 45 al 38 por ciento.

Los conflictos fueron volviéndose más duros. Frente a las huelgas ferroviarias de 1958 y 1961, el gobierno recurrió a la *movilización*, es decir, a la colocación de los huelguistas bajo jurisdicción militar. La ocupación del frigorífico municipal Lisandro de la Torre contra su privatización fue severamente reprimida (dos mil soldados, cuatro tanques, noventa y cinco detenidos, cinco mil cesantes), lo mismo que la huelga general de solidaridad que la acompañó, con sindicatos intervenidos y dirigentes detenidos. La represión fue respondida por actos de sabotaje y atentados con bombas de la resistencia peronista.

Ante esta situación, el gobierno estableció el plan Conintes (Conmoción interior del estado), que extendía la jurisdicción militar a los actos terroristas. Cientos de militantes sindicales y políticos fueron detenidos y muchos de ellos condenados por tribunales militares. Desde el punto de vista sindical, la *integración* propuesta por el desarrollismo había fracasado totalmente.

Desde el punto de vista político, esa *integración* no marchaba mejor. Frondizi había derogado los decretos de la “libertadora” que prohibían la propaganda peronista, lo que permitió la formación de partidos neo-peronistas a nivel provincial. Pero cuando algunos de ellos incluyeron a Perón entre sus candidatos, Frondizi tuvo que vetarlo. En junio de 1959, Perón dio a publicidad el pacto entre ambos, provocando un escándalo que estuvo a punto de precipitar la caída del gobierno. Ante el incumplimiento de ese pacto, Perón anunció el retorno al voto en blanco. La *integración* política había durado menos que la sindical.

Todas estas medidas, insuficientes para Perón y sus partidarios, parecían

excesivas a los militares, que seguían vigilando. Fueron atribuidas en gran parte a la influencia nefasta de Rogelio Frigerio, a quien consideraban –a pesar de su modesto cargo de secretario de Relaciones Económico-Sociales de la presidencia- la verdadera eminencia gris del gobierno y el principal responsable de la *infiltración marxista* en el mismo. No cesaron en sus críticas y *planteos* hasta conseguir su alejamiento.

Por cierto que fueron también presiones militares las que provocaron la prohibición del PC, la ruptura de relaciones con Cuba, el Plan Conintes, el veto de candidatos peronistas. Se cuentan no menos de treinta y cuatro *planteos* militares a los que el gobierno debió ceder (“hay que dejarlo llegar, pero con la lengua afuera” era la consigna atribuida a Aramburu). La amenaza de un golpe de estado era permanente y volvía más convincentes las sugerencias del ejército. Desde agosto de 1959, éste tenía un hombre fuerte, el general Carlos Severo Toranzo Montero, quien logró unificar en gran medida el *partido militar* y aumentar así la eficacia de su tutela.

Finalmente, el trapequista se decidió a dar el salto mortal. La victoria de la UCRI en varias provincias en las elecciones legislativas y municipales de fines de 1961 alimentó la esperanza de poder enfrentar a los partidos neo-peronistas al año siguiente. Pero las elecciones de gobernadores en 1962 no sólo demostraron que el peronismo seguía siendo la primera minoría en el país (con un 32 por ciento de los votos), sino que lo era en provincias claves como Buenos Aires, donde fue elegido gobernador el dirigente sindical Andrés Framini. El manotazo de ahogado que fue la intervención de las provincias donde había ganado el peronismo no le sirvió a Frondizi: fue depuesto el 29 de

marzo de ese año.

Azules y colorados

Esta vez, los militares no tomaron el poder directamente, sino que fue el presidente provisional del Senado, José María Guido, quien asumió el cargo vacante. ¿Por qué? Cuatro años de estado deliberativo habían multiplicado los roces y choques entre las tres fuerzas, y especialmente dentro del ejército. Estaban, pues, demasiado divididos para asumir directamente el gobierno; no había ninguna personalidad ni ningún proyecto que gozaran del suficiente consenso entre los militares. Además, Guido no tenía ninguna base de sustentación propia (en su partido, la UCRI, muchos lo consideraban un traidor por haber facilitado la deposición de Frondizi), de modo que sería una cómoda fachada que ocultaría los procesos de decisión, que quedaban en manos de los militares sin estar expuestos a curiosidades indiscretas.

El nuevo gobierno, integrado en gran parte por ministros provenientes de la derecha católica, anuló las elecciones de 1962, prohibió la propaganda peronista –lo que dificultaba la actividad de los partidos neo-peronistas y no reconoció a las autoridades provisorias de la CGT. La represión produjo un nuevo mártir: Felipe Vallese, joven delegado de la UOM, muerto en la tortura por la policía bonaerense, el primer desaparecido de la era post-peronista. Hubo también un rebrote de violencia con la actividad de grupos de derecha como Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista, autores de atentados antisemitas.

En lo económico –como es habitual, a pesar de la aparente paradoja, los gobiernos autoritarios en lo político suelen ser liberales en lo económico- se volvió al más ortodoxo liberalismo, con el inevitable Alsogaray, reemplazado luego por otro economista de la misma línea, José Alfredo Martínez de Hoz. Las medidas recesivas adoptadas aumentaron la capacidad ociosa de la industria en un 40 por ciento y llevaron la desocupación a un 8,8 por ciento de la población activa, sin lograr contener la inflación. Ninguno de los cuatro ministros de Economía que se sucedieron en el breve período logró poner fin a la recesión, y el estado debió pagar con bonos a proveedores y empleados.

Entre bambalinas, los protagonistas eran militares, y entre ellos se destacaba el general Juan Carlos Onganía, quien lideraba la facción *azul*, opuesta a los *colorados*. Esta denominación, tomada de la jerga habitual en las maniobras militares, tiene al menos la virtud de evitarnos galimatías como el de *nacionalistas* y *liberales*. Los *azules* se presentaban como legalistas o profesionalistas, lo que no les impidió tomar el poder cuatro años después. Predominaban en la caballería y en Campo de Mayo y señalaban el coste de las intervenciones políticas para la unidad del ejército y su debilitamiento frente a las otras dos fuerzas. Los *colorados* se caracterizaban por su antiperonismo obsesivo y sus ideas *liberales*, opuestas a las *nacionalistas* que predominaban en el otro campo. Minoritarios en el ejército, predominaban en cambio en la marina, de lo que resultaba un cierto equilibrio de fuerzas.

En septiembre de 1962, Onganía, con el apoyo del general Julio Alsogaray –comandante de la guarnición de Campo de Mayo- exigió la destitución del comandante en jefe del ejército y del jefe de estado mayor. Aunque hubo

desplazamiento de tropas, con algunos enfrentamientos, ante la neutralidad de la marina, triunfaron los *azules* y Onganía fue el nuevo comandante en jefe. Pero, ante sospechosas negociaciones del ministro del Interior, Rodolfo Martínez, con dirigentes sindicales y políticos peronistas, el almirante Rojas dio el grito de alarma, denunciando nuevas maniobras *integracionistas* (es decir, componendas secretas del gobierno con dirigentes peronistas). Miguel Ángel Zavala Ortiz, dirigente radical *unionista*, confirmó estas denuncias: Martínez le habría ofrecido la candidatura a vicepresidente en una fórmula encabezada por Onganía.

En este contexto, el 2 de abril de 1963 se produjo un levantamiento en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y las bases navales de Río Santiago y Puerto Belgrano, acompañado por varias unidades del ejército en el interior del país, mientras que en Córdoba reaparecieron los *comandos civiles* ocupando posiciones estratégicas. La represión del levantamiento produjo veinticuatro muertos y un centenar de heridos, casi todos conscriptos que cumplían su servicio militar.

La convocatoria a elecciones fue acompañada de nuevas limitaciones (por ejemplo, la prohibición de publicar entrevistas con Perón). Al principal de los partidos neo-peronistas, la Unión Popular (UP), dirigida por Juan Atilio Bramuglia, sólo se le permitió presentar candidatos a cargos legislativos, no ejecutivos. En esas condiciones se celebraron las elecciones de julio de 1963. Estas mostraron una gran dispersión del electorado: el partido que más votos recibió, la UCRP, apenas superaba el 25 por ciento; los votos en blanco habían bajado al 19 por ciento (sumándoles los anulados, llegaban al 21 por ciento); la

UCRI sólo obtenía un 16 por ciento y el resto se dividía entre una veintena de pequeños partidos. El Colegio Electoral proclamó entonces al candidato radical del pueblo, Arturo Umberto Illia, con el apoyo de varios partidos menores (PDC, PSD, Federación de Partidos de Centro, la Unión del Pueblo Argentino (Udelpa), recientemente creada por Aramburu, y partidos provinciales). Los peronistas nunca reconocieron la legitimidad de un gobierno que sólo representaba la primera minoría de unas elecciones viciadas por la proscripción.

Cien tortugas

Ante la mirada divertida de los paseantes, un día de junio de 1964, cien tortugas invadieron pacíficamente la Plaza de Mayo. Se trataba de una protesta sindical contra la lentitud del gobierno y, sobre todo, del presidente, a quien las caricaturas representaban durmiendo la siesta en un banco de la plaza, con una paloma anidando sobre su cabeza. Contraste del estilo pausado de Illia con la actividad frenética desarrollada por Frondizi, o prejuicio porteño contra el médico de Cruz del Eje, la imagen lo acompañó hasta el final de su gobierno y no dejó de mencionarse como uno de los pocos motivos de su deposición.

Sin embargo, el gobierno de Illia no fue tan apacible como se lo presentaba, y representó, en realidad, un último intento de hacer funcionar el sistema democrático-liberal, en el que los partidos políticos y el Congreso desempeñaran el papel que la constitución les asignaba. Illia tuvo que hacerlo con una representación minoritaria en Diputados y varias provincias gobernadas

por la oposición, entre el fuego cruzado de las corporaciones, que finalmente lo voltearon ante la indiferencia de los partidos “democráticos” y de la mayor parte de los ciudadanos.

Por empezar –quizá para diferenciarse de su antecesor-, Illia cumplió su principal promesa electoral: ni las presiones del gobierno norteamericano -que llegó a enviar al subsecretario de estado para ejercerlas mejor- ni las amenazas del Congreso de ese país –que comenzó a discutir una enmienda según la cual se suspendería la ayuda financiera a los gobiernos que rompieran contratos con empresas norteamericanas- impidieron que el 15 de noviembre, apenas un mes después de su llegada al gobierno, Illia decretara la nulidad de los contratos petroleros firmados por Frondizi. Tampoco cedería a las presiones del Banco Mundial, que reclamaba un aumento de las tarifas eléctricas, ni aceptaría las condiciones del FMI para recibir un préstamo. El control del precio de los medicamentos provocó un conflicto con los grandes laboratorios multinacionales y la oposición de Suiza a la refinanciación de la deuda con el Club de París. Para la oposición desarrollista, estas medidas hostiles al capital extranjero pondrían fin a la ola de inversiones iniciada durante los gobiernos anteriores y al auge económico que habían producido.

En el orden interno, varias disposiciones del nuevo gobierno, consideradas *dirigistas*, propias de lo que se conocía como *intervencionismo estatal*, fueron criticadas por las organizaciones patronales. Así, por ejemplo, la fijación de precios máximos para la carne, la veda de su venta durante ciertos días y la limitación de sus exportaciones produjeron la reacción de la Sociedad Rural Argentina (SRA), así como las retenciones sobre las exportaciones, las

limitaciones a la negociación de divisas, la prórroga de los arrendamientos y, sobre todo, el proyecto de impuesto a la renta potencial de la tierra.

También la Unión Industrial Argentina (UIA) protestó contra los controles de precios y contra la ley que establecía el salario mínimo, vital y móvil. Por su parte, la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) pedía la protección del estado contra las ocupaciones de fábricas previstas en el Plan de Lucha de la CGT. Todas ellas, a coro, acusaban al gobierno de ser el principal causante de la inflación (que en 1965 alcanzaba un 28,6 por ciento) al emitir moneda para cubrir su déficit fiscal. Todas añoraban las políticas liberales de los gobiernos anteriores. La Federación de partidos de centro y Udelpa las apoyaban.

Sin embargo, aunque no fuera ésa la percepción generalizada, los resultados económicos eran inesperadamente positivos. El gobierno radical se había propuesto poner fin a la recesión con que se encontró y reactivar la economía utilizando los clásicos instrumentos keynesianos: aumento del gasto público, la base monetaria y el crédito. La inversión nacional alcanzó un 20 por ciento del PBI y permitió que éste aumentara, en 1964 y 1965, en un promedio cercano al 9 por ciento anual. La desocupación se redujo así a un 4,6 por ciento, y el salario real aumentó en alrededor del 10 por ciento, ayudado por el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. En cuanto al sector externo, tuvo lugar un considerable aumento de las exportaciones, estimuladas por una política de mini-devaluaciones y por buenos precios internacionales, que impulsaron un considerable crecimiento de la producción de cereales y carne. De modo que, a pesar del aumento de importaciones de petróleo -ya que

la anulación de los contratos significó el fin del autoabastecimiento-, finalmente el saldo de la balanza comercial fue positivo.

Esta bonanza incitaba a los sindicatos a recuperar el poder adquisitivo de los salarios mediante huelgas, mientras que la CGT presionaba al gobierno a través de paros generales, concentraciones y ocupación de fábricas. Un decreto reglamentario de la ley de asociaciones profesionales, que preveía la democratización del funcionamiento de los sindicatos (con la representación de las minorías en los órganos directivos, por ejemplo), prohibía el uso de los fondos para financiar actividades políticas partidarias y establecía el control de sus finanzas por dependencias estatales, despertó particular oposición. Es que, dirigida por las 62 organizaciones, la CGT, con sus dos millones y medio de afiliados, era la estructura más importante del peronismo, sustituyendo al partido proscrito. Por eso, también, su conducción era tan disputada: los sindicatos independientes que la integraban se oponían a la adopción de posturas de política partidaria; José Alonso y Augusto Vandor se disputaban la secretaría general con mutuas expulsiones, e incluso con medios más contundentes: en uno de los tiroteos entre grupos rivales murió, por ejemplo, el sindicalista Rosendo García.

Más que reivindicaciones inmediatas, el plan de lucha de la CGT se proponía demostrar a los militares –y al propio Perón, ya que Vandor actuaba de manera cada vez más autónoma- el poder de los sindicatos, al mismo tiempo que intentaba debilitar al gobierno radical. La ocupación de once mil fábricas, en la que participaron casi cuatro millones de trabajadores y que requería un alto grado de disciplina y coordinación, tuvo efectos impresionantes y fue

acompañada de frecuentes marchas, caravanas, *cabildos abiertos*, etcétera. Así, la CGT se convirtió en el eje de la oposición política *nacional y popular*, como se la llamaba: UP, UCRI -dirigida por Oscar Alende después de la escisión de Frondizi, que había fundado el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) -, grupos nacionalistas y de izquierda.

Incluso en los medios estudiantiles, movilizados hasta entonces por sus propios problemas –el reclamo de mayores presupuestos para la universidad- hubo actos de solidaridad con el Plan de Lucha, que se tradujeron, por ejemplo, en la ocupación de facultades. La mayor parte de éstas –como las ocupaciones de fábricas- se llevaron a cabo sin violencia, y el gobierno respondió también con una actitud moderada, y derivó a la justicia el establecimiento de las responsabilidades.

La situación del peronismo seguía siendo el principal problema político. Illia había anulado las leyes –restablecidas por Guido- que prohibían la propaganda peronista y había declarado un indulto y una amnistía para los dirigentes y militantes. En cuanto a la cuestión del partido, esperaba que lo resolviera la justicia, pero mientras que la justicia de la Capital Federal otorgaba personería política y electoral al Partido Justicialista (PJ), la Cámara Nacional Electoral se la negaba. Sólo los partidos neo-peronistas podían competir electoralmente a nivel provincial; el principal, la UP, era mayoritario en Buenos Aires y otras provincias y, después de las elecciones legislativas de marzo de 1965, tenía cincuenta y dos diputados nacionales. Otros partidos neo-peronistas obtuvieron ciento cincuenta diputados en varias provincias. Pero lo que los militares y los partidos antiperonistas no podían tolerar era el regreso de Perón.

Es por eso que el Operativo Retorno (en diciembre de 1964) produjo una gran agitación entre partidarios y enemigos. Finalmente, el viaje del líder fue detenido en Río de Janeiro por el gobierno brasileño, a pedido del gobierno argentino. La visita de Charles De Gaulle movilizó también a los peronistas (“De Gaulle, Perón, tercera posición”) y hubo graves incidentes en Córdoba. También se produjeron incidentes alrededor de la visita de María Estela Martínez de Perón (“Isabel”).

Esta visita se debía a la puja, que se intensificaba dentro del peronismo, entre los que respondían a la creciente influencia de Vandor y sus opositores, que alegaban su fidelidad al líder exiliado. Por ejemplo, en las elecciones a gobernador de Mendoza, cada uno de estos sectores sostenía a un candidato diferente; “Isabel” traía la palabra de Perón y su candidato se impuso sobre el vandorista. El bloque de diputados peronistas y las 62 organizaciones finalmente se dividieron, y José Alonso dirigió las 62 *De pie junto a Perón*, opuestas a las 62 vandoristas.

En cambio, el frente militar se había calmado. Hubo choques provocados por reacomodamientos internos y entre jefes militares y el ministro de Defensa; pero, aunque los rumores de conspiraciones fueron frecuentes, ninguno se confirmó. Illia no era un intelectual, no era *comunista* ni había firmado ningún pacto. La participación de representantes del gobierno en los actos de homenaje a la “revolución libertadora” en sus aniversarios parecía recordar la antigua solidaridad.

Sólo preocupaba a los militares la aparición de minúsculos grupos guerrilleros

en los montes salto-jujeños y en Formosa, pronto reprimidos por la gendarmería, y la supuesta penetración comunista en las universidades, más difícil de reprimir.

La cuestión del envío de tropas a la República Dominicana para sumarse a las de los Estados Unidos y otros países latinoamericanos que, en nombre de la OEA, intervenían en una conflictiva situación, generó algunos roces entre los militares y el gobierno. Los primeros querían participar; el gobierno demoró la decisión y finalmente decidió no enviar tropas.

En este marco, el principal problema político del gobierno era su aislamiento. Minoritario en la Cámara de Diputados y en nueve provincias, para ejercer eficazmente sus funciones necesitaba aliados. Pero la tradición de la *intransigencia* radical (a la que pertenecía también Illia, en su rama sabattinista) se oponía a las alianzas extrapartidarias. Por tanto, no las buscó, y se quedó solo. El desconocimiento de la función de los medios de comunicación agravaba esta soledad: Illia creía que los hechos hablaban por sí solos, y que, entonces, era inútil darles publicidad: esto acentuaba la sensación de que el gobierno no hacía nada. La demora del Congreso en aprobar el presupuesto de 1966 (siete meses y medio) no ayudaba a mejorar la imagen del gobierno, percibido como lento, ineficaz, falto de autoridad. Sin embargo, en las elecciones de marzo de 1965, la UCRP aumentó su cantidad de votos, llegando al 28 por ciento; ganó entonces en la Capital Federal y en otros nueve distritos.

De pronto, a fines de 1965, todo parece precipitarse. Onganía –que había restablecido la disciplina en el ejército y lo controlaba- en desacuerdo con el

nombramiento como secretario de Guerra de un general en actividad con menor antigüedad que la suya, pide su retiro. El general Pascual Pistarini lo reemplaza como comandante en jefe del ejército. Durante la primera mitad de 1966, el golpe de estado, sus modalidades y las tareas del próximo gobierno militar son el tema cotidiano de la prensa, en especial de las revistas políticas, que proliferan. Finalmente, el 28 de junio de 1966, Illia es sacado de su despacho por una compañía de policías armados con lanzagases.

Veinte años después, un comandante en jefe del ejército, al hacer un *mea culpa* de la institución por sus intervenciones contra gobiernos constitucionales, reconocerá que ésta fue la intervención menos justificada.

Botas sí, votos no

Durante los últimos meses del gobierno de Illia fue creándose un clima sumamente hostil, no sólo al gobierno, sino también al sistema que éste encarnaba. La crítica a los hombres políticos, a sus partidos, a las instituciones en que participaban (como el Congreso) se volvió ferozmente negativa. La mediocridad, la incompetencia, el interés centrado exclusivamente en las carreras personales eran presentados como características de la clase política en general. Los partidos, según esta visión, se disputaban el poder para aprovechar los beneficios que reporta el control del estado. Todo lo demás era retórica hueca y demagogia para conseguir votos. El parlamento sólo servía para que se lucieran las dotes oratorias de sus miembros y para que éstos cobraran sus dietas, retardando indefinidamente las decisiones.

Entonces, se afirmaba, los problemas no se resolvían e incluso se agravaban con el tiempo. En suma, se trataba de un sistema arcaico e ineficaz, que constituía un obstáculo para el desarrollo del país. Revistas de amplia difusión, como *Confirmado* o *Primera Plana* rivalizaban en esta empresa de desprestigio. Las ideas contrarias a la democracia liberal, que habían predicado durante décadas los pequeños grupos nacionalistas, reaparecían ahora con un barniz de modernidad en la pluma de hábiles periodistas.

¿Qué se proponía en cambio? La palabra mágica – como antes había sido “desarrollo”- era ahora “eficiencia”. Ésta sólo se alcanzaría cuando, en lugar de políticos chapuceros, fueran técnicos con conocimientos precisos y concretos los que tomaran las decisiones, y cuando hubiera una autoridad firme para

ponerlas en práctica sin demoras.

Todas las dictaduras militares habían tenido, al menos en sus comienzos, un apoyo político más o menos amplio: la de 1930, todo el arco anti-yrigoyenista; la de 1943, católicos y nacionalistas primero, sindicatos obreros después; la de 1955, los partidos “democráticos”. Ahora, los sectores que apostaban por un golpe militar eran a la vez más amplios y más difusos: el vandomismo, que esperaba un reconocimiento de su poder efectivo y un papel destacado para los sindicatos entre las corporaciones que reemplazarían a los partidos políticos; muchos empresarios, que deseaban el retorno a políticas económicas liberales o a un intervencionismo estatal que los beneficiara; la Iglesia, que confiaba en recuperar su influencia sobre la sociedad gracias a un gobierno respetuoso del “orden moral”; los desarrollistas, que aspiraban a que sus técnicos pudieran concretar, con un gobierno fuerte, los proyectos que los votos les negaban... Pero también una gran parte de las clases medias, ilusionadas con la perspectiva de un gobierno estable, eficiente, que restableciera el orden, modernizara las estructuras económicas y asegurara un crecimiento continuado.

Como en los casos anteriores, los militares no se harían rogar demasiado. En este clima político, encontraban una confirmación de sus propias convicciones, transmitidas de promoción en promoción, acerca de su papel en la sociedad. El sistema político había llegado a un callejón sin salida: las elecciones de 1967 probablemente reproducirían el triunfo peronista de 1962. Muchos pensaban entonces que sólo las fuerzas armadas podían garantizar un gobierno sólido y competente, capaz de sacar el país del atolladero y conducirlo a su *destino de*

grandeza.

Esta concepción se veía reforzada por su difusión entre las fuerzas armadas de otros países latinoamericanos, con el nombre de “doctrina de la seguridad nacional”, enseñada, por ejemplo, en los cursos de capacitación y actualización para militares dictados en la Escuela de las Américas, que el gobierno norteamericano ofrecía en la zona del canal de Panamá. Según esta doctrina, en un mundo dividido por la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo, que era el objetivo principal de las fuerzas armadas latinoamericanas, tenía lugar principalmente en el interior de cada país. Por lo tanto, la función principal de los militares era la defensa de esas fronteras ideológicas por todos los medios, aunque para eso tuvieran que sustituir a las autoridades constitucionales a las que se consideraban incapaces de hacerlo.

Existía un modelo: en 1964, en Brasil, las fuerzas armadas habían tomado el poder y dictado unas actas institucionales en reemplazo de la constitución; inhabilitaron a gran parte de la clase política y establecieron un régimen militar que duraría veinte años. El crecimiento económico de los primeros años (conocido como el “milagro brasileño”) parecía confirmar que la estabilidad política era condición necesaria para el desarrollo económico. Gracias a eso, la economía brasileña iba en camino de superar rápidamente a la argentina, cosa que los militares argentinos –habituados en sus hipótesis de guerra a la confrontación con Brasil- difícilmente podían admitir. Era necesario hacer algo – y sin demoras- para evitarlo.

Por fin, superadas las divisiones, había aparecido en el ejército un *hombre*

fuerte capaz de unificarlo. Durante el largo período en que fue comandante en jefe, Juan Carlos Onganía había depurado la institución de sus enemigos y rivales dejando, al retirarse, todos los puestos claves en manos de sus amigos. Sus ambiciones políticas, que ya se habían manifestado ante las elecciones de 1963, encontraron, tres años después, la ocasión de concretarse.

El onganiato

El Acta de la Revolución Argentina, del 28 de junio de 1966, establecía la destitución del presidente, del vicepresidente y de todos los gobernadores; la disolución del Congreso nacional y de todas las legislaturas provinciales; la separación de los miembros de la Suprema Corte y la disolución de todos los partidos políticos, cuyos bienes pasaban al estado. Una junta de comandantes en jefe de las tres armas asumía el poder y designaba a Onganía presidente de la república. Al día siguiente, éste tomaba el cargo, jurando cumplir con los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y, en tercer lugar, la constitución nacional. En la ceremonia estaba presente toda la Argentina corporativa: jefes de las tres armas, dignatarios eclesiásticos, presidentes de las organizaciones patronales, el secretario general de la CGT, dirigentes sindicales como Augusto Vandor, José Alonso, J.J. Taccone (de Luz y Fuerza). Perón llamó a “desensillar hasta que aclare”. ACIEL, la UIA, la SRA, la Bolsa de Comercio, ADEBA (Asociación de Bancos), Carhap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) expresaron su beneplácito. La mayor parte de la prensa justificó el golpe invocando un vacío de poder.

La primera audiencia del presidente fue para Álvaro Alsogaray, quien, a falta del Ministerio de Economía, obtuvo el cargo de embajador en los Estados Unidos, donde fue recibido con los brazos abiertos como *defensor de la libre empresa*. Sin embargo, pronto se veía que los partidarios de la ortodoxia liberal coexistían en el nuevo gobierno con otros grupos de formación diversa. Procedentes de la Universidad Católica, la Universidad del Salvador y, sobre todo, de los *cursillos de cristiandad* dispensados en la época por la Iglesia a militares, empresarios y técnicos, estos economistas estaban influidos por las doctrinas organicistas que circulaban en esos ámbitos y consideraban que el estado debía desempeñar un papel importante en la economía. Eran partidarios de reforzar las funciones de planificación y control por parte del estado para que éste pudiera reordenar la economía y romper los bloqueos que impedían el crecimiento. Para eso se crearon tres Consejos: de seguridad, de desarrollo económico y de ciencia y técnica, desde los cuales estos tecnócratas trataban de incidir sobre la conducción económica, con éxito variable.

Una de las primeras medidas del gobierno –no muy novedosa, por cierto– fue la suspensión de los convenios colectivos (es decir, el congelamiento de los salarios) por dos años. Vandor se había anticipado, firmando el convenio de los metalúrgicos en la Casa Rosada, con aumentos del 30 por ciento; también el de la AOT había sido homologado: algunos sindicatos eran más iguales que otros.

Desde entonces, las relaciones del gobierno con las organizaciones sindicales fluctuaron entre la tolerancia y la represión, el palo y la zanahoria. A fines de 1966, la CGT declaró una huelga general contra la política económica del gobierno, que tuvo escasa repercusión. A principios del año siguiente, a raíz de

un plan de acción de la central, el gobierno rompió relaciones con ella y suspendió la personería gremial de la UOM, la AOT y otras importantes organizaciones. El plan fue abandonado.

Esta política logró uno de sus objetivos: en 1968, la CGT se dividió. Al lado de la CGT de Paseo Colón, o de los Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro (gráfico de orientación social-cristiana), se constituyó entonces la CGT de la calle Azopardo, que reunía a los vanderistas y a los que empezaban a llamarse “participacionistas”. Éstos aceptaban las reglas del juego impuestas por el gobierno y trataban de defender sus intereses corporativos en forma no confrontativa y despolitizada.

Sin embargo, hubo conflictos en el puerto, donde se trataba de reducir los costes modificando las condiciones de trabajo, y sobre todo en los ferrocarriles, donde la racionalización se traducía en despidos masivos. Ante la reacción de los trabajadores, el gobierno intervino la Unión Ferroviaria (UF) y el sindicato de obreros portuarios. En Tucumán, donde la eliminación de subsidios precipitó la crisis de la industria azucarera, que dejaba sin empleo a miles de trabajadores, se multiplicaron las protestas y los enfrentamientos con la policía (en uno de los cuales hubo un obrero muerto). El gobierno retiró la personería gremial a la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA). Los sindicatos dirigidos por comunistas (prensa, vendedores de diarios) fueron intervenidos. Una ley de arbitraje obligatorio eliminó prácticamente el derecho de huelga. Desde entonces, el movimiento sindical entró en una etapa de desmovilización.

Ganadores y perdedores

La política económica de la “revolución argentina” osciló entre la ortodoxia liberal y el intervencionismo estatal. El congelamiento de los salarios fue acompañado por el de las tarifas de los servicios públicos y el precio de los combustibles, y un acuerdo del gobierno con las empresas líderes intentó frenar la inflación (que sin embargo llegó a un 30 por ciento a fines de 1966).

Desde entonces, el principal artífice de la estabilización fue Adalberto Krieger Vasena, ministro de Economía y de Trabajo (asociación significativa), quien gozaba de la confianza del *establishment* y de los centros financieros internacionales. Obtuvo, así, préstamos del FMI y de bancos norteamericanos y europeos, y se reanudaron las inversiones extranjeras. Después de una devaluación del 40 por ciento, se estableció un mercado libre de cambios y, en los años siguientes, la inflación se redujo considerablemente (9,6 por ciento en 1968, 6,7 por ciento en 1969).

La racionalización administrativa (despidos de personal) y la reducción del déficit de las empresas públicas permitieron reducir los gastos del estado. Las retenciones a las exportaciones y una recaudación más estricta de los impuestos internos aumentaron los ingresos fiscales. Así, el déficit fiscal se redujo y la disminución de las expectativas inflacionistas atenuó la puja por la distribución del ingreso.

Una vez logrado el control de la inflación, el equilibrio fiscal y de la balanza de pagos, el ministro se permitió políticas menos ortodoxas. Por ejemplo, fuertes inversiones del estado en obras de infraestructura viales y energéticas (túnel

subfluvial Santa Fe-Paraná, complejo Zárate-Brazo Largo, obras hidroeléctricas de El Chocón-Cerros Colorados, central atómica de Atucha). Entre 1966 y 1970, la inversión pública aumentó un 55 por ciento. Estas inversiones fueron financiadas, en parte, con un fuerte aumento de las retenciones a las exportaciones tradicionales (proporcional a la devaluación), principal motivo de queja de los productores rurales.

El auge de la economía mundial favorecía esas exportaciones. El aumento de la demanda y de los precios de los cereales, acompañado por un tipo de cambio favorable, impulsó la modernización de la agricultura pampeana (maquinización, semillas mejoradas, agroquímicos) y el aumento de su productividad. El impuesto a la renta potencial de la tierra –o la amenaza de imponerlo– favorecía también ese proceso. Creció así la producción de sorgo, maíz, girasol, y las exportaciones agropecuarias, favorecidas también por la apertura de nuevos mercados: China, los países socialistas... La balanza comercial tuvo un saldo favorable que compensaba el déficit de los servicios financieros (intereses, dividendos y utilidades de las inversiones extranjeras).

En cambio, el considerable crecimiento de la producción industrial (a un promedio del 7 por ciento anual) siguió orientado fundamentalmente hacia el mercado interno. Pese a una serie de medidas tendientes a estimularlas (como el reintegro de los aranceles pagados por insumos importados), las exportaciones no tradicionales (es decir, de productos manufacturados) sólo llegaron a representar de un 10 a un 20 por ciento del total. El *coste argentino* seguía siendo un lastre, tanto más cuanto que la creación de empleos y la reducción del paro permitían a los trabajadores mejorar sus ingresos.

La política industrial se proponía premiar la eficiencia, beneficiando a las empresas más grandes, muchas veces de capital extranjero, que eran las que ostentaban mayores niveles de productividad. Esto provocaba las quejas de la Confederación General Económica (CGE), que agrupaba sobre todo a pequeñas y medianas empresas (pymes), y que denunciaba la desnacionalización de la industria y la venta de empresas nacionales a compradores extranjeros.

Los otros perdedores eran las economías regionales, que muchas veces sólo subsistían gracias a la protección y los subsidios; al eliminarse éstos, sufrieron fuertes conmociones: el azúcar en Tucumán, el algodón en Chaco, la yerba mate en Misiones, regiones donde empezaron a formarse importantes bolsones de pobreza. En Chaco, Formosa y Misiones se formaron ligas agrarias de arrendatarios, colonos, y propietarios minifundistas.

Así, a pesar del crecimiento del PIB (de un modesto 3,6 por ciento en 1967 a un importante 9,6 por ciento en 1969), los sectores disconformes aumentaban. Después de la renuncia de Krieger Vasena, la inflación aumentó nuevamente: de un 13,6 en 1970 pasó a un 34,7 por ciento el año siguiente, alcanzando un 58 por ciento en 1972. Además de reflejar los aumentos salariales acordados en las paritarias restablecidas (de un promedio del 20 por ciento), expresaba también las inciertas perspectivas abiertas en 1972 con la convocatoria a elecciones. Es que la creciente resistencia que encontraba la dictadura había acortado drásticamente los plazos previstos.

Desde el principio, Onganía había declarado que la “revolución” no tenía plazos

sino objetivos, y que sólo después de haberlos alcanzado podría hablarse de una salida política. Además, dividía la transformación de estructuras en tres tiempos sucesivos: económico, social y, finalmente, político. Acosado por los periodistas –o para lanzar un globo de ensayo–, el secretario de prensa de la presidencia estimó en unos diez años el tiempo necesario para alcanzar esos objetivos. En la reunión con los generales que mantuvo unos días antes de su deposición, Onganía estimó que la reestructuración de la sociedad argentina podía durar de diez a veinte años. Fue lo que tardaron los militares brasileños para restablecer el sistema constitucional en su país, pero la Argentina no era Brasil.

La noche de los bastones largos

La primera y más constante oposición al *onganiato* provendría de los estudiantes, quienes tenían una tradición de lucha política que se remontaba a los años de la Reforma Universitaria (1918). Desde entonces, habían logrado progresivamente la autonomía de las universidades, el gobierno tripartito – profesores, estudiantes y egresados–, la libertad de cátedra, la provisión de los cargos por concurso. Estas conquistas, eliminadas durante el peronismo, fueron restablecidas por la ley universitaria de 1956.

Pero, además, la Reforma postulaba la participación de los universitarios en los problemas de la sociedad, para que la universidad no fuera una isla democrática en un mar de autoritarismo e indiferencia. Entonces, a medida que la universidad se iba abriendo a las clases medias, los estudiantes se fueron

politizando y participando activamente en las luchas políticas.

Como punta de lanza de los sectores medios, los estudiantes se habían opuesto tenazmente al régimen militar de 1943, al que consideraban nazifascista, y luego al peronismo que lo continuó (de ahí la consigna peronista “alpargatas sí, libros no”). Con el restablecimiento de la autonomía universitaria por la “revolución libertadora”, volvió a desarrollarse la vida política intra-universitaria, con una creciente influencia de las tendencias de izquierda. Como muchos de los profesores pertenecían también a esas corrientes, para los militares la universidad era un nido de “comunistas”, de modo que una de las primeras medidas de Onganía fue la intervención de las universidades, la disolución de los centros de estudiantes y la prohibición de toda actividad considerada política, como publicaciones o asambleas.

Muchos rectores y decanos no aceptaron el papel de administradores dependientes del Ministerio de Educación que les asignaba la intervención y renunciaron a sus cargos. Estudiantes y profesores ocuparon varias facultades; la acción de la policía fue brutal, sobre todo en Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Exactas, desalojadas con gran número de heridos y de presos; el ataque policial a esta última, en julio de 1966, fue conocido como “la noche de los bastones largos”. En Córdoba cayó bajo las balas policiales el estudiante Santiago Pampillón, que se convertiría en símbolo de las víctimas de la violencia represiva.

Muchos profesores renunciaron a sus cátedras: setecientos cincuenta y tres en un primer momento. Algunos de los más prestigiosos aceptaron los puestos que

les ofrecían en Europa y los Estados Unidos. El alto nivel científico y académico que habían alcanzado las universidades desde 1955 se esfumó rápidamente. Si algunos renunciantes pensaban que esa posibilidad detendría al gobierno, se equivocaban: la limpieza ideológica era para éste mucho más importante que el nivel académico y, si había que reemplazar a reconocidos especialistas por mediocres improvisados, ése era el precio que había que pagar para liberar a la enseñanza de la influencia “comunista”. Fue un daño irreparable causado a la ciencia y la cultura argentinas.

Los estudiantes no podían renunciar, de modo que tuvieron que soportar los controles policiales en la entrada de las facultades, la vigilancia dentro de ellas (donde hasta el largo del pelo los volvía sospechosos), la imposibilidad de organizarse en defensa de sus derechos, los profesores mediocres... Todo esto generaba frecuentes protestas dentro y fuera de las facultades, que, reprimidas con violencia, producían una espiral interminable. Además, los incidentes en una universidad provocaban la solidaridad de otras: muertes en Corrientes, Rosario...

El gobierno atribuía estos disturbios a supuestos agitadores profesionales y sólo sabía responder con la represión. Las protestas estudiantiles se transformaron así en la mecha que encendería otras explosiones.

El cordobazo y sus ecos

La evolución ideológica del movimiento estudiantil –y de algunos sectores del movimiento obrero- fue disminuyendo la distancia que los había separado. El

primero fue perdiendo el carácter antiperonista que lo había dominado en los años 40 y 50; en el segundo se desarrollaron tendencias de izquierda ajenas al macartismo tradicional.

Ya durante el gobierno de Illia muchos estudiantes habían acompañado el plan de lucha de la CGT, por ejemplo, ocupando facultades en solidaridad con las ocupaciones de fábricas (“Obreros y estudiantes, unidos como antes”-del peronismo, se entiende). Esa convergencia fue notable sobre todo en Córdoba, en virtud de ciertas condiciones particulares.

El desarrollo industrial de la ciudad era reciente y se debía sobre todo a la instalación, en su periferia, de grandes plantas de fabricación de automóviles y sus componentes. En esas plantas se concentraba una clase obrera nueva, menos influida por las tradiciones del sindicalismo peronista y cuyos sindicatos estaban menos burocratizados que los centrados en el Gran Buenos Aires. Mientras aquellos se ocupaban casi exclusivamente de los salarios, este nuevo tipo de sindicalismo se interesaba en particular por las condiciones de trabajo (ritmos, incentivos, clasificaciones, categorías). No se trataba de negociar en las convenciones colectivas una vez por año, sino de discutir día a día en la fábrica o el taller, lo cual implicaba una mayor participación de las bases y una conducta más transparente de los dirigentes.

En las plantas de Fiat se formaron sindicatos por empresa (Sitrac, Sitram), que se convirtieron en modelos de democracia sindical, mientras que en algunas regionales (como la de Smata, mecánicos, o la de Luz y Fuerza) se imponían corrientes combativas. Formas de acción directa, no convencionales (como la

ocupación de plantas, a veces con toma de rehenes) generaron un nuevo tipo de dirigente sindical, caracterizado por la honestidad personal, la relación directa con las bases y la presencia en los lugares de conflicto: Agustín Tosco (Luz y Fuerza) es un ejemplo de este tipo de dirigente antiburocrático. Tosco definía al burócrata como “alguien sin vocación, sin ideales, que se convierte en un típico ‘administrador’ de un cargo sindical, lo usa para su beneficio personal y desde ese lugar comienza a dominar a sus compañeros”.

En este ambiente se desarrollaron tendencias de izquierda que habían desaparecido del sindicalismo peronista (“Ni golpe ni elección: revolución”). Fue la convergencia de estos obreros y dirigentes sindicales con los estudiantes la que determinó el carácter explosivo de la protesta en Córdoba.

Huelgas, manifestaciones, enfrentamientos con la policía culminaron el 29 de mayo de 1969 cuando, desde el barrio estudiantil del Clínicas, la ciudad entera fue recorrida por un estado de insurrección. Proliferaron las barricadas, los incendios de automóviles y de locales simbólicos. La policía, atacada a pedradas en la calle y por francotiradores instalados en los techos, se mostraba impotente para controlar la situación; la imagen de la policía montada retirándose –sin dejar de disparar– fue vista por todo el país en la televisión. Sólo la intervención del ejército permitió recuperar el control de la ciudad, con un saldo de catorce muertos e innumerables heridos. Tribunales militares condenaron a dirigentes sindicales como Agustín Tosco y Elpidio Torres (Smata).

La provincia, intervenida, recibió refuerzos de la Policía Federal, la bonaerense,

la gendarmería. Pero los disturbios se reprodujeron en otras ciudades: ya habían ocurrido en Rosario (15 y 23 de mayo), con dos muertos; la ciudad había sido declarada zona de emergencia por el gobierno y puesta bajo mando militar. Al mes siguiente, la visita de Nelson Rockefeller –símbolo del imperialismo yanqui- fue repudiada con el incendio de quince supermercados en el Gran Buenos Aires. El 13 de septiembre, el aniversario de la muerte de Santiago Pampillón fue recordado con protestas en Rosario (un muerto), Córdoba, La Plata... Al año siguiente, los incidentes estudiantiles se cerraron con 1.500 detenciones en Córdoba y se reprodujeron en Rosario, La Plata, Tucumán... Mientras tanto, el general Onganía dedicaba el país a la Virgen María.

Después del cordobazo, el gobierno había declarado el estado de sitio en todo el país e intervenido varios sindicatos (gráficos, imprenta, navales) y la CGT-Azopardo. Esta última, que amenazaba con un paro de 36 horas, fue persuadida de no convocarlo. A medida que aumentaba la oposición, el gobierno clausuraba revistas: *Prensa confidencial*, *Azul y Blanco*, *Resumen*, *Primera Plana* y –la más lamentada- *Tía Vicenta*, que tomaba en solfa al ceñudo presidente con sus bigotes de morsa.

Finalmente, algunas organizaciones patronales comenzaron a criticar al gobierno (SRA, UIA), del mismo modo que importantes referentes, como Aramburu. En el ejército, donde el teniente general Alejandro Agustín Lanusse había reemplazado a Julio Alsogaray como comandante en jefe desde 1968, también había inquietud, y la declaración de Onganía a los generales acerca de los diez o veinte años que serían necesarios para reestructurar la sociedad

argentina no contribuyeron a calmarlas. De modo que Onganía fue depuesto el 8 de junio de 1970.

Su régimen sería caracterizado más tarde por Lanusse, en su libro *Mi testimonio*, como “un fascismo desapasionado y burocrático, un corporativismo desangrado y estéril”. Uno de los periodistas que había promovido su figura, Mariano Grondona, afirmó mucho después: “Nos equivocamos. Onganía no resultó un déspota a la manera de Franco, antes de él, o Pinochet, después de él. Lo habíamos sobreestimado”. En cuanto a Perón, comentó: “Creo que de este mozo habrá que decir lo que decía Agustín Álvarez de Lavalle: ¿quién lo metió al general a reformar instituciones, asunto que no era del arma de caballería?”

Dependencia o liberación

A fines de la década de los 60 y comienzos de la siguiente aparece una nueva palabra mágica: “liberación”. Más precisamente, liberación “social y nacional” o “nacional y social” según el peso que tuvieran el nacionalismo o el socialismo en la perspectiva ideológica. El concepto deriva de las teorías de la dependencia, ampliamente difundidas en América Latina en esos años (Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso).

Esas teorías, con raíces en el nacionalismo y el marxismo, habían criticado las ideas desarrollistas porque no explicaban las causas del subdesarrollo y porque algunos de los remedios que proponían –como la atracción de capitales extranjeros, por ejemplo- aumentaban la dependencia en lugar de reducirla.

Según estos análisis, la causa principal del subdesarrollo era la *dependencia*: los países subdesarrollados no eran los que *todavía* no se habían desarrollado, sino que no se desarrollarían hasta que hubieran roto los lazos que los sometían a los países centrales, es decir, hasta que se hubieran *liberado*.

No se trataba de cambiar una forma de dependencia por otra, como había ocurrido en el pasado: de la dependencia colonial de España y Portugal, los países latinoamericanos habían pasado a la dependencia económica de Gran Bretaña (comercio), luego a la dependencia financiera del capital extranjero (principalmente europeo) invertido desde fines del siglo XIX...

El desarrollismo sólo ofrecía un cambio de metrópolis (los Estados Unidos) y de vías de penetración (contratos petroleros, radicación de industrias). Pero, como en los casos anteriores, esto se hacía en beneficio del capital metropolitano, lo cual contribuía a deformar aún más la economía dependiente. Sólo una transformación radical en la relación con las potencias dominantes podía iniciar un proceso de crecimiento centrado en los intereses nacionales.

El imperialismo actuaba, sobre todo, a través de sus aliados locales: los que radicales y peronistas habían llamado "oligarquía", es decir, los sectores de la clase dominante cuyos intereses coincidían con los del capital extranjero (grandes terratenientes, grandes comerciantes, financistas). Entonces, la *liberación nacional* implicaba también una *liberación social*, es decir, la toma del poder político por un frente nacional y popular que desplazara a la oligarquía. Ese frente debería incluir a la clase obrera, los sectores populares y la *burguesía nacional* -como se llamaba a la que, trabajando con capitales

nacionales, dependía para su crecimiento del mercado interno y estaba entonces interesada en ampliarlo-. En términos políticos, eso implicaba una alianza entre el peronismo, el MID, el PCP y otros partidos menores, así como los grupos nacionalistas y de izquierda menos sectarios.

Este tipo de alianza es el que se constituyó en 1972, cuando Lanusse abrió el juego político. Llamada primero Frente Cívico de Liberación Nacional (Frecilina) y luego Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), en los dos casos incluía en su nombre la palabra mágica: “liberación”.

Sólo una nube empañaba el entusiasmo de los que esperaban con impaciencia las elecciones: ¿era posible en la Argentina el acceso al poder de un movimiento de liberación por la vía electoral? Los últimos dieciocho años parecían demostrar lo contrario. El triunfo de la Unidad Popular en Chile en 1970 era el único ejemplo en América Latina y sólo duró tres años. Muchos escépticos pensaban entonces que, para asegurar el triunfo de un proceso de liberación, era necesario prepararse para la lucha armada.

La lucha armada

El Frente de Liberación Nacional argelino y su triunfo sobre el colonialismo francés, así como la tenaz lucha del Vietcong contra el ejército norteamericano en Vietnam eran, por supuesto, los modelos más prestigiosos. Pero el más cercano estaba en Cuba, y éste proponía la estrategia “foquista”: un pequeño grupo guerrillero instalado en una zona de difícil acceso para el ejército regular podía ser la chispa que encendiera la insurrección. Ganándose la confianza de

la población campesina de la región, que le proveería de alimentos y nuevos combatientes, su influjo podía extenderse y multiplicarse en otros focos hasta que, gracias a la desmoralización y disgregación final de las tropas regulares, podría lanzarse a la conquista de las ciudades y dominar el país. Divulgada por el intelectual francés Régis Debray (*Revolución en la revolución*), que había acompañado al Che Guevara en Bolivia, esa teoría inspiraría numerosos intentos en toda América Latina y varios en la Argentina.

En nuestro país, las regiones más apropiadas para la instalación de un foco revolucionario parecían ser los montes tucumanos y salto-jujeños, de difícil acceso, cercanos a regiones donde un campesinado pobre presentaba similitudes con el original cubano. La crisis de la industria azucarera en Tucumán había dejado sin trabajo y en condiciones miserables a miles de trabajadores, movilizados en frecuentes protestas.

Después de los Uturuncos (1959-60), en 1963 un segundo intento, relacionado con los preparativos del Che en Bolivia, se desarrolló en la selva salto-jujeña, dirigido por Jorge Masetti, fundador de la agencia cubana de noticias *Prensa latina*. En 1968 hubo otro intento en Taco Ralo (Tucumán), protagonizado por una célula de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP).

Aunque todos estos grupos fueron descubiertos y desmantelados por la gendarmería, esto no disuadió al PRT (*El combatiente*) -una de las fracciones en que se dividió el partido en 1968, dirigida por Mario Roberto Santucho y Benito Arteaga-, de concentrar en los montes tucumanos la actividad del ERP en los años 70.

Pero la estrategia foquista estaba lejos de ser aceptada por todos los que se disponían a comprometerse en la lucha armada. Muchos señalaban que la Argentina era un país esencialmente urbano, donde la población y la actividad económica se centraba en las grandes ciudades y donde los sectores campesinos eran marginales: en esas condiciones era imposible concebir una marcha de la revolución del campo a la ciudad. Además, era en las ciudades y sus alrededores donde estaban los potenciales militantes de los grupos revolucionarios: obreros y estudiantes. De modo que la mayor parte de las organizaciones armadas optaron por la guerrilla urbana. Había pocos antecedentes, sobre todo de grupos brasileños y uruguayos, confrontados con el mismo problema de adaptar la estrategia foquista a sociedades eminentemente urbanas, de modo que fue preciso aguzar la imaginación.

Algunos de los grupos guerrilleros provenían del PC, que mantenía una posición legalista, opuesta a la lucha armada, actitud considerada por muchos de los jóvenes militantes como reformista y no revolucionaria. Ya antes del cordobazo se separaron quienes formaron el Partido Comunista Revolucionario (PCR), influidos por las ideas maoístas y las tácticas insurreccionales, que organizaron un Ejército de Liberación Nacional. Luego se separaron los organizadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), filo-peronistas, que terminarían por confluir con Montoneros, y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), que más tarde se integrarían al ERP.

El más importante de esos grupos guerrilleros, cuyos miembros fundadores provenían del nacionalismo católico (Mario Eduardo Firmenich, Fernando Abal Medina), y al que se incorporarían luego otros procedentes de la resistencia

peronista, salió a luz en 1970 con el secuestro y asesinato de Aramburu y, poco después, de José Alonso, reivindicando además la anterior ejecución de Augusto Vandor. Montoneros se definía como organización político-militar que encarnaba el peronismo revolucionario, reconocía el liderazgo de Perón y trazaba la línea divisoria en términos de peronismo-antiperonismo. Alcanzó una amplia inserción en la Juventud Peronista (JP), sobre todo en sus ramas sindical (Juventud Trabajadora Peronista, JTP) y estudiantil (Juventud Universitaria Peronista, JUP): “FAR-Montoneros, son nuestros compañeros”, se coreaba en las grandes manifestaciones; “Ni votos ni botas, fusiles y pelotas”. Estos grupos llegaron a ocupar brevemente algunas pequeñas poblaciones, como Garín, en la provincia de Buenos Aires (FAR) o La Calera, en Córdoba (Montoneros). Eran frecuentes los ataques a guarniciones militares y de gendarmería o policiales para procurarse armas.

Finalmente, las teorías de la dependencia se difundieron también dentro de la Iglesia católica, inspirando la llamada Teología de la Liberación, cuya influencia se evidenció en la conferencia episcopal latinoamericana de Medellín (1968) y en la organización del movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (mayo de 1968).

Paradójicamente, después de cuatro años de obsesión por el orden (que incluía el largo del pelo de los jóvenes y de la falda de las mujeres), la “revolución argentina” dejaba un país al borde de la explosión y con varias organizaciones armadas activas.

El cuero del General

La sustitución de Onganía por el general Roberto Marcelo Levingston significaba el fin de los delirios de permanencia indefinida y el principio del reconocimiento de los datos de la realidad. Así, por ejemplo, el gobierno permitió la normalización de la CGT, que, a través de un plan de lucha y de tres paros generales, presionó para un mejoramiento de los salarios. En 1970 y 1971, hubo aumentos de salarios por decreto (7 y 6 por ciento respectivamente). El gobierno también toleró la actividad de los partidos políticos, que formaron acuerdos: *La Hora del Pueblo*, en la que participaban sobre todo peronistas y radicales, y el *Encuentro de los argentinos*, promovido por el PC y sus aliados, que presionaban por el retorno al orden constitucional y la convocatoria a elecciones.

Desde el punto de vista económico, después de una nueva devaluación y el aumento de las retenciones, se tomaron algunas medidas favorables a la industria nacional: créditos a las pymes, ley de compra nacional... Esta política desarrollista del ministerio de Aldo Ferrer le permitió a Levingston buscar apoyo político en la UCRI, en figuras como Oscar Alende o Celestino Gelsi.

Pero en marzo de 1971 se produjo un nuevo estallido de protesta en Córdoba, el “viborazo”, llamado de ese modo porque el interventor en la provincia había aludido a la “víbora venenosa que anida en Córdoba”, a la que, según él, Dios le habría ordenado decapitar. En los meses siguientes hubo también puebladas en Rosario, el valle del Río Negro (Neuquén, Cipoletti, General Roca) y, en 1972, en Mendoza. Nuevamente cundía el temor (para unos) y la esperanza

(para otros) de un *argentínazo*.

En esas condiciones, Lanusse, que tenía un plan para que las fuerzas armadas pudieran salir airoso de la desastrosa situación que habían creado, tomó directamente la presidencia el 23 de marzo de 1971. El plan de Lanusse se llamaba Gran Acuerdo Nacional (GAN) e incluía la autorización del funcionamiento de los partidos políticos y la convocatoria a elecciones, con la particularidad de que se trataba de *todos* los partidos (es decir, incluía al PJ) y de elecciones sin proscripciones. Si recordamos que durante dieciséis años esos habían sido los puntos inaceptables para la mayor parte de los militares y sus aliados “democráticos”, podremos evaluar la audacia de la propuesta.

Fueran cuales fueran las motivaciones de Lanusse (algunos sostienen que planeaba encabezar la fórmula presidencial del GAN), lo cierto es que aplicó su plan con decisión. El funcionamiento de los partidos políticos fue autorizado y comenzaron los preparativos para las elecciones. Varias rebeliones militares fueron abortadas. El punto conflictivo seguía siendo el regreso de Perón: tal vez las informaciones que manejaba el gobierno sobre su estado de salud, o el recuerdo de su supuesta cobardía –proverbial entre sus camaradas de armas– permitían suponer que no querría volver. De ahí la provocación de Lanusse: si no volvía –dijo– era porque “no le daba el cuero”. Cuando finalmente Perón regresó, los manifestantes recordaron irónicamente la frase enarbolando enormes cueros de vacuno.

Lo cierto es que la invitación ponía a Perón en un aprieto. Si volvía, ¿podría disciplinar a todos sus partidarios, incluidos los Montoneros? ¿Sería capaz de

apaciguar las tensiones sociales, poniendo fin a los estallidos urbanos? Esto es lo que casi todos esperaban de él; si no lo lograba, el mito de su infalibilidad y omnipotencia sufriría un golpe mortal. De todos modos, su presencia cotidiana iría desgastando esa imagen, protegida hasta entonces por la lejanía y las formas indirectas de comunicación. Pero tampoco podía negarse a volver sin defraudar a sus partidarios, que habían luchado durante dieciocho años para que pudiera hacerlo.

En cuanto a la opinión antiperonista y militar, lo único que todavía no estaba dispuesta a tolerar era que Perón regresara como presidente. Una vez que éste aceptó delegar su candidatura, la puerta quedaba abierta para el salto al vacío.

Mientras tanto, el 22 de agosto de 1972 se produjo un episodio que cerraba el ciclo represivo de la penúltima dictadura y anticipaba los procedimientos de la última. Un grupo de presos políticos logró huir del penal de Rawson. Dieciséis de ellos, recapturados, fueron asesinados por sus carceleros en la base naval Almirante Zar, de Trelew.

Peronistas contra peronistas

La condición de residir en el país para poder ser candidato a la presidencia – último pretexto para impedir la candidatura de Perón- obligó al Frejuli a postular la fórmula Héctor J. Cámpora–Vicente Solano Lima, aunque eso no engañara a nadie: “Cámpora al gobierno, Perón al poder” es uno de los lemas de la época. La introducción del *ballottage* en el sistema electoral alimentó brevemente la esperanza de que la suma de los votos antiperonistas en la segunda vuelta superara a los de la coalición peronista. Pero ésta alcanzó cerca del 50 por ciento de los votos en la primera vuelta, frente al 21 por ciento de la UCRP, y no hubo necesidad de una segunda.

Después de dieciocho años, el peronismo volvía al poder. Dado que su proscripción había sido el principal problema político durante casi dos décadas y una de las causas del incremento de la violencia, muchos esperaban que el cambio de situación permitiera restablecer cierta estabilidad política y, sobre todo, la paz. El talante conciliador y moderado que exhibía Perón en este nuevo avatar (el “león herbívoro”) permitía alentar esa esperanza.

Pero los hechos pronto mostrarían que tal esperanza era infundada: al enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas sucedería la lucha entre fracciones peronistas. La ambigüedad ideológica que había permitido al peronismo cosechar apoyos en un espectro político que iba de la extrema derecha a la extrema izquierda, tan útil cuando estaba en la oposición, se transformaba ahora, en el gobierno, en su principal debilidad. La autoridad absoluta, que había permitido a Perón arbitrar entre esas diferentes corrientes

cuando estaba lejos, comenzaba a desgastarse con el ejercicio cotidiano. La lealtad al líder, que había sido necesaria para mantener la unidad durante la travesía del desierto, ya no parecía la virtud principal a algunos de sus partidarios, que habían asumido una ideología más definida. Finalmente, a la muerte de Perón, ya nada podía evitar que los fragmentos del movimiento se dedicaran a devorarse mutuamente. Pero antes hubo una breve *primavera*.

La primavera camporista

El 25 de mayo de 1973, Cámpora (“el Tío”) asumía la presidencia, rodeado por Salvador Allende y el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, ante una multitud que llenaba la Plaza de Mayo y coreaba “Chile, Cuba, el pueblo te saluda”, “Fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera los yanquis de América Latina”. Podemos imaginar cómo era percibido esto, en Washington y en los establecimientos militares, donde también resonaban otros lemas coreados por la multitud: “Se van, se van y nunca volverán”, “Ya van a ver, cuando vengamos los muertos de Trelew”.

La JP había desempeñado un papel considerable en la campaña electoral y algunos de sus miembros, aliados o simpatizantes ocuparon cargos importantes en el gobierno nacional (Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores) o fueron elegidos gobernadores de provincias como Buenos Aires (Oscar Bidegain), Córdoba (Ricardo Obregón Cano), Mendoza (Alberto Martínez Baca), Salta (Miguel Ragone), Santa Cruz (Jorge Cepernic). La Universidad de Buenos Aires, dirigida por Rodolfo Puiggrós, y muchas otras, pasaron prácticamente a

manos de la JUP. Los empleados ocuparon reparticiones públicas, empresas estatales, hospitales, escuelas, facultades, radios, canales de televisión (500 ocupaciones entre el 4 y el 15 de junio, 2.000 durante todo el periodo), y crearon una sensación de situación pre-revolucionaria.

Desde la Plaza de Mayo una multitud se dirigió hacia la cárcel de Devoto, donde estaban muchos de los presos políticos (“El Tío presidente, libertad a los combatientes”) y forzaron su liberación aun antes de que Cámpora firmara el indulto. Unos días después, el Congreso votaba una amplia amnistía.

Los militares sólo podían mirar con alarma todo esto: al nombrar comandante en jefe del ejército al general de división más joven (Jorge Raúl Carcagno), Cámpora produjo el retiro de nueve generales. Carcagno, que se definía como *nacional y popular*, intentó un acercamiento con la JP y Montoneros. Militantes de esas agrupaciones colaboraron con el ejército en el auxilio a las víctimas de inundaciones en la provincia de Buenos Aires (Operativo Dorrego, octubre de 1973). Pero la experiencia fue efímera y sin consecuencias, y su inspirador fue desplazado al asumir Perón la presidencia.

En el aspecto económico y social, el ministro de Economía, José Ber Gelbard (un empresario que presidía la Confederación General Económica (CGE)) promovió un plan conocido como “Compromiso para la reconstrucción, la liberación nacional y la justicia social” entre la CGT y la CGE, avalado luego por la Sociedad Rural Argentina y la Cámara Argentina de Comercio. Se trataba de controlar la inflación, que había llegado a un cien por ciento en el primer semestre de 1973; el método era el *pacto social*, grato a Perón ya que reflejaba

la supuesta armonía entre el capital y el trabajo que siempre había postulado. Después de un aumento de salarios del 20 por ciento, se suspendieron las convenciones colectivas por dos años y, luego de un reajuste de tarifas, se congelaron los precios por un periodo similar.

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios reforzaba el sentimiento de la rama sindical de haber sido excluida de la fiesta. Frente a eso, incubaba la esperanza de que Perón les restituiría su papel de *columna vertebral*, que veían usurpado por aquellos a los que consideraban infiltrados.

La “juventud maravillosa”

Desde Madrid, Perón no había escatimado elogios hacia los jóvenes, a los que consideraba el segmento más dócil del Movimiento, en comparación con el sector sindical –tentado por la influencia vandonista- y los partidos neoperonistas, dirigidos por caudillos políticos provinciales movidos por sus propios intereses. Perón hablaba entonces de “trasvasamiento generacional” y alentaba, también, a las *formaciones especiales* (grupos guerrilleros), que contribuían a desestabilizar al régimen militar creando una sensación de inseguridad. Algunos de sus escritos más *revolucionarios*, alabando la revolución cubana o a Mao Tsé Tung, les estaban especialmente dirigidos. Los jóvenes militantes de Montoneros creyeron entonces –o aparentaron creer- que el líder les hacía un lugar en el Movimiento. Era lo que necesitaban para que su organización político-militar se expandiera rápidamente, insertándose en el vasto movimiento popular.

Muy presentes en la universidad, a través de la JUP, y en los colegios secundarios, por medio de la UES, habían multiplicado también las *unidades básicas* en barrios populares y en villas miseria, donde dirigían movimientos de villeros e inquilinos. Muchos *sacerdotes para el Tercer Mundo* los recibían en sus parroquias. Todas estas organizaciones constituían la *tendencia revolucionaria*. Rodolfo Galimberti representó a la JP en el Consejo Nacional Justicialista hasta 1973.

En cuanto a la organización político-militar, entre 1970 y 1973 se había ido ampliando con la incorporación de las FAP, las FAP-17 de octubre, Descamisados, las FAR. Estaba rigurosamente organizada en *regionales*, divididas en *columnas*, y éstas en *unidades básicas de combate* (cuadros estratégicos) y *unidades básicas revolucionarias* (cuadros tácticos y aspirantes). Sólo la JTP encontraba obstáculos casi insalvables para desarrollarse debido a la estrecha vigilancia de los sindicalistas y el escaso margen para la oposición en esas organizaciones. De ahí que la burocracia sindical haya sido uno de los principales enemigos de la *tendencia* (“Se va a acabar... la burocracia sindical”) y uno de los principales blancos de las acciones armadas.

Ya antes de la aparición pública de Montoneros, un comando que luego se integraría a ellos había asesinado a Vandor en 1969; un año después, a José Alonso y, más tarde, a Dirk Kloosterman (mecánicos) y Rogelio Coria (construcción). Finalmente, en 1973, fue el turno del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, crímenes que reivindicaban lemas como “Rucci, traidor, saludos a Vandor”. Otros atentados terminaron con la vida de militares (el general Juan Carlos Sánchez, comandante del 2º cuerpo, asesinado por un

comando FAR-ERP), jefes policiales (comisario Alberto Villar) y políticos (Arturo Mor Roig, radical, artífice del GAN). Algunos secuestros extorsivos (como el de los hermanos Born) produjeron importantes rescates; en este caso, el botín fue de sesenta millones de dólares.

Periódicos como *El Descamisado* o *Evita montonera* tenían una circulación considerable, así como la revista *Militancia* de Rodolfo Ortega Peña, independiente, que coincidía en algunos aspectos con Montoneros, aunque se distanciaba en otros. Desde el punto de vista ideológico, estos grupos postulaban un *socialismo nacional*, adaptado –según ellos– a las características de nuestro país, como lo indican algunos de sus lemas más frecuentes: “Perón, Evita, la patria socialista”, “Vamos a hacer la patria peronista, vamos a hacerla montonera y socialista”. Como estrategia, postulaban la guerra popular prolongada, inspirada en las ideas de Mao y en la experiencia vietnamita.

La columna vertebral

Para la mayoría de los sindicalistas, los montoneros y sus aliados no eran peronistas: eran *bolches*, *zurdos*, *infiltrados*, *bichos colorados*.... Para definirse frente a ellos, actualizaron la consigna del 45 (“Ni nazis ni fascistas, peronistas”), transformándola en “ni yanquis ni marxistas”, y al lema de la *tendencia* opusieron “Perón, Evita, la patria peronista”.

Estos sindicalistas no eran amigos de novedades: el socialismo no les decía nada; en cambio, añoraban la *comunidad organizada* anterior al 55, en la que el movimiento sindical había ocupado un puesto de primera importancia. Su ideal

era la *justicia social* que se lograría mediante acuerdos entre un capital *humanizado* y las organizaciones obreras, gracias al papel arbitral del estado. Esperaban que el estado favoreciera nuevamente a los obreros, como lo había hecho antes del 55, y no sistemáticamente a los patrones, como había ocurrido en las décadas siguientes.

Para poder defender los salarios y las condiciones de trabajo de sus representados, era necesario, según ellos, que los sindicatos fueran fuertes, es decir, un sindicato único por rama, con afiliación obligatoria y libre manejo de sus finanzas, sin injerencias gubernamentales. Eso lo habían alcanzado con la Ley de Asociaciones Profesionales de 1958 y, desde entonces, su poder se había consolidado: eran los interlocutores obligados de las organizaciones empresarias y del estado; ningún acuerdo social podía hacerse sin ellos.

Además, dentro de cada sindicato se había originado una capa burocrática cada vez más poderosa. Manejando las enormes sumas provenientes de las cotizaciones sindicales y, sobre todo, de las obras sociales, fueron centralizando el poder (cargos rentados pero también negociados y corruptelas). Alejándose cada vez más de las bases, terminaron por constituir un grupo bien definido: la burocracia sindical, más interesada en defender sus propios intereses que los de sus presuntos representados. Esta burocracia sindical, dominante sobre todo en las grandes organizaciones y en la zona industrial del Gran Buenos Aires, había perdido algo de su poder a fines de los años 60, con el desarrollo de otros núcleos industriales en el interior, principalmente en Córdoba. Más recientes y menos controladas por las direcciones nacionales, estas regionales habían conocido dirigentes más

cercanos a las bases, así como sindicatos por empresa, sobre los que las centrales no tenían autoridad. Fue ese tipo de sindicalismo el que había contribuido a la producción de estallidos como el cordobazo y el viborazo. A nivel nacional, Raimundo Ongaro era una figura de referencia de ese sindicalismo combativo. Pero, en casi todas las organizaciones, los que amenazaban seriamente a la burocracia sindical eran los *bichos colorados*, de ahí su interés en eliminarlos.

Para eso, contaba con grupos de choque, como la Juventud Sindical Peronista (JSP) y el Comando de Organización (C de O). En otros ámbitos, con orientaciones ideológicas similares, actuaban la Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Comando de Orientación Revolucionaria (formado por ex militares y suboficiales) y agrupaciones como Guardia de Hierro. Frente a la JP, organizaron una JP de la República Argentina (JPRA).

La hora de la verdad

Si esas dos alas del Movimiento habían podido coexistir mientras estaban en la oposición, mucho más difícil sería su convivencia estando en el gobierno, lo cual se puso ya en evidencia durante el regreso de Perón. La organización de su recepción había quedado en manos de una comisión integrada casi exclusivamente por representantes de los grupos de derecha, dirigida por el teniente coronel retirado Jorge Osinde, quien se desempeñaba como subsecretario de Turismo y Deportes en el Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega, el ex policía que se había ganado la confianza de

Perón en Madrid y que la usaba para extender su influencia sobre la derecha peronista.

El objetivo principal que se fijó esa comisión fue evitar que la *tendencia* copara el acto, o, simplemente, que sus columnas –que se preveían las más numerosas– ocuparan un sitio demasiado visible frente al palco desde donde hablaría Perón. Para eso, el 20 de junio, cientos de hombres fuertemente armados, pertenecientes en su mayoría a las organizaciones antes mencionadas, se desplegaron sobre el puente donde estaba situado el palco y en sus alrededores. Al llegar las columnas de Montoneros y la JP comenzaron a disparar para alejarlas y se entabló entonces un intenso tiroteo. Más de dos millones de personas convergían mientras tanto hacia ese lugar y se encontraron con los que huían, en medio de una confusión total. La fiesta del retorno de Perón terminaba en una tragedia; nunca se conoció el número de víctimas (¿trece, doscientos?).

En los días siguientes, Perón reafirmó los principios tradicionales del movimiento y cuestionó a quienes intentaban alterarlos. Más directo, Rucci anunció: “Se acabó la joda”. Poco después renunciaban Cámpora y Solano Lima, el presidente del Senado era desplazado de la sucesión y el gobierno provisional recaía en el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, casualmente yerno de López Rega. Los miembros de la *tendencia* y sus aliados y simpatizantes perdieron todos los puestos que habían ocupado en el gobierno nacional; en los meses siguientes, también caerían los gobernadores de Buenos Aires y de Córdoba. Esos funcionarios eran reemplazados por miembros de la vieja guardia peronista o por burócratas sindicales (como, por

ejemplo, el metalúrgico Victorio Calabró, que quedó como gobernador de Buenos Aires).

Dado que los dirigentes de la *tendencia* no querían creer que quien impulsaba esta reversión de las situaciones era el mismo Perón, acudieron a una explicación habitual en la época colonial (“Viva el rey; muera el mal gobierno”): la teoría del *cerco*, del *entorno*, según la cual *el Viejo* estaba rodeado por un grupo que filtraba la información que recibía y distorsionaba sus decisiones.”Isabel”, López Rega y su familia componían este círculo íntimo, asociado con la burocracia sindical. La designación de “Isabel” como candidata a la vicepresidencia parecía confirmar esta versión, así como el desinterés del viejo caudillo por lo que pudiera pasar después de su muerte, que sus médicos anunciaban no muy lejana. Sin embargo, por el momento, Perón parecía ser el único capaz de impedir el caos: recibió entonces el 62 por ciento de los votos y el 12 de octubre de 1973, asumió su tercera presidencia.

Vino nuevo en odres viejos

Dos conceptos resumían el proyecto de Perón, uno nuevo y otro tradicional. El nuevo era la *democracia integrada*, que reconocía el papel de los partidos políticos y del Parlamento, desdeñados en sus anteriores gobiernos. Así, por ejemplo, reconstruyó sus relaciones con la UCR, dirigida por Balbín, como antes lo había hecho con los jefes militares y con la Iglesia. El concepto tradicional era el *pacto social* entre sindicatos y organizaciones patronales, con el arbitraje del estado, ya intentado por Cámpora y Gelbard y al que recurría

ahora Perón para contener la inflación que las expectativas de una y otra parte habían desencadenado.

El magro aumento del 20 por ciento establecido en el acuerdo de junio del 73 y la suspensión de las convenciones colectivas por dos años, aunque acompañados por un congelamiento de los precios, no satisfacían las expectativas de los trabajadores: en febrero de 1974 los salarios reales se habían reducido un 7 por ciento. Pero esas restricciones permitieron disminuir drásticamente la inflación (4 por ciento en el segundo semestre de 1973) y anunciar la *inflación cero* para el futuro inmediato. Sin embargo, eso no duraría mucho: ante el fracaso de la renegociación del pacto social, en marzo del año siguiente, Perón, en función arbitral, otorgaría un nuevo aumento salarial del 13 por ciento, que las empresas podrían trasladar a los precios. Otros aumentos encubiertos (por reclasificación de tareas, premios por producción, etc.), trasladados también a los precios, así como el aumento de las tarifas de los servicios públicos, harían subir la inflación al 37 por ciento anual durante el primer semestre de 1974.

Además, el aumento del precio del petróleo por la Organización de países exportadores (OPEP) afectaba a toda una serie de insumos: se trataba, en este caso, de una inflación importada. Si las empresas respetaran los precios máximos establecidos se reducirían sus márgenes de ganancia; de modo que sus reclamos iban acompañados por aumentos de precios no autorizados, reducción de la producción –con el consiguiente desabastecimiento- y desarrollo del mercado negro. La representatividad de la CGE –a la que se habían incorporado, un poco forzosamente, otras entidades patronales, como la

UIA- comenzó a ser discutida.

La Comisión de precios, salarios y nivel de vida –integrada por la CGT, la CGE y el gobierno- no pudo llegar a un acuerdo, y finalmente el gobierno decidió subsidiar la compra de insumos importados mediante un tipo de cambio preferencial. Eso contribuyó a duplicar el déficit fiscal, ya inflado por el aumento del número de empleados públicos y de los gastos sociales. El 12 de junio de 1974, ante los sabotajes al *pacto social*, Perón amenazó con renunciar. Su intento de organizar la puja por la distribución del ingreso y disciplinar a los actores sociales utilizando los instrumentos del estado sólo había tenido un éxito relativo y provisorio, que duraría lo que le quedaba de vida. Luego de su muerte, esa puja se desencadenaría de manera salvaje, constituyendo una de las causas de la caída del gobierno de su esposa.

A falta de recompensas pecuniarias, los sindicalistas obtuvieron, en cambio, una nueva Ley de asociaciones profesionales que reforzaba aún más su poder. Esta ley extendía el mandato de las autoridades sindicales de dos a cuatro años, y el plazo para la convocatoria de asambleas de uno a dos; permitía la intervención de las regionales del interior por las autoridades centrales; declaraba ilegales los sindicatos por empresa; permitía a los sindicatos sustituir a los delegados de fábricas y otorgaba a los dirigentes sindicales inmunidades similares a las de los parlamentarios. Si no podían exhibir ante sus bases grandes conquistas, los dirigentes sindicales podían en cambio defender sus posiciones con más facilidad.

La tradicional política económica peronista se retomó también con la Ley de

protección al trabajo y la producción nacional, que favorecía sobre todo a la pequeña y mediana industria con créditos, el “compre argentino” para las empresas públicas y algunas facilidades para la exportación. Convenios con Cuba impulsaron, por ejemplo, la venta de automotores. Por su parte, las exportaciones tradicionales se vieron beneficiadas por los buenos precios del mercado internacional, que estimulaban las inversiones y el aumento de la productividad en la agricultura pampeana. Se desarrollaron nuevos mercados (la Unión Soviética, países socialistas y del Medio Oriente) que compensaron la pérdida de otros, como los de la Comunidad Económica Europea (CEE) para la carne. Todo esto permitió alcanzar nuevamente un superávit en la balanza comercial. En suma, el año 1974 cerró con un 6,7 por ciento de crecimiento del PBI y una desocupación de sólo 2,5 por ciento.

En este contexto, lo más preocupante eran las organizaciones armadas, que no habían dejado de actuar durante el gobierno de Perón. Poco después de las elecciones, el asesinato de Rucci a manos de Montoneros fue un abierto desafío a la autoridad del líder, que tenía al sindicalista entre sus hombres de confianza. En enero del año siguiente, el ERP atacó un cuartel en Azul, provincia de Buenos Aires. El gobierno, que ya había clausurado el diario *El Mundo* (del PRT), hizo lo mismo con *El Descamisado* y *Militancia*.

Finalmente, en el acto del 1º de Mayo de 1974 se produjo la ruptura entre Perón y Montoneros. Creyéndose quizá el mito del diálogo que se abriría en esos actos entre el líder y su pueblo, los militantes no habían ido sólo a oír, sino también a hacerse oír. Después de abuchear a “Isabel” (“No hinchén más las bolas, Evita hay una sola”), interrumpieron varias veces el discurso de Perón

(“¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”), hasta que éste los trató de estúpidos e imberbes. Las columnas de la *tendencia* se retiraron entonces de la plaza, dejándola medio vacía. Poco después, la rama juvenil era excluida del consejo superior justicialista y Montoneros pasaba a la clandestinidad.

Así las cosas, el 1º de julio se produjo la muerte de Perón, dejando al país en la más inquietante incertidumbre.

“Isabel” y “el Brujo”

Rodeada por su microclima palaciego, “Isabel” se dedicó a eliminar los últimos reductos de la *tendencia* aún en pie, mediante la intervención de Mendoza y de Santa Cruz, y a consolidar el poder de la burocracia sindical, desplazando a sus enemigos por medio de la intervención o ilegalización de sindicatos (Smata Córdoba, René Salamanca; Luz y Fuerza Córdoba, Agustín Tosco; gráficos, Raimundo Ongaro; telefónicos, Julio Guillán...) La nueva Ley de Seguridad Nacional imponía severas sanciones a las huelgas no autorizadas y a la ocupación de fábricas.

Pero los sindicalistas, dirigidos por el secretario general de la UOM y de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel, aspiraban a mucho más. Muerto el líder que fijaba los objetivos estratégicos y articulaba las fuerzas necesarias para alcanzarlos, los sindicatos no reconocían ya ninguna autoridad superior a la que subordinar sus demandas. Desplazada la *tendencia* de las posiciones que ocupaba, habiendo perdido la CGE la mayor parte de su representatividad por

su participación en un *pacto social* que muchos empresarios consideraban desfavorable, el poder de presión de la CGT sobre el gobierno ya no tenía contrapeso. Sus dirigentes, además, estaban presionados por la movilización de las bases, sobre las que la JTP no carecía de influencia.

La CGT trataría, por un lado, de institucionalizar su poder, disputando, por ejemplo, posiciones claves en el gobierno, como la presidencia del Senado o de Diputados. Pero sobre todo, volviendo a la tradición de defensa de los intereses corporativos que había desarrollado en la oposición, exigirá mejoras sustanciales en salarios y condiciones de trabajo. Sólo esto podía legitimar la autoridad de la burocracia sobre el movimiento sindical, cuestionada por las tendencias combativas, clasistas, y la JTP. Entonces, empezó a reclamar la convocatoria de las convenciones colectivas prometidas para 1975. Gelbard tuvo que renunciar en octubre, y el grupo gobernante llamó a Alfredo Gómez Morales, el más prestigioso de los economistas del peronismo.

Éste se encontró con una situación económica deteriorada: déficit de la balanza de pagos, caída de las reservas, sobrevaluación del peso, mercado negro, caída de las inversiones... Luego de otorgar un aumento salarial del 15 por ciento -trasladable a los precios- intentó reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria, devaluó el peso un 50 por ciento e intentó flexibilizar el control de precios. En tres meses la inflación subió un 26 por ciento y en marzo de 1975 debió otorgar un nuevo aumento salarial del 20 por ciento. La CGT, que se había opuesto a varias de esas medidas, siguió exigiendo la convocatoria de paritarias y, finalmente, Gómez Morales debió renunciar.

El 2 de junio de 1975, asumió el Ministerio de Economía un desconocido llamado Celestino Rodrigo, sostenido por López Rega, que inició un acercamiento a los *lobbies* empresarios a través de Ricardo Zinn, su *monje negro*. Súbitamente, el nuevo ministro anunció una devaluación del 100 por ciento, un aumento del 175 por ciento en el precio de los combustibles, del 75 por ciento en la electricidad y otros servicios públicos. Fue el “rodrigazo”: el país quedó en suspenso.

La inflación mensual de junio fue del 21 por ciento. En esas condiciones se reunieron las paritarias: no es de extrañar, entonces, que los aumentos de salarios convenidos llegaran en algunos casos al 200 por ciento, ni que el promedio fuera del 160 por ciento. Pese a la manifestación de la UOM a Plaza de Mayo, para *agradecer* a “Isabel” la conquista lograda, y luego la de la CGT para pedir el reconocimiento de los convenios, éstos fueron anulados y se establecieron, por decreto, aumentos generales del 50 por ciento en lo inmediato y dos del 15 por ciento en los meses próximos. La CGT declaró una huelga general para el 7 de julio, que paralizó totalmente el país. El gobierno debió homologar los convenios suscriptos el mes anterior, y Celestino Rodrigo y López Rega finalmente tuvieron que renunciar.

En agosto de 1975 la inflación llegaba al 238 por ciento anual. El veterano Antonio Cafiero, nuevo ministro de Economía, intentó inútilmente frenarla mediante la indexación de precios y salarios. La especulación con el dólar era mucho más lucrativa que la inversión, y ésta se detuvo bruscamente, lo que implicaba una caída de la producción industrial que se tradujo en recesión y desempleo.

Mientras tanto, las organizaciones patronales que no se sentían representadas por la CGE constituyeron una Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) y adoptaron una actitud crítica frente al gobierno. Sintiendo que perdía el apoyo del *establishment*, "Isabel" trató de ganarse el sostén militar, nombrando ministro del Interior a un coronel en actividad. Esto fue visto por la mayoría de los militares como un intento de involucrarlos en el gobierno y pidieron la destitución del comandante en jefe del ejército, que fue reemplazado por el general Jorge Rafael Videla. En diciembre se produjo un intento de sublevación de oficiales de la fuerza aérea.

Pese a la *tregua social* de ciento ochenta días (ni huelgas ni despidos), los conflictos se prolongaban y las organizaciones armadas intervenían secuestrando y asesinando a empresarios. En febrero de 1976, el nuevo ministro de economía, Emilio Mondelli produjo un mini-rodrigazo, con devaluación del 82 por ciento y aumento de tarifas, pero nada contrarrestaba la sensación de que la economía marchaba a la deriva. La inflación de marzo fue del 50 por ciento mensual. La Apege convocó a un *lock-out* que tuvo amplia repercusión. La situación política no era mejor: el MID se retiró del Frejuli y, al dividirse el bloque de diputados, el gobierno quedó en minoría.

Mientras tanto, las organizaciones guerrilleras no cesaban su actividad: en noviembre de 1974, Montoneros *ejecutó* al jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar; en 1975 atacó al regimiento 29 de Infantería de monte, en Formosa, con un saldo de doce soldados y dieciséis guerrilleros muertos; a fines de 1975, el ERP atacó el arsenal del Batallón 601 de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires, y hubo seis militares y cuarenta y nueve

guerrilleros muertos. Ambas operaciones fracasaron, pero los militares las presentaron como ejemplos del peligro que representaba la *subversión*.

En febrero de ese año, "Isabel" había firmado el decreto ordenando a las fuerzas armadas aniquilar la acción subversiva, decreto que, después de derrocarla, los militares del "Proceso" invocarían como fuente de legitimidad de sus operaciones. En Tucumán se puso en marcha el Operativo Independencia, laboratorio de la guerra anti-subversiva. Unos 5.000 soldados, a las órdenes de los generales Acdel Vilas y Antonio D. Bussi sucesivamente, terminaron allí con una centena de guerrilleros del ERP, a costa de cientos de víctimas civiles (225 muertos, 600 desaparecidos).

Pero antes de la represión masiva ejercida por los militares hubo otra, más selectiva, y también fuera de la ley. La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) organizada por José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, comenzó a actuar por lo menos desde noviembre de 1973, cuando ejecutó el atentado que hirió gravemente al senador nacional radical Hipólito Solari Yrigoyen, que impulsaba una ley de democratización del sindicalismo. Desde entonces, sus víctimas se contaron por centenas: el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, el intelectual Silvio Frondizi, el abogado Alfredo Curutchet, el ex vicegobernador de Córdoba Atilio López, el ex sub-jefe de la policía bonaerense Julio Troxler... La Conadep registra diecinueve homicidios políticos en 1973, cincuenta en 1974 y trescientos cincuenta y nueve en 1975...

El baño de sangre había comenzado.

El Estado terrorista

En el periodo que se inicia a fines de 1975, con la exacerbación de la llamada “guerra sucia” contra la *subversión*, y que culmina con la guerra de las Malvinas, en 1982, una nueva promoción de las fuerzas armadas se apoderó del estado y desencadenó una represión masiva utilizando métodos terroristas de una crueldad inusitada.

El millón de personas que había coreado “se van... y nunca volverán” en la Plaza de Mayo durante la asunción de Cámpora –y los millones que los habían acompañado en todo el país- no podían imaginar que los militares volverían tan pronto. Mucho menos que lo harían como un ángel exterminador, decidido a llevar a cabo la mayor hecatombe de la historia argentina.

Si lo que ocurrió durante los tres años de gobiernos peronistas contribuye a explicar el cambio de actitud de los militares, eso no fue, seguramente, la causa principal. Antes bien, habría que buscarla en la evolución de la ideología dominante en las fuerzas armadas, en la que el trienio 1973-1976 sólo fue un paréntesis excepcional. La idea de que las fuerzas armadas –“que nacen con la Patria”- constituyen uno de los pilares básicos de la nacionalidad y son responsables de la custodia de sus valores permanentes está presente desde la profesionalización del ejército, a fines del siglo XIX. En aquella época, el enemigo interno estaba representado por las ideologías *extrañas* que, como el anarquismo y el socialismo, socavaban los cimientos de la nacionalidad. La participación militar en la represión de la Semana Trágica de 1919 (en forma de

grupos parapoliciales, sin uniforme: *guardias blancas*) y en las huelgas patagónicas de 1921 (con uniformes y armas del ejército) ejemplifica, de alguna manera, esa actitud.

En los años 30, cuando el concepto de “nación católica” compite exitosamente con la tradición liberal, muchos militares ven en la Iglesia el otro pilar de la nacionalidad, surgida, según ellos, de la alianza entre la cruz y la espada. Esta concepción alcanza su máxima expresión durante el régimen militar que gobierna de 1943 a 1946. El establecimiento de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas y la entrega de las universidades a notorios exponentes del *nacionalismo* católico más extremo (Jordán Bruno Genta) son algunos ejemplos de esta convergencia militar-clerical. El enemigo siguen siendo las ideologías *extrañas*, representadas ahora por el comunismo.

El triunfo de Perón en 1946 estuvo basado en gran medida en el apoyo de estos sectores de la Iglesia y de las fuerzas armadas, a los que sumó el de la mayor parte de los sindicatos obreros. Pero, a lo largo de su gobierno, la alianza original fue resquebrajándose. En 1951 afloraron los sectores antiperonistas en el ejército, y desde 1954 el régimen peronista entró en conflicto con la jerarquía eclesiástica y el antiperonismo se impuso también en el seno de la Iglesia. La convergencia de ambos sectores y su alianza con los partidos “democráticos” determinaron el triunfo de la “revolución libertadora”.

Desde entonces, como hemos visto, los militares se consideraron únicos garantes de la *libertad* y la *democracia* ; para defenderlas, tenían que evitar que

el peronismo volviera al poder. Pero también la *civilización occidental y cristiana* debía ser defendida de la agresión comunista. La doctrina de la seguridad nacional, de las fronteras ideológicas, había justificado esas funciones de las fuerzas armadas. Pero en los años 70, esas doctrinas habían sido superadas ante la aparición de un nuevo enemigo, mucho más vasto y peligroso que los anteriores: la *subversión*.

La palabra “subversión” tenía un sentido amplio y otro más preciso. Según el primero, era todo lo que pusiera en tela de juicio el orden económico, social, político y cultural imperante (esto es, las verdades inmutables, el respeto reverencial a la autoridad y las jerarquías, la disciplina impuesta...) Era *subversiva* la ocupación de una fábrica por sus obreros, la enseñanza de teorías marxistas en la universidad, muchos aspectos de la cultura juvenil (los recitales de rock, por ejemplo). En palabras de Videla, “la subversión es el trastocamiento de los valores tradicionales”, de “los principios de autoridad y jerarquía”. Según Massera, había que buscar sus orígenes en las ideas de Marx, Freud y Einstein.

En su sentido más preciso, la *subversión* estaba constituida por las organizaciones político-militares (ERP, Montoneros) y su periferia de colaboradores y simpatizantes. Ambos sentidos estaban íntimamente relacionados, ya que una cosa conducía a la otra: cuando los militares hablaban de *subversión*, se referían al conjunto.

Si bien el origen de la agresión *subversiva* estaba, según ellos, en el exterior

(se hablaba, sobre todo, de una fantasmagórica Cuarta Internacional), había que buscar también sus raíces en las estructuras económicas, sociales y políticas que se habían desarrollado desde 1930 o desde 1945 en la Argentina. Industrias *artificiales* (protegidas, subvencionadas, ineficientes) mantenidas, sobre todo, gracias al apoyo del estado; un estado-providencia que se ocupaba de todo y sustituía a la iniciativa privada; sindicatos demasiado poderosos que imponían sus exigencias a empresarios y gobiernos débiles; *demagogia* peronista imbatible electoralmente... Desde esta perspectiva, esa estructura económico-social desembocaba en una exacerbación de los conflictos sociales que, a su vez, determinaban una inestabilidad política crónica y constituían el caldo de cultivo de la *subversión*.

Entonces, para los militares de la época existía un objetivo inmediato y otro a largo plazo. En lo inmediato, había que aniquilar a las organizaciones guerrilleras y su entorno, así como la vasta gama de grupos y organizaciones revolucionarias en que reclutaban sus militantes. A largo plazo, era preciso transformar las estructuras de la sociedad argentina, que producían insatisfacción y rebeldía, mediante una política económico-social drástica, coherente y aplicada en forma duradera, con efectos irreversibles. Sólo así se sentarían las bases de una sociedad donde imperaran el orden y la seguridad y no volviera a aparecer la *subversión*.

Ambos objetivos tenían sus modelos y sus teorías. La guerra anti-subversiva se inspiraba principalmente en la que había llevado a cabo el ejército francés en

Argelia entre 1954 y 1962. Consistía en la cuadriculación del territorio, dividido en zonas de combate; en operaciones de inteligencia basadas en la tortura; tanto los que morían durante la tortura como los que sobrevivían y eran asesinados por sus carceleros pasaban a la categoría de desaparecidos, para no tener que rendir cuentas... Los métodos eran explicados en la Escuela de Guerra de París, donde hacían cursos de perfeccionamiento muchos militares argentinos.

En 1961, esos militares organizaron el Primer curso interamericano de guerra contra-revolucionaria, dirigido por el general Alcides López Aufranc. Desde 1963 hubo una misión francesa en la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires, a la que en 1969 un acuerdo entre los ejércitos de los dos países le dio carácter permanente. Los miembros de esa misión difundían su doctrina en artículos y libros (*La guerra moderna* del coronel Roger Trinquier era uno de los clásicos). Desde 1967, esos métodos fueron utilizados por los norteamericanos en Vietnam del Sur (Operación Fénix) y enseñados en la Escuela de las Américas, en Panamá.

En cuanto al segundo objetivo, tampoco era nuevo (también la “revolución argentina” se había propuesto cambiar las estructuras), pero ninguno de los intentos anteriores había podido avanzar demasiado porque pronto se les habían opuesto fuertes resistencias. Ahora, José Alfredo Martínez de Hoz estaba resuelto a implementar esas transformaciones sin retorno,, aprovechando el reflujo de las fuerzas sociales y el temor provocado por la

represión. El modelo más inmediato era el que proponían los *Chicago boys*, quienes reorganizaban la economía chilena desde 1973 según los principios neoliberales proclamados por Milton Friedman.

La mayor resistencia a esas políticas provendría ahora de sectores nacionalistas y desarrollistas del ejército, que temían que el desmantelamiento del estado y el debilitamiento de la industria nacional repercutieran negativamente en la capacidad de defensa del país. Vinculados muchos de ellos a Fabricaciones Militares y con cargos en empresas estatales, no habían olvidado el éxito del *milagro brasileño* y temían que las políticas liberales debilitaran a la economía argentina frente a la de su tradicional rival. Sectores empresarios que habían prosperado gracias al proteccionismo del estado y sus prebendas, desconfiaban también de una apertura que los dejara librados a sus propios medios. Así, los diez años que había pedido Martínez de Hoz para apreciar los resultados de su política se redujeron a cinco, lo que no deja de ser un récord en la aplicación de una política económica en la Argentina.

El 24 de marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla fue designado presidente de la República por la junta de comandantes en jefe de las tres armas. El argumento invocado para justificar la intervención militar era un vacío de poder, que determinaba una situación económica y social caótica, en la que la *subversión terrorista* amenazaba con llevar a la disolución nacional y la anarquía. Frente a esa situación, las fuerzas armadas sostenían que cumplían

con su obligación de restablecer el orden y la autoridad, para derrotar a la *subversión* y eliminar sus raíces reorganizando a la sociedad argentina. Se iniciaba el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, de duración indefinida porque no tenía plazos, sino objetivos. Como en los golpes anteriores, una gran parte de la sociedad recibió éste con alivio y expectativas, recordando los primeros años de la “revolución argentina”. Otra parte, recordaba los últimos, con inquietud y temor.

Por algo será...

En la concepción militar, la *subversión* tomaba la forma de círculos concéntricos. En el centro estaban los ideólogos y los jefes de las organizaciones político-militares, rodeados por los cuadros combatientes. Alrededor de ellos se hallaban los militantes (políticos, sindicales, estudiantiles) de superficie, que no participaban directamente en las acciones armadas, aunque las apoyaban y cubrían. Más allá, la vasta y heterogénea gama de simpatizantes, que incluía a todos los sectores de izquierda, aun a los que no aprobaban la lucha armada.

Para aniquilar a la *subversión* había que llegar al círculo central, pero sus miembros vivían en la clandestinidad, era difícil identificarlos y encontrarlos. Por eso era necesario empezar por la periferia, deteniendo, interrogando – torturando- a la mayor cantidad de sospechosos posible. Con las informaciones así obtenidas se podría ir estrechando el cerco.

En cuanto a los detenidos, una vez determinado su grado de *peligrosidad*, podían ser dejados en libertad (los detenidos por error o “garrones”); podían quedar presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (detenidos PEN) por un periodo indefinido –que para algunos fueron los siete años que duró el “Proceso”–; podían pasar a disposición de la justicia si algún elemento lo permitía.; podían ser asesinados y aparecer como víctimas de enfrentamientos fraguados, o, simplemente, desaparecer. El recuerdo de la liberación de los presos políticos en 1973 –entre los cuales se hallaban muchos militantes de organizaciones guerrilleras- obsesionaba a los militares: la única manera segura y definitiva de evitar que eso se repitiera era matar a los sospechosos. La selección de los que debían morir quedaba al arbitrio de la autoridad militar de la zona donde se practicaba la detención.

Los que estaban en el *limbo*, antes de ser blanqueados o asesinados, permanecían en alguno de los 340 centros clandestinos de detención y tortura instalados en todo el país, conocidos como “chupaderos”. Los bebés capturados con sus madres destinadas a desaparecer, lo mismo que los que nacían en cautiverio, eran entregados a familias vinculadas a los secuestradores. El *grupo de tareas* (o *patota*), formado por militares, suboficiales, policías y colaboradores civiles, se encargaba también de saquear la casa del *subversivo* detenido: era el botín de guerra, que en algunos casos se ampliaba obligando al detenido a ceder la propiedad de sus inmuebles.

El ensayo general se había llevado a cabo en Tucumán, a fines de 1975.

Después, ya durante el gobierno militar, el procedimiento se extendió a todo el país. Las tres fuerzas participaban por igual en los procedimientos, repartiéndose áreas de responsabilidad, y los militares en actividad formaban parte de los *grupos de tareas*, involucrándose así en los hechos y creando una complicidad colectiva. Los pocos militares que se negaron a utilizar los métodos adoptados fueron dados de baja, como el coronel Juan Jaime Cesio, degradado en 1983 por acompañar a las Madres de Plaza de Mayo.

Todas las operaciones fueron planeadas por los comandantes de las tres fuerzas, que las ordenaron y supervisaron. La represión fue institucional: los grupos parapoliciales que habían actuado los años anteriores (como la Triple A) se disolvieron o integraron a los *grupos de tareas*. No hubo *excesos*: las víctimas fueron designadas por los comandos de cada región después de minuciosos estudios.

Los grupos guerrilleros fueron desmantelados durante los primeros meses, pero eso no significó el fin de la represión. Les siguieron sindicalistas de base (delegados de fábrica, miembros de comisiones internas) denunciados por patrones o burócratas sindicales; militantes barriales y estudiantiles; abogados defensores de presos políticos; sacerdotes, intelectuales y artistas progresistas; militantes de partidos de izquierda y de organismos defensores de los derechos humanos... En fin, todos los que pudieran representar una oposición real o potencial a los designios del "Proceso", participar en alguna forma de movilización popular, expresar una protesta social o simplemente un

pensamiento crítico. Como resume uno de los represores: “Primero eliminaremos a los subversivos, después a sus cómplices, luego a sus simpatizantes, por último a los indiferentes” (general Ibérico Saint-Jean, gobernador de Buenos Aires, mayo de 1977).

Hoy sabemos que en 1976 hubo 1.187 muertos en supuestos enfrentamientos, unos 3.500 desaparecidos y más de 5.000 detenidos PEN. En la época, nadie conocía esa información. La prensa no hablaba del tema e incluso la información de boca a oreja se hacía a cuentagotas y con múltiples precauciones. “Anoche, un grupo de hombres armados, vestidos de civil, se llevó a mi vecino.” *Por algo será...*, pensaban muchos.

“El silencio es salud”

La frase, que podía leerse en un cartel que giraba alrededor del Obelisco, podría sintetizar el sentimiento predominante en los primeros años del “Proceso”. Una buena parte de la sociedad, que recibió con alivio el fin del trienio peronista, nunca quiso enterarse del precio que se estaba pagando por el supuesto restablecimiento del orden y la tranquilidad. Otra parte sólo fue enterándose poco a poco de lo que estaba ocurriendo, sumando los casos particulares que conocía, ya que ningún medio de comunicación informaba sobre la mayoría de los casos ni daba cuenta de su carácter sistemático y general. Al principio, sólo los familiares y amigos de desaparecidos, que frecuentaban despachos oficiales, militares y eclesiásticos buscando

información sobre sus allegados, pudieron advertir que eran cada vez más numerosos. Todos recibían la misma respuesta: sus familiares no estaban detenidos y no se sabía nada de ellos.

En este marco, algunos obispos, que recibían a numerosos familiares de desaparecidos y empezaban a advertir la magnitud de la masacre que se estaba cometiendo, comenzaron a reaccionar. En este punto, se diferenciaban del resto de la jerarquía eclesiástica, que apoyaba directamente el exterminio (por ejemplo, los vicarios castrenses) o que hacía la vista gorda. El primero en pagar con su vida su protesta fue el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, asesinado en agosto de 1976. Al año siguiente, también moría en un presunto accidente de tránsito el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León. Otros eclesiásticos que denunciaron las violaciones a los derechos humanos fueron el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, el de Viedma, Miguel Hesayne (integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el de Quilmes, Jorge Novack (integrante del Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos). Mientras tanto, la Comisión Episcopal Argentina se limitaba a enviar cartas confidenciales al gobierno, una sola de las cuales, de tono abstracto y elusivo, se hizo pública el 7 de marzo de 1977.

En mayo de 1977, Videla *aclaró* por fin cuál había sido el destino de los desaparecidos, que se resumía a cinco posibilidades: habían pasado a la clandestinidad; habían sido asesinados como traidores por su propia organización; se habían ocultado para marginarse de la lucha; se habían

suicidio; o bien, afirmó, era posible “que hayan sido el resultado de posibles excesos de la represión de las fuerzas armadas”. Ese mismo año hubo 3.000 desaparecidos y los presos PEN llegaron a 8.000. La prensa seguía manteniendo un ominoso silencio: el único diario que mencionaba el tema era *The Buenos Aires Herald*, cuyo director pronto tuvo que abandonar el país.

En estas condiciones, un grupo de catorce madres de desaparecidos, cansadas de recorrer comisarías, cuarteles, ministerios, iglesias, se reunió el 30 de abril de 1977 para pedir audiencia a Videla. Ante la negativa, decidieron volver cada semana a la Plaza de Mayo. Una de las iniciadoras del grupo, Azucena Villaflor, fue secuestrada en esa época, lo mismo que otras dos compañeras. Sus restos fueron encontrados en la costa atlántica muchos años después y presentaban señales de haber sido arrojados al mar desde aviones.

Durante los primeros años del régimen, las Madres de Plaza de Mayo fueron la única manifestación visible de protesta. Su actividad incansable, su presencia en todas las manifestaciones sociales, sus pañuelos blancos que permitían distinguirlas fácilmente, hicieron de ellas un símbolo de la resistencia a la dictadura. La APDH, que había sido fundada a fines de 1975, también realizó una intensa actividad en defensa de los derechos humanos, con la participación de políticos como Alicia Moreau de Justo y Raúl Alfonsín, sindicalistas como Alfredo Bravo, obispos y otras personalidades. En junio de 1978, la APDH publicó una solicitada en *La Prensa* con el nombre de 2.500 desaparecidos. En este marco, el Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos reunía sobre

todo a dirigentes religiosos católicos, protestantes, judíos... Desde fines de 1976 actuaba también la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas; al año siguiente se constituyeron las Abuelas de Plaza de Mayo, con el objetivo de encontrar a sus nietos apropiados por los represores; en 1979 se formó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con Emilio Mignone a la cabeza. La vieja Liga Argentina por los Derechos del Hombre (vinculada al PC) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj, de Adolfo Pérez Esquivel) completan este conjunto de organizaciones, que a fines de 1979 habían reunido documentación sobre 5.000 desaparecidos y otros tantos presos PEN.

La patria financiera

Disueltas la CGT y la CGE, intervenidos los principales sindicatos, prohibidas las actividades políticas y sindicales, Martínez de Hoz tuvo la posibilidad de implantar unas políticas económicas, que hubieran sido muy resistidas en otras circunstancias.

El primer objetivo fue frenar la inflación, que a mediados de 1977 alcanzaba un 140 por ciento. El método elegido no fue novedoso: congelamiento de salarios con precios liberados. En los primeros tres meses del "Proceso", el salario real se redujo en un 40 por ciento y su deterioro continuó hasta el final: si durante el trienio peronista los salarios habían representado alrededor de un 45 por ciento del PBI, en 1982 su participación se había reducido a un 22 por ciento. Con

esto se corregía, según los admiradores de Martínez de Hoz, uno de los defectos estructurales de la economía argentina.

La obligada reducción del consumo permitió alcanzar un superávit en la balanza comercial. En cuanto al déficit fiscal, se redujo al permitir a las empresas públicas financiar sus gastos recurriendo al crédito, interno y externo. El endeudamiento externo, en especial, creció desmesuradamente. Desde el aumento del precio del petróleo decidido por la OPEP en 1973, los bancos norteamericanos y europeos recibían enormes depósitos de los países exportadores (llamados “petrodólares”), que trataban de rentabilizar otorgando préstamos a países o empresas del Tercer Mundo, en forma bastante indiscriminada. Este es uno de los orígenes del problema de la deuda, que estallaría en la década siguiente en el mundo y que tanto afectaría a la Argentina, muy endeudada.

Para hacer previsible el valor de la moneda y favorecer los movimientos internacionales de capitales, se estableció un cronograma de devaluaciones sucesivas, la “tablita”, al que se adaptarían también las tarifas de las empresas estatales. Esta política monetaria pronto se tradujo en un retraso cambiario que estimuló el aumento de las importaciones de bienes de consumo sin detener verdaderamente el proceso inflacionario (171 por ciento en 1977, 163 por ciento en 1978).

El aumento de las importaciones se debía también a la reducción de los aranceles, pieza maestra de la política de apertura comercial. Ésta implicaba la

disminución primero y finalmente la supresión de las retenciones a las exportaciones tradicionales, eterno reclamo de la Sociedad Rural Argentina y de las otras entidades de productores agropecuarios. Desde 1980, el embargo establecido por los Estados Unidos a las ventas de cereales a la Unión Soviética -en represalia por su intervención en Afganistán- proporcionó a la Argentina -que no se plegó a la medida - la ocasión de aumentar sus exportaciones hacia ese gran mercado, el cual se convirtió en uno de los principales compradores. La lucha contra el *comunismo* no pasaba, evidentemente, por allí.

En cuanto a las importaciones, el paulatino dismantelamiento de las tarifas arancelarias tenía objetivos más ambiciosos. Se trataba de terminar con el tradicional proteccionismo, que había permitido la proliferación de industrias ineficientes, aunque eso significara la desaparición de toda una franja de pequeñas y medianas empresas. La contracción del mercado interno debido a la caída del poder adquisitivo de los salarios y la supresión de casi todos los subsidios, junto con el encarecimiento del crédito, actuaban en el mismo sentido. La *desindustrialización* así producida (traducida en la reducción de la participación de la industria en el PBI) debilitaba a los sindicatos industriales y reducía la capacidad de los trabajadores para defender sus salarios, cumpliendo así con varios objetivos del "Proceso".

Con el apoyo de los sectores más concentrados del capital nacional, los bancos extranjeros y los organismos de crédito internacionales, el equipo de Martínez

de Hoz trató de disciplinar a los actores económicos según las reglas del mercado y el premio a la eficiencia, terminando con el papel decisivo del estado en las pujas corporativas y la distribución del ingreso (*subsidiariedad* del estado).

En la nueva economía, el eje ya no sería la industria, sino el capital financiero. Para favorecer su desarrollo, una Ley de entidades financieras permitió la expansión del crédito en función de los depósitos obtenidos por los bancos y liberó las tasas de interés. El estado garantizaba los depósitos, que aumentaron considerablemente, así como el número de bancos y entidades financieras. El aumento de las tasas producido por la competencia entre esos bancos perjudicaba aún más a las pequeñas y medianas empresas que necesitaban esa financiación y favorecía, en cambio, la especulación. Entonces, cayeron las inversiones y la producción industrial, y los fondos se destinaron a la llamada “bicicleta financiera”: muchas empresas tomaban créditos en dólares en el exterior, los colocaban en el circuito financiero local y, para reembolsarlos, recurrían a nuevos créditos. Otras empresas compensaban, con las ganancias obtenidas en el sistema financiero, sus quebrantos operativos. La mayor parte de los depósitos estaban colocados a corto plazo y los capitales podían salir sin trabas del país, de modo que el mercado era sumamente volátil. Era la época de la “plata dulce”.

Finalmente, en 1980 la timba terminó con una crisis financiera en la que, a partir de la quiebra del Banco de Intercambio Regional y otros tres bancos

agrandados gracias a la especulación, las corridas amenazaron a muchos otros y el Banco Central debió asumir el pasivo de sesenta entidades.

Esta política económica era fuertemente criticada por casi todos los dirigentes políticos y sindicales, muchas de las organizaciones patronales y gran parte de los militares. Finalmente, en marzo de 1981 Martínez de Hoz debió renunciar, dejando un país devastado: en el último año, el PBI había caído un 9 por ciento, el PBI industrial un 22 por ciento en los cinco años que duró su conducción; infinidad de pequeñas y medianas industrias habían desaparecido, dejando a sus obreros sin trabajo; muchos se refugiaron en el pequeño comercio, poco más eficiente que las industrias barridas. Pese a nuevas devaluaciones –de hasta el 80 por ciento- el retraso cambiario continuaba y la balanza comercial seguía siendo negativa. En este contexto, la devaluación amenazaba a muchas empresas endeudadas en dólares, y el estado tuvo que asumir esas deudas, que se sumaron a la deuda pública haciendo que el endeudamiento externo alcanzara niveles inusitados.

La crisis financiera y las expectativas de nuevas devaluaciones produjeron la fuga de numerosos capitales, mientras que la inflación se mantuvo en un doscientos por ciento. Ante el desbarajuste, el gobierno de Viola recurrió al consejo de Álvaro Alsogaray y a la asistencia técnica de Domingo F. Cavallo, quien fue designado presidente del Banco Central. Para el grupo gobernante, la estabilización monetaria y el crecimiento económico eran condiciones necesarias para la apertura política, de modo que ésta fue postergada

indefinidamente.

“Derechos y humanos”

Si dentro del país el tema de los desaparecidos era tabú, en el exterior fue adquiriendo una creciente difusión. Muchos desaparecidos eran extranjeros y los gobiernos de sus países de origen exigían explicaciones: Francia protestó por el caso de dos monjas, Suecia retiró su embajador a causa de la desaparición de una joven de esa nacionalidad. Varios países de América Latina y de Europa recibían miles de exiliados (se calculan entre treinta y cuarenta mil).

Al asumir Jimmy Carter la presidencia de los Estados Unidos, en enero de 1977, cambió la política de ese país en relación con los derechos humanos: si se presentaba como campeón de la democracia y la libertad frente al comunismo, mal podía seguir sosteniendo regímenes que representaban todo lo contrario. Los créditos para la compra de equipos militares por parte del gobierno argentino se redujeron y, al año siguiente, una enmienda votada por el Senado limitó aún más esa financiación, condicionándola a la comprobación de progresos en el respeto a los derechos humanos. El cambio de sensibilidad en los Estados Unidos se trasladó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que comenzó a recibir denuncias por desapariciones, especialmente desde la Argentina. Todo esto tenía resonancia en los foros internacionales -restricción de créditos del Banco Mundial (BM) y

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); críticas de la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- y era condenado por la prensa mundial. Según el gobierno militar, se trataba de una campaña anti-argentina implementada por la *subversión*.

En 1978 debía jugarse el Mundial de fútbol en la Argentina. Muchos países dudaron en participar, temiendo que su presencia pudiera interpretarse como un signo de normalidad que el régimen aprovechara para desmentir las acusaciones que circulaban en el mundo. Dentro del país, una profusa campaña de publicidad con el eslogan “los argentinos somos derechos y humanos” procuró identificar la condena del terrorismo de estado con críticas al país y sus habitantes. Lo logró ampliamente: miles de personas exhibían el lema en sus solapas, las ventanillas de sus coches, las vidrieras de sus comercios...En los estadios, los jerarcas del régimen pudieron presenciar los partidos sin que se produjeran los incidentes que se habían temido. En su habitual ronda, las Madres de Plaza de Mayo eran increpadas por transeúntes que las acusaban de dar una mala imagen del país. Los miles de periodistas extranjeros que llegaron para cubrir el acontecimiento pudieron llevarse la impresión de un país que funcionaba normalmente y de un gobierno que gozaba del consenso de la población.

Si ya desde el principio no se percibía en la actitud de la gente ninguna nota de disenso, el triunfo del equipo argentino anuló totalmente esa posibilidad. Dos elementos centrales de la cultura popular –la pasión por el fútbol y el

patrioterismo– se conjugaron para llevar los festejos a su paroxismo en medio de un país asolado por la represión. El único gesto de dignidad en medio de ese ambiente fue el de los vice-campeones holandeses, que se negaron a estrechar la mano de Videla; los medios de comunicación lo ignoraron.

La indiferencia de gran parte de la sociedad argentina ante el terrorismo estatal no fue suficiente para acallar las denuncias que seguían circulando en el exterior, y el gobierno debió aceptar una visita de la CIDH que se realizó en septiembre de 1979. La delegación recibió denuncias de 5.818 desapariciones. Los familiares que hacían cola para presentar sus denuncias fueron insultados por los manifestantes que acudían a la Plaza de Mayo para festejar frente a la Casa Rosada el triunfo de la selección argentina en el campeonato mundial de fútbol juvenil celebrado en Japón.

El informe de la CIDH representó un considerable respaldo a la defensa de los derechos humanos. Incluso el PJ, silencioso hasta entonces, emitió una declaración diciendo que “no podemos aceptar que la lucha contra una minoría terrorista –de la que también hemos sido víctimas- se la quiera transformar en una excusa para implantar el terrorismo de estado”, aunque es cierto que su autor, Deolindo Bittel, fue pronto desautorizado por “Isabel” y otros dirigentes del partido.

Los organismos de derechos humanos presentaron en esa época dos peticiones: una –con 6.700 firmas- contra la ley de presunción de fallecimiento, que permitía dar por muertos a los desaparecidos; otra –con 30.000 firmas-

pidiendo la libertad de los presos políticos. Las Madres de Plaza de Mayo fueron recibidas por Juan Pablo II, quien luego pidió el esclarecimiento del destino de los desaparecidos. En agosto de ese año, la publicación de las listas de detenidos-desaparecidos era reclamada por una petición con 12.500 firmas, entre las cuales aparecían –por primera vez en ese tipo de documentos- las de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Marta Lynch y Jorge Luis Menotti, el entrenador del equipo de fútbol argentino. Del otro lado, abundaron también las declaraciones contra la CIDH –en nombre de la no injerencia en nuestros asuntos internos y el respeto de la soberanía nacional- emitidas por muchas entidades patronales, obispos y organizaciones como la Liga Argentina de Víctimas del Terrorismo.

El Premio Nobel de la Paz, otorgado en 1980 a Adolfo Pérez Esquivel (preso PEN hasta poco antes) por su labor en defensa de los derechos humanos, fue otra muestra del interés de la comunidad internacional por la situación argentina y del aislamiento del régimen.

La última aventura

El aniquilamiento de la *subversión* era el único punto en que coincidían todos los militares del “Proceso”. Sólo algunos –como el general Luciano Benjamín Menéndez- habían propuesto el fusilamiento público de los *subversivos*, a lo que la mayoría de sus camaradas se había opuesto pensando en la repercusión que eso podía tener en el exterior (“¿Qué diría el Papa?”). En todo lo demás, el

partido militar funcionaba como cualquier otro partido: disidencias entre las tres fuerzas y entre las diferentes facciones que dividían el ejército se manifestaban en las instituciones que el “Proceso” se había dado a sí mismo: junta de comandantes en jefe, comisión de asesoramiento legislativo, presidencia de la nación.

La cuestión más discutida fue la política económica de Martínez de Hoz, sobre todo a medida que se vio que no daba los resultados esperados. Durante 1978, el conflicto sobre el canal de Beagle dividió a los partidarios de ir a la guerra con Chile y los que se oponían. Pero el verdadero problema que estaba detrás de la creciente oposición entre los “duros” y los “blandos” –como se los llamaba entonces- era, como en las anteriores dictaduras militares, el de la sucesión.

El tema no figuraba en los manuales de contra-insurgencia y tampoco se había planteado en los modelos sobre los que se basaban esas teorías (Argelia, Vietnam). En ambos casos se había tratado de ejércitos de ocupación que, una vez perdida la guerra, se volvieron a su país dejando el poder en manos de sus enemigos. El ejército argentino, si bien se había comportado desde 1955 como un ejército de ocupación, no podía hacer lo mismo.

Todos los militares estaban de acuerdo en un punto: el gobierno que sucediera al “Proceso”, civil o cívico-militar, debía mantener la orientación formulada en sus actas fundacionales. Se trataba de restablecer el sistema constitucional, agregándole una forma institucionalizada de tutela de las fuerzas armadas. Pero había diferentes puntos de vista sobre el tema. Los *duros* pensaban que la

clase política existente el 24 de marzo de 1973 era irrecuperable, que sólo un profundo relevo generacional permitiría contar con interlocutores civiles válidos, pero eso requería mucho tiempo, durante el cual las fuerzas armadas no podían dejar el poder sin que el caos volviera a apoderarse del país.

Los *blandos* consideraban irrealizable ese proyecto: al desgaste del gobierno en el poder, en una situación económica que se agravaba, no tardarían en sumarse crecientes presiones sociales y políticas; responder con un incremento de la represión tan sólo aumentaría el aislamiento en el orden internacional. No era posible entonces aguardar una renovación de los dirigentes, que la prohibición de la actividad política hacía aún más lenta: había que tratar con los existentes, para lograr una convergencia cívico-militar que asegurara la continuidad del “Proceso”. A eso se dedicaron con ahínco dos de los principales personajes del régimen: el almirante Emilio Eduardo Massera, comandante en jefe de la marina y miembro de la junta militar hasta junio de 1978, y el general Roberto Marcelo Viola, que ese mismo año sucedió a Videla como comandante en jefe del ejército. Los dos aspirantes a la sucesión multiplicaron sus contactos con dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas. Se trataba de organizar un Movimiento de Opinión Nacional (MON) cívico-militar, capaz de ganar las elecciones y de gobernar cuando los militares dejaran el poder.

Cuando Viola fue designado presidente de la nación por la junta de comandantes, el 29 de marzo de 1981, los contactos del gobierno con sindicalistas y políticos se intensificaron: la mayoría de los ministros del nuevo

gobierno fueron civiles; muchos pertenecían a partidos menores (PDP, MID, partidos provinciales) y a asociaciones patronales. Pero el MON no avanzaba: se oponían, por un lado, los *duros* de las fuerzas armadas, que temían que la apertura significara liquidar el “Proceso” y volver a la situación anterior al golpe. Los políticos, por su parte, no veían la conveniencia de asociarse con un régimen desacreditado y en retirada.

El alivio de la represión permitió un renacimiento de la actividad política y sindical, paralizada, en los primeros años de la dictadura, por la represión. René Salamanca (Smata), Oscar Smith (Luz y Fuerza) son los dirigentes sindicales desaparecidos más conocidos, pero no los únicos: miles de delegados y militantes de base siguieron la misma suerte, fueron encarcelados o despedidos de su trabajo. Sindicatos y obras sociales fueron intervenidos; una ley –que no llegó a reglamentarse ni a aplicarse– separaba estas últimas del control sindical; otra ley eliminaba a las organizaciones de tercer grado, como la CGT. La incitación a la huelga era pasible de penas de prisión.

En estas condiciones, ningún grupo sindical participó en la delegación argentina a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1977, lo que fue severamente criticado en ese ámbito y contribuyó al aislamiento internacional del régimen. Un relajamiento de la represión permitió entonces la constitución de la Comisión de los 25, en la que convergieron varias tendencias peronistas, y de la Comisión Nacional del Trabajo, que reunía a dirigentes *dialoguistas* como Jorge Triaca. Finalmente, ya en el marco de la apertura

propiciada por Viola, se reconstituyó la CGT, que nombró secretario general a Saúl Ubaldini. Su movilización a la Plaza de Mayo a fines de marzo de 1982 fue duramente reprimida.

Por su parte, los partidos tradicionales (PJ, UCR, PDC, MID, PI) formaron una multipartidaria, que comenzó a reclamar el restablecimiento del estado de derecho. El entierro de Balbín se transformó en una manifestación política (“Se va a acabar... la dictadura militar”, se coreaba).

En medio de estas presiones, el gobierno de Viola no podía durar, y el 22 de diciembre de 1981 la Junta lo reemplazó por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante en jefe del ejército, de la línea *dura*. A Galtieri no le interesaban los contactos con políticos; él tenía otros planes: el 2 de abril de 1982 ordenó la invasión de las islas Malvinas.

Es difícil explicar lo inexplicable; tomemos en cuenta solamente algunos elementos que pueden haber influido en esa decisión. El “Proceso” se hallaba en un callejón sin salida: todo parecía indicar que los militares volverían a sus cuarteles sin pena ni gloria, rodeados de la hostilidad general, y entregarían el poder a sus enemigos, como en 1973. Sólo un acontecimiento sensacional podía revertir esa situación, y ¿qué mayor acontecimiento –para la mentalidad militar- que la recuperación de ese archipiélago, ocupado por los ingleses y reclamado por la Argentina durante ciento cincuenta años? El Mundial había mostrado el patriotismo de vastos sectores populares y cómo la euforia triunfalista los llevaba a identificarse con el gobierno. Una victoria en las

Malvinas tendría probablemente un efecto mil veces mayor y, en esas condiciones, el héroe de esa batalla podría ser plebiscitado. Resuelto parecía así el problema de la salida del “ Proceso” y el futuro político de Galtieri.

El contexto mundial podía parecer favorable: desde 1980, la invasión soviética a Afganistán había realimentado el clima de la Guerra Fría. En enero de 1981, Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos y puso fin a la política de derechos humanos de su antecesor: lo que definía sus alianzas era la posición de los gobiernos frente al comunismo y no su política interna. En los últimos años, el gobierno argentino había dado muestras de su compromiso con la lucha anticomunista, interviniendo en América Central (Guatemala, El Salvador), donde los *mejores escuadrones de la muerte* eran los entrenados por militares argentinos. Parecía posible entonces esperar –a pesar de lo ingenuo o ignorante que pueda parecer hoy- la neutralidad norteamericana ante una invasión argentina a las Malvinas.

Claro que lo que no tomaban en cuenta los razonamientos anteriores –si no de Galtieri, al menos de su canciller Nicanor Costa Méndez, veterano diplomático- es que Gran Bretaña no sólo seguía siendo una importante potencia militar, sino que era además el principal aliado de los Estados Unidos en la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN) y miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE). Es decir, que enfrentarse militarmente con ese país implicaba enfrentarse también con la OTAN y la CEE. Si pensaban que el gobierno británico, después del hecho consumado, preferiría negociar antes que

embarcarse en una costosísima guerra en las antípodas, es porque no sabían quién era Margaret Thatcher –tan *dura* como los militares argentinos- ni lo bien que le vendría también a ella, para su política interna, una guerra ganada. En fin, que lo que habría podido quedar como un caso récord de ignorancia y estupidez , se transformó en una guerra sangrienta en la que murieron cientos de jóvenes argentinos (¿659?) y británicos (¿250?: las cifras nunca fueron confirmadas).

Al principio, todo salió conforme a lo previsto por el gobierno militar: la invasión de las islas, acompañada por una abrumadora propaganda *patriótica*, recibió el apoyo exaltado e incondicional de casi toda la sociedad argentina: todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos, todos los sindicatos y las organizaciones patronales, personalidades de la cultura, del deporte, del espectáculo rivalizaron en declaraciones rimbombantes que hacían el panegírico de los *soldados de la patria* y de su *gesta heroica*. Grandes manifestaciones recorrían las calles y convergían en la Plaza de Mayo, donde Galtieri era aclamado en el balcón de la Casa Rosada. Los que no compartían la euforia triunfalista no podían hacer otra cosa que callarse.

Tres meses después, el 24 de junio, los diez mil soldados argentinos que ocupaban las islas se rendían ante la poderosa expedición enviada por Gran Bretaña con el apoyo de los Estados Unidos. Quienes habían caído en la trampa de la desinformación triunfalista difundida hasta el día anterior –es decir, una buena mayoría de la gente- pasaron rápidamente de la incredulidad a la

más furiosa indignación: el “Proceso” se había cavado su propia tumba. “Una aventura triste, conducida por incapaces e incompetentes”, la calificaría veinte años después un ex jefe del ejército.

En medio de acusaciones mutuas de las tres fuerzas, la Junta militar se disolvió y fue el ejército, por sí solo, quien designó presidente al general (retirado) Reynaldo B. Bignone, que asumió el 1º de julio, encargado de la ingrata tarea de preparar la salida electoral.

En ese clima de retirada, la Multipartidaria realizó una demostración de fuerza, reuniendo ochenta mil personas en la Plaza de Mayo. La CGT- Brasil (Saúl Ubaldini) rebautizada CGT de la República Argentina, que ya había realizado una concentración en el mismo lugar pocos días antes de la guerra, convocó un paro general en diciembre y otro en marzo de 1983. Los defensores de los derechos humanos, que en abril habían elevado un petitorio con doscientas mil firmas (“Las Malvinas son argentinas; los desaparecidos también” era uno de sus lemas) volvían a movilizarse.

En abril de 1983, el gobierno presentó un documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, donde no decía nada nuevo, y poco después dictó la Ley de Pacificación, donde establecía la prescripción de todos los delitos relacionados con la represión (autoamnistía).

Al retirarse, el “Proceso” dejaba una deuda externa de 43.600 millones de dólares (equivalente a un 70 por ciento del PBI) a cargo del estado, ya que las deudas privadas se habían estatizado a través de los seguros de cambio. El

pago de los intereses insumía el 40 por ciento de los ingresos fiscales y el 69 por ciento de las exportaciones. El déficit fiscal llegaba al 15,6 por ciento del PBI y la inflación era del 345 por ciento. La inversión bruta fija bajó de un promedio del 20 por ciento del PBI a principios de la década de 1970 a un 11 por ciento. Durante ese periodo, el PBI *per capita* cayó un 15 por ciento y la producción industrial un 25 por ciento. Se desconocía el destino de 8.961 desaparecidos registrados por la Conadep -30.000 según los organismos de derechos humanos-. Así terminaba el descenso a los infiernos iniciado con el golpe militar de 1955 y precipitado con el golpe de 1976.

II. UNA DIFÍCIL RECONSTRUCCIÓN

El lector amante de sensaciones fuertes, o que se haya acostumbrado al ritmo trepidante de la primera parte de este libro, se sentirá seguramente defraudado con esta segunda parte. Aquí no hay guerras, ni sucias ni limpias; tampoco revoluciones al alcance de la mano o evitadas justo a tiempo. Nadie ofrece “la vida por...” nada ni nadie, ni plantea la alternativa “... o muerte”. La pérdida de dramatismo y de fanatismo aproxima la política argentina a la de los países occidentales: la democracia es aburrida...

Eso no quiere decir que no haya personajes pintorescos y situaciones curiosas: *carapintadas* que salen de sus cuarteles de tiempo en tiempo; un gobierno peronista que hace exactamente todo lo contrario de lo que hizo, dijo y pensó Perón durante toda su vida; un gobierno derrocado por el ruido de cacerolas y el saqueo de supermercados; un presidente-sorpresa al que muchos no conocían el día anterior a su proclamación... Nada comparable, sin embargo, a la proscripción de la mayoría para salvar a la democracia o a la guerra de la Argentina contra la OTAN y la CEE. Es que, en esta etapa, falta quizás un ingrediente que sobraba en la anterior: la imaginación militar.

Una vez conseguida la impunidad (leyes de Punto Final y Obediencia Debida, indulto), los militares se retiraron de la escena política. Cuando algunos plantearon sus exigencias con las armas en la mano (en los episodios de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli), la mayoría de sus camaradas no los acompañó, aunque tampoco se mostró dispuesta a reprimirlos hasta 1990. En 2001, cuando el país parecía hundirse en el caos, los militares tuvieron la

sensatez de dejarlo hundir en lugar de arrojarle su salvavidas de plomo, como solían hacer en el pasado. El mesianismo militar, responsable de tantas desgracias, parece haber desaparecido con el estrepitoso derrumbe del “Proceso”. El mesianismo revolucionario, por su parte, gastó probablemente sus últimos cartuchos en el ataque al cuartel de La Tablada. Sus antiguos rivales, los burócratas sindicales, con sus organizaciones diezmadas por la desindustrialización y el paro, casi tan desprestigiados como los militares y los ex –guerrilleros, sólo conservan parcelas de su antiguo poder.

Con la disgregación del *partido militar*, el gran capital nacional y extranjero se quedó sin su principal aliado para imponer sus políticas económicas impopulares. Pero entonces sobrevino lo inesperado, la cuadratura del círculo: por primera vez pudo hacerlo a través de un gobierno constitucional, elegido, y, para mayor sorpresa, peronista. La conversión de Carlos Saúl Menem al neoliberalismo más ortodoxo, sin sacarse por eso la camiseta peronista, ofreció el inusitado espectáculo de un gobierno que practicaba una política de derecha con el apoyo electoral de buena parte de los sectores populares. No hacían falta golpes de estado ni dictaduras militares; una hábil manipulación podía reemplazarlos. Claro que, si no era hábil, el resultado podía ser desastroso, como pudo comprobar el sucesor y continuador de Menem, Fernando de la Rúa.

De modo que, por primera vez desde 1930, a partir de 1983 los políticos ocupan el centro de la escena, sin tutores militares que los vigilen o amenacen. Por eso,

cuando alcanzaron un nivel de descrédito comparable al de militares y sindicalistas (como ocurrió en 2001: “que se vayan todos”) no podían culpar más que a sí mismos.

La alternancia de gobiernos constitucionales y dictaduras militares que había caracterizado el periodo 1955-1983 fue reemplazada desde entonces por una alternancia de políticas económicas liberales y “populistas”, practicadas tanto por los gobiernos radicales como por los peronistas. En las primeras, las decisiones se basan (teóricamente al menos) en las indicaciones del mercado, que, para ser eficaz, debe operar libre de trabas y restricciones, es decir, con la menor intervención posible del estado (aunque, en la práctica, todos los sectores empresarios buscan el apoyo de algún segmento del aparato estatal para maximizar sus beneficios). Al perder muchas de sus antiguas funciones económicas y sociales, el estado debe ser redimensionado y reducido por medio de la privatización de sus empresas y la racionalización administrativa. De ese modo, acotando el déficit fiscal, será posible controlar la inflación, llevándola a un nivel cercano a cero, así como también pagar los servicios de la deuda externa. Esas políticas “de ajuste” cuentan, en general, con el apoyo de los sectores capitalistas más concentrados y de los organismos financieros internacionales, hacia los cuales se dirige la transferencia de ingresos procedentes de los asalariados. Encuentran, por lo tanto, resistencias por parte de los sindicatos obreros, los pequeños y medianos productores y buena parte de la baja clase media. Además, suelen tener efectos recesivos.

Cuando la mayoría de la sociedad se harta de las recetas neoliberales, erigidas en *pensamiento único*, se ensayan las políticas llamadas peyorativamente “populistas”, centradas en el mercado interno, al cual procuran ampliar mediante una redistribución del ingreso a favor de los asalariados. Defienden, así, la intervención del estado en la economía, su protección de la industria nacional, sus inversiones productivas y sus servicios sociales. Suelen contar con el apoyo de los sectores obreros (cuando no hay razones políticas que se opongan, como en el caso de las presidencias de Illia y Alfonsín) y de la clase media baja, y con la oposición de las organizaciones patronales, que les adjudican el desencadenamiento de procesos inflacionistas, provocados en especial por el déficit fiscal, la emisión monetaria y los aumentos salariales.

A lo largo de estos años, cada uno de los equipos a cargo del Ministerio de Economía combinó, en distintas proporciones, elementos de ambas políticas, o las aplicó alternativamente según distintas prioridades: la estabilización, de acuerdo con las ideas liberales, o el crecimiento, desde las perspectivas *populista*. Históricamente, las políticas *populistas* fueron practicadas por gobiernos peronistas (el propio Perón entre 1946 y 1952 y en 1973-74) y radicales (Illia); las liberales por las dictaduras militares (la “libertadora”; parte de la “revolución argentina”; el “Proceso”). La inversión copernicana que se produjo en el periodo aquí tratado consistió fundamentalmente en la conversión al neoliberalismo de gobernantes peronistas (Menem) y radicales (De la Rúa), más sensibles a las preferencias del *establishment* (los factores de poder) y de los acreedores financieros internacionales que a las de sus electores.

Finalmente, la combinación de elementos *populistas* (intervención del estado en la economía, inversión pública, redistribución del ingreso, ampliación del mercado interno, protección de la industria nacional...) y liberales (excedente comercial, superávit fiscal, acumulación de reservas, pago de la deuda externa, inflación moderada...) parece ser la fórmula encontrada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna para lograr un fuerte crecimiento del PIB durante varios años.

Democracia con hiperinflación

La victoria de la UCR en las elecciones de 1983 puso fin a casi cuarenta años de peronismo imbatible en las urnas. Varios factores se combinaron para producir ese resultado. El recuerdo del trienio peronista (1973-1976) estaba aún fresco y muchos temían su repetición. El candidato presentado por un partido que en el pasado había sido poco más que la proyección de un líder carismático, no podía tener menos carisma: Ítalo Argentino Luder, rodeado de viejos dirigentes (llamados luego los “mariscales de la derrota”) y apoyado por la burocracia sindical (Lorenzo Miguel), difícilmente podía atraer a una ciudadanía movilizada y alerta. Algunos de los dirigentes menos presentables aparecían en los actos públicos con gestos desubicados (Herminio Iglesias quemando un ataúd que representaba a sus rivales, por ejemplo), que recordaban lo peor del peronismo.

Del otro lado, en cambio, se presentaba un dirigente carismático, que había participado durante el “Proceso” en la defensa de los derechos humanos y que

prometía llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de la última dictadura. Candidato que, a partir de una ética democrática, llamaba a abrir una nueva era en la política argentina. El recuerdo del último gobierno radical, tan denigrado en su momento, aparecía veinte años después –para los que no se escandalizaban por la proscripción del peronismo- como un remanso de paz y prosperidad. La denuncia por Raúl Alfonsín de un pacto militar-sindical, recordaba de alguna manera al que había puesto fin a ese revalorizado gobierno de Illia Y el silencio de los dirigentes peronistas sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos y su castigo le daba cierta verosimilitud, lo que influyó también sobre muchos electores. La socialdemocracia, con la que se identificaba el candidato radical, estaba en pleno auge en Europa, con el triunfo de François Mitterrand en Francia, en 1981, y de Felipe González en España, en 1982.

Así, Alfonsín obtuvo el 52 por ciento de los votos, frente al 40 por ciento de Luder. El peronismo ganó en cambio en la mayoría de las provincias y predominaba entonces en el Senado.

La “ilusión democrática”

En 1983 la palabra mágica era “democracia”. No aludía sólo a una forma de gobierno o de convivencia social, sino que era presentada como una especie de panacea, capaz de resolver todos los problemas.

Las elecciones fueron precedidas por una amplia movilización, que acompañó

las campañas de los principales partidos y que se expresó tanto en la participación en actos multitudinarios como en la cantidad récord de afiliados (PJ: tres millones y medio; UCR: un millón cuatrocientos mil). Esta movilización se mantuvo durante la primera parte del gobierno radical y se manifestó, por ejemplo, en la participación de una gran parte de la ciudadanía (la otra palabra clave de la época) en el referéndum sobre el arbitraje en la cuestión del Beagle o en el Congreso Pedagógico Nacional. Pero esta "ilusión democrática" se iría diluyendo a medida que el gobierno encontrara límites a su impulso reformista.

Uno de los primeros intentos fue el de promover la democratización de la vida sindical, mediante un proyecto que establecía límites a la reelección de los dirigentes, participación de las minorías en los órganos directivos de los sindicatos, fiscalización de las elecciones a cargo la justicia electoral, participación de las bases en las decisiones... Aprobado en Diputados, el proyecto fue rechazado por el Senado peronista. Desde entonces, la CGT unificada, dirigida por Saúl Ubaldini (cervecero), llevó a cabo una oposición sistemática, que se concretó en trece paros generales contra la política del gobierno. El Consejo Nacional Justicialista, presidido por Lorenzo Miguel, hizo lo mismo en el terreno político.

Un proyecto de ley de divorcio, que tuvo que luchar contra la feroz oposición de la Iglesia, logró finalmente su aprobación, lo mismo que la patria potestad compartida que ponía fin a una arcaica tradición patriarcal. En cambio, el proyecto de reforma de la constitución no obtuvo el consenso de los partidos

opositores, y el traslado de la capital federal a Viedma-Carmen de Patagones – que implicaba un cambio geopolítico de primera importancia- no llegó tampoco a concretarse. Tampoco pudieron realizarse otros proyectos de modernización de la administración pública, ni de participación de capitales privados en empresas de servicios públicos o la privatización de algunas de esas empresas, todo lo cual chocaba sobre todo con la oposición de los sindicatos de empleados del estado. Tampoco fue posible aprobar los proyectos de eliminación de subsidios, de reforma tributaria y previsional (todos ellos por oposición del Senado). Pero las principales frustraciones se produjeron en dos campos claves de la política alfonsinista: la lucha por la justicia y la reactivación económica.

Entre la justicia y la impunidad

En cumplimiento de sus promesas electorales, una de las primeras medidas de Alfonsín fue la derogación de la autoamnistía dictada por el “Proceso” y la formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), destinada a recibir las denuncias de los familiares de desaparecidos y a elaborar un informe sobre el tema. Estaba presidida por Ernesto Sábató e integrada por prestigiosos filósofos (Eduardo Rabossi), figuras de la cultura (Gregorio Klimovsky), las religiones (Jaime F. de Nevares, Marshall T. Meyer), el periodismo (Magdalena Ruiz Guiñazú). Esta comisión inició una intensa tarea que culminó en septiembre de 1984 con la presentación de sus conclusiones: el

Nunca más, en el cual se detallaban los casos de 8.961 desaparecidos sobre los que había reunido documentación, sin excluir la existencia de otros no denunciados por sus familiares (las organizaciones de derechos humanos estimaban un total de 30.000).

En cuanto a la justicia, Alfonsín promovió primero una reforma del Código Militar, por la cual las causas iniciadas ante el Consejo Supremo de las fuerzas armadas podrían pasar a la Cámara Federal en lo Penal en caso de no ser instruidas en los plazos establecidos. La idea era que el Consejo Supremo juzgara a los integrantes de las juntas que gobernaron durante el “Proceso” y a los principales responsables de la represión, para que fueran las propias fuerzas armadas quienes hicieran justicia. Pero, ante la reticencia de la institución, que daba a largas el asunto, el caso pasó a la justicia civil. Durante el juicio, que se extendió de abril a diciembre de 1985, fueron saliendo a luz, debidamente probados, los crímenes cometidos por los acusados. Los más interesados en el tema, los mejor informados, sólo conocían esos crímenes en forma parcial y fragmentada, nunca habían podido verlos en conjunto ni apreciar su lógica abrumadora. La parte de la sociedad que –voluntaria o involuntariamente- los había ignorado, ya no podría seguir haciéndolo. Al mismo tiempo, aquellos medios de comunicación que hasta entonces no habían visto, oído, ni dicho nada –en especial las revistas y la televisión- se lanzaron al llamado “show del horror”, descubriendo cadáveres NN, fosas comunes, relatos de torturas... hasta la saturación. Finalmente, Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua, Viola a dieciséis años de prisión y los demás

comandantes y altos jefes militares a penas menores.

Claro que todo esto era seguido con la mayor inquietud por parte de los militares. Todos habían participado en la represión ilegal; ¿hasta dónde continuarían los juicios iniciados con las cúpulas? Alfonsín había hablado de tres grados de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que se limitaron a cumplirlas y los que se excedieron en su cumplimiento. Pero esas categorías eran muy difíciles de establecer y, en principio, todos los militares se sintieron amenazados por los juicios.

Ya en abril de 1985, Alfonsín denunció la existencia de un clima golpista. Cuanto más se prolongara el estado deliberativo de las fuerzas armadas, mayor era el peligro de que desembocara en un golpe que pusiera fin a la transición democrática. Tratando de evitarlo, en diciembre de 1986 el Congreso dictó la ley llamada de Punto Final. Ésta establecía un plazo de treinta días para presentar denuncias sobre violación de derechos humanos, y uno de sesenta días para que los jueces iniciaran el correspondiente proceso. Luego, se produciría la prescripción de la acción penal.

La ley tuvo un efecto contrario al previsto: muchos familiares de víctimas que no habían presentado su denuncia se apresuraron a hacerlo antes de que el plazo caducara y muchos jueces hicieron lo mismo con la apertura de juicios. Se presentaron 487 demandas contra unos 300 militares, un tercio de ellos en actividad. Numerosos militares citados por la justicia se negaron a presentarse, creando un clima de inquietud y aun de insubordinación.

En estas circunstancias, en la Semana Santa de 1987, el teniente coronel Aldo Rico se rebeló en Campo de Mayo y exigió el fin de las citaciones judiciales, la reivindicación de la guerra antisubversiva y la sustitución del jefe de estado mayor del ejército. Las fotos de los *carapintadas* en uniforme de combate resultaban amenazadoras. Ante la imposibilidad de reprimir militarmente la rebelión, debido a la reticencia de las fuerzas encargadas de hacerlo, Alfonsín fue a encontrarse con Rico y a negociar su rendición. “La casa está en orden”, aseguraba Alfonsín a la multitud reunida en la Plaza de Mayo al volver de la entrevista.

Poco después, el jefe de estado mayor del ejército era sustituido y se dictaba la ley de Obediencia Debida, que definía el concepto y establecía la no imputabilidad de quienes habían actuado cumpliendo órdenes de su superior jerárquico. De este modo, la responsabilidad penal quedaba limitada a los jefes de zonas y 1.187 procesos quedaron interrumpidos. Estas medidas no impidieron sin embargo que se produjeran nuevas rebeliones en enero de 1988 (Monte Caseros), dirigida por el mismo Aldo Rico, y en diciembre de ese mismo año (Villa Martelli), dirigida por el coronel Mohamed Alí Seineldín, católico integrista a pesar de su nombre.

Pero esas intentonas no contaron con apoyo en el resto del ejército –aunque éste tampoco se mostró dispuesto a reprimirlas- y provocaron, además, una fuerte movilización contraria de la ciudadanía, que llegó a rodear los cuarteles insurrectos para impedir la salida de las tropas. Por primera vez en la historia

argentina, los ciudadanos se movilizaban contra militares golpistas.

Las políticas de derechos humanos tuvieron repercusiones diferentes: muchos se sintieron satisfechos con la acción de la Conadep y la condena de las juntas, pero decepcionados con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; otros, a la inversa. Pero problemas más urgentes desviaban mientras tanto la atención.

La crisis de la deuda

Poco antes del comienzo del gobierno de Alfonsín había estallado, en el mundo, la crisis de la deuda. Como hemos dicho, durante la década de 1970 –sobre todo a partir del aumento del precio del petróleo en 1973– los bancos norteamericanos y europeos habían recibido de los países exportadores enormes depósitos (los *petrodólares*), fondos que pronto prestaron a los países del Tercer Mundo en forma bastante indiscriminada y desordenada. Para esos países, la oportunidad que se les ofrecía de financiar su déficit de balanza de pagos con créditos era sumamente tentadora ya que era posible pagar los servicios de la deuda con nuevos créditos, y de esa manera muchos fueron endeudándose mucho más allá de su capacidad de reembolso.

Finalmente, en 1982, México fue el primero en declarar la imposibilidad de honrar sus compromisos. Se trataba de la segunda economía de América Latina y de un importante exportador de petróleo; si México no podía pagar los servicios de su deuda, ¿qué podía esperarse de los otros países de la región? Bruscamente, entonces, los bancos decidieron interrumpir sus préstamos; los

países deudores ya no encontraron nuevos créditos, debían pagar los servicios de la deuda con las divisas generadas por sus exportaciones. Pero la mayoría de esos países –como hemos visto en el caso de la Argentina- tenían una balanza comercial deficitaria. No era posible incrementar las exportaciones en forma inmediata, de modo que la única manera de obtener un saldo positivo de la balanza comercial era reducir drásticamente las importaciones.

Los países más industrializados –como la Argentina-, que ya habían sustituido las importaciones de bienes de consumo, importaban fundamentalmente materias primas, productos intermedios y equipos para la industria. Reducir esas importaciones implicaba frenar el crecimiento industrial y eso fue lo que ocurrió en casi toda América Latina: recesión y paro, “la década perdida”.

En el caso argentino, ya hemos visto que la financiación del déficit fiscal y de las empresas del estado mediante el crédito exterior fue la política habitual del “Proceso”, de modo que el endeudamiento del estado fue en aumento. Cuando, a través del seguro cambiario, se estatizó de hecho la mayor parte de las deudas privadas, la deuda externa del país aumentó un 374 por ciento, llegando a niveles asfixiantes. Del 2,2 por ciento del PIB, los servicios de esa deuda pasaron a representar un 9,4 por ciento en 1983, absorbiendo buena parte de los ingresos fiscales. Como fuentes de financiación sólo quedaban los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial) que condicionaban sus créditos a estrictas reglas de austeridad, que limitaban tanto los gastos del estado como sus inversiones y tenían, por tanto, efectos recesivos. De 1980 a

1983, el PIB *per capita* cayó a un nivel inferior al de diez años antes.

Esa fue la situación con que se encontró Alfonsín al asumir el gobierno y el telón de fondo durante toda su presidencia.

La indomable inflación

El primer ministro de economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, intentó al principio contener el proceso recesivo mediante las tradicionales herramientas keynesianas: aumento del gasto público, crédito a los productores, aumento del salario real... El Plan Alimentario Nacional acudió en ayuda de los más pobres. Pero el año cerró con un 626 por ciento de inflación. A fines de 1984, un acuerdo con el FMI implicó devaluación, aumento de tarifas y restricciones monetarias, pero ni esas medidas, ni el cambio de ministro (Juan Vital Sourrouille) revirtieron la tendencia, y en abril y mayo de 1985 la tasa de inflación seguía alrededor del 30 por ciento mensual, un 42 por ciento en junio.

El intento de lograr un pacto social con la UIA y la CGT no tuvo éxito: los empresarios no apoyaban la política económica del gobierno y los sindicatos peronistas no facilitarían la tarea del gobierno radical. Finalmente, el 30 de abril de 1985, ante una muchedumbre reunida en la Plaza de Mayo, Alfonsín anunció el lanzamiento de una “economía de guerra”. Poco después, ésta se concretó con la presentación del Plan Austral. Además de crear una nueva unidad monetaria (el *austral*), el plan establecía el congelamiento de precios y salarios (los segundos, luego de un irrisorio aumento del 23 por ciento); una drástica

reducción del déficit fiscal (del 12 al 2 por ciento del PIB); el compromiso de financiar ese déficit con el crédito exterior sin recurrir a la emisión monetaria, y una indexación de la economía sobre la base de la evolución del valor de la nueva moneda.

El plan tuvo un éxito inicial (baja de la inflación, reactivación de la producción, aumento del salario real), que permitió a la UCR ganar las elecciones legislativas de noviembre de 1985, aunque perdiendo 8 puntos porcentuales respecto a las de 1983, ya que ahora obtuvo el 43 por ciento de los votos. En esas circunstancias se puso en marcha un proyecto estratégico que transformaría la inserción del país en el mundo: la entrevista de Alfonsín con el presidente brasileño José Sarney en Foz de Iguazú fue un primer paso hacia la formación del Mercosur.

En ese momento, en que el gobierno parecía consolidarse, empezó a circular una ambiciosa propuesta: una convergencia democrática tendiente a la constitución de un “tercer movimiento histórico”, que continuara y superara al yrigoyenismo y al peronismo. Más modestamente, el gobierno trató de llegar a un acuerdo con el grupo de los 15 (sindicalistas dirigidos por Jorge Triaca), que se oponía a Ubaldini en la CGT. Un miembro de ese grupo, Carlos Alderete, fue nombrado ministro de Trabajo en 1987 –lo que dio lugar a que la oposición denunciara un pacto radical-sindical- y se dictaron varias leyes que favorecían a las organizaciones gremiales: ley de asociaciones profesionales, de convenciones colectivas, de obras sociales... Pero varios factores hicieron

fracasar el intento.

El hecho de haber cedido ante los *carapintadas* en Semana Santa ponía de relieve la debilidad del gobierno frente al estado de insubordinación de una parte de las fuerzas armadas. Además, pasado el efecto del Plan Austral, la inflación volvía a aumentar (82 por ciento en 1986; 175 por ciento al año siguiente) y repercutía en los resultados electorales.

La desilusión

En las elecciones de 1987, la UCR sólo ganó en la Capital Federal y en dos provincias (Córdoba y Río Negro), sumando un 37 por ciento de los votos en todo el país, mientras que el peronismo ganaba en diecisiete provincias, con un 41 por ciento de los votos. El gobierno perdió su mayoría en Diputados.

Además del disgusto por la situación económica, influyó en estos resultados la renovación del peronismo, donde una coalición de viejos y nuevos dirigentes (Antonio Cafiero, Carlos Saúl Menem) reemplazó a los desprestigiados burócratas sindicales en la conducción del partido y aumentó su atractivo electoral.

Ni la segunda etapa del plan Austral, en febrero de 1986, ni el “australito” del año siguiente, que implicó un nuevo congelamiento de precios, ni el plan Primavera de 1988 (acuerdo de desindexación con empresas líderes a cambio de una reducción del impuesto al valor añadido (IVA), lograron revertir la

situación económica que, por el contrario, continuó agravándose.

Para colmo, también en el exterior las condiciones empeoraban: los precios de los principales productos de exportación argentinos cayeron un 20 por ciento en los dos últimos años de gobierno radical. Aunque los contratos petroleros acordados en el Plan Houston permitieron reducir la importación de combustibles, el excedente de la balanza comercial apenas permitía pagar los servicios de la deuda externa. El FMI, que había apoyado su refinanciación en el marco del Plan Baker (llamado de ese modo por el nombre del secretario del Tesoro norteamericano) cambió su orientación en 1989, cuando George Bush (padre) asumió la presidencia de los Estados Unidos y el Banco Mundial anunció que suspendería sus créditos a la Argentina porque ésta no había realizado las reformas estructurales exigidas.

Fue entonces cuando se produjo el *golpe de mercado*, el 6 de febrero de 1989, recordado como el “lunes negro”. Ante la perspectiva de una fuerte devaluación, se produjo una corrida: todos los que tenían capitales líquidos (sobre todo, las grandes empresas) intentaban comprar dólares; los que tenían dólares (sobre todo, los exportadores) no los vendían; las reservas del Banco Central se agotaron rápidamente; se cerró el mercado cambiario y se desencadenó entonces la hiperinflación. El valor del dólar pasó de 24 a 1.950 australes (inflación del 1.923 por ciento).

En estas circunstancias se celebraron las elecciones presidenciales del 14 de mayo. Su resultado no fue una sorpresa para nadie.

El año había comenzado con un episodio tan imprevisto como lamentable. Un desconocido movimiento Todos por la Patria –después se sabría que estaba formado por sobrevivientes del ERP y nuevos reclutas, dirigidos por Enrique Gorriarán Merlo- atacó el cuartel de La Tablada, con el objetivo de impedir un supuesto golpe de estado en preparación. Veintiocho atacantes y siete militares muertos.

En las semanas siguientes al *golpe de mercado*, se multiplicaron los asaltos a supermercados en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán... Espontáneos o incitados por punteros peronistas, derivaron frecuentemente en enfrentamientos con la policía, con un saldo de quince muertos.

En esas condiciones, el 8 de julio de 1989, es decir, con seis meses de anticipación, Alfonsín decidió transmitir el gobierno a su sucesor electo.

El peronismo de mercado

La experiencia desarrollada entre 1973 y 1976 había mostrado algunas caras del peronismo: una “tendencia revolucionaria” dirigida por una organización político-militar; un *león herbívoro* reconciliado con los militares y con los radicales; una burocracia sindical celosa de sus privilegios, oscilando entre el co-gobierno y la oposición; un grupo enquistado en el poder que utilizaba los servicios de una banda terrorista (3A). Quien creyera haber visto todo lo que el peronismo podía ofrecer, carecía de imaginación: algunos años después, tomaría la forma de un gobierno neoliberal, apreciado por los empresarios nacionales y extranjeros, que mantendría con Washington “relaciones carnales” (según palabras de su canciller) y sería presentado como modelo por el FMI.

Desde 1989, ese gobierno peronista se dedicó a desmontar el estado-providencia construido durante el primer gobierno de Perón y sus instrumentos de regulación de la economía. La nueva palabra mágica de los años 90 sería “mercado”, o su eufemismo, “economía social de mercado”. Frente a este nuevo ídolo que se erigía, el estado debía achicarse hasta casi desaparecer, y las nuevas leyes (del mercado) sustituirían a las antiguas reglamentaciones.

La otra palabra mágica era “apertura”, comercial y financiera que, según el gobierno, permitiría al país participar en los beneficios de la mundialización, signo de la época. Las inversiones extranjeras aportarían la modernización de las empresas, el incremento de la productividad y el crecimiento económico que llevarían a la Argentina a su supuesto destino: el Primer Mundo.

Por cierto que estas ideas no eran nuevas ni, mucho menos, exclusivas de la Argentina. Ya en 1974 y 1976 habían valido el premio Nobel de economía a Friedrich von Hayek y a Milton Friedman; desde 1979 eran puestas en práctica por Margaret Thatcher en Gran Bretaña y desde 1981 por Ronald Reagan en los Estados Unidos; desde 1990 constituían el núcleo del Consenso de Washington, con el que se medía la seriedad de los gobiernos y, en consecuencia, el otorgamiento de créditos (según el lema: “la virtud victoriana en política económica: mercados libres y moneda sólida”).

Ese clima de ideas imperaba, pues, en todo el mundo capitalista y se había generalizado también en la Argentina. El estado-providencia, con sus enormes gastos y su consecuente déficit fiscal, era visto por la mayoría de los economistas como el principal responsable de la elevada y crónica inflación. Sus controles y reglamentaciones burocráticos desalentaban la iniciativa privada; las industrias protegidas no desarrollaban su competitividad y la economía estancada no atraía al capital extranjero. Para recuperar un ritmo de crecimiento aceptable era preciso remover esos obstáculos.

Ya hemos visto de qué modo intentó hacerlo Martínez de Hoz, con resultados decepcionantes. Por su parte, Carlos Menem había llegado también a estas conclusiones, contrarias a la tradición peronista, y decidió aplicarlas con el celo del converso, apoyado por su aliado político y asesor económico Álvaro Alsogaray.

Nada de eso había trascendido durante la campaña electoral, basada en

vaguedades como la *revolución productiva* o el *salario* o, simplemente, en la invocación “Sígueme, no los voy a defraudar”. (“Si decía lo que iba a hacer, nadie me habría votado”, es la explicación que se le atribuyó posteriormente a Menem). De modo que sus primeras medidas, si no defraudaron, al menos sorprendieron.

Tampoco era previsible que, al poco tiempo de asumir el poder, pusiera fin a lo que quedaba de la esperanza de justicia que había despertado la democracia.

El triunfo de la impunidad

El 7 de octubre de 1989, el presidente firmó el decreto que indultaba a 36 militares procesados por violación de los derechos humanos, entre ellos, Galtieri, Bignone y Harguindeguy. Otros 174 militares, que habían participado en las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli (incluidos Rico y Seineldín) también fueron indultados, así como tres militares de alta graduación condenados por su desempeño durante la guerra de las Malvinas y 64 civiles pertenecientes a las organizaciones guerrilleras (como los montoneros Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja).

Para los *carapintadas* eso no era suficiente, y volvieron a sublevarse el 3 de diciembre de 1990, dirigidos por el incorregible Seineldín. Pero el indulto les había privado de una de sus reivindicaciones más simbólicas y compartidas y sus demandas sobre cuestiones internas del ejército estaban lejos de tener respaldo unánime. De hecho, a medida que se politizaban, pasaban a

representar tan sólo una fracción minoritaria y el apoyo que recibían de muchos suboficiales resultaba inquietante para los oficiales superiores que temían que introdujeran la “lucha de clases” dentro del ejército. Las primeras bajas producidas por los sublevados, que rompían lo que hasta entonces había sido un acuerdo tácito, cerraban la posibilidad de una solución negociada. Esta vez, el gobierno ordenó reprimir y fue obedecido: hubo 16 militares y 5 civiles muertos, 50 heridos y 300 detenidos.

Finalmente, el 29 de diciembre de 1990 se conoció la segunda parte del indulto, que incluía a los miembros de las Juntas y otros altos responsables del “Proceso” condenados por la Cámara Federal, así como al jefe montonero Mario Eduardo Firmenich.

Esto último formaba parte de una postulada *reconciliación nacional*. Antes del 3 de diciembre, Menem se había entrevistado con Seineldín; también había recibido en la Casa Rosada a Perdía y Vaca Narvaja y había producido gestos simbólicos como el abrazo que lo unió con el almirante Rojas ante las cámaras fotográficas o la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas.

El indulto provocó multitudinarias manifestaciones de protesta, pero el espíritu de reconciliación del presidente fue elogiado por los dignatarios eclesiásticos, la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio.

Asegurado el flanco militar, ya podía lanzarse el gobierno –con el apoyo de esas y otras organizaciones patronales- al combate contra la inflación.

La convertibilidad

Paulatinamente, a medida que su intensidad aumentaba y se volvía incontrolable, la inflación se había ido convirtiendo en el principal problema económico. Desde 1945 hasta 1975, había oscilado alrededor de un promedio del 30 por ciento anual; no constituía entonces un obstáculo insalvable para la inversión ni impedía el crecimiento de la economía. Pero desde 1975 ese promedio se había elevado al cien por ciento y había comenzado a desviar los capitales de la inversión productiva hacia la especulación financiera, atraída por las fuertes tasas de interés. Ni el Plan Austral ni los planes posteriores lograron frenar ese proceso, que desembocó finalmente en la hiperinflación. Éste era entonces el problema económico que obsesionaba a los argentinos de la época; quien lograra resolverlo sería considerado como un prócer, o más (*San Cavallo*).

En 1990, la hiperinflación había alcanzado el 1.344 por ciento. El equipo de economistas de la multinacional de origen argentino Bunge & Born, al que recurrió Menem al principio, no pudo hacer gran cosa frente a ese arrastre. Tampoco pudo superarla su sucesor, Antonio Erman González, quien debió enfrentar una nueva corrida al dólar y un brote hiperinflacionario. Para impedir una crisis bancaria se transformaron los depósitos a plazo fijo en títulos de la deuda pública a largo plazo.

La solución vendría del tercer ministro de economía de Menem, Domingo F. Cavallo, que en abril de 1991 presentó el proyecto de Ley de Convertibilidad.

Ésta determinaba la paridad fija del peso con el dólar, la obligación del Banco Central de mantener reservas en divisas equivalentes a la base monetaria, y obligaba al gobierno a renunciar a financiar el déficit fiscal con nuevas emisiones. De esta manera, el estado desistía de utilizar la herramienta de la política monetaria, a la que solía recurrir para resolver los problemas de balanza de pagos mediante la devaluación. Pero, precisamente, esta desvinculación del valor de la moneda de las alternativas de la política económica, y su amarre a un parámetro exterior, como el valor del dólar, contribuían a la credibilidad del plan, confirmada luego durante diez años por su duración.

El éxito fue inmediato. El Plan Brady (por el nombre del entonces secretario del Tesoro norteamericano) facilitó un acuerdo con los acreedores extranjeros y alivió el peso de la deuda externa; una mayor fluidez del mercado financiero internacional permitió recurrir al crédito externo, lo que se tradujo en un aumento del endeudamiento. Pero a fines del año la inflación había bajado al uno por ciento mensual. La estabilidad monetaria permitió un mejoramiento del salario real y la reaparición del crédito a tasas accesibles y previsibles, lo cual repercutió en un aumento del consumo y de la inversión. El círculo virtuoso así iniciado se prolongaría hasta 1994, con un crecimiento promedio del PIB del 8,8 por ciento anual. Es la época de los viajes de compras a Miami y del “démé dos”.

El déficit fiscal comenzó a reducirse con las primeras privatizaciones, la eliminación de subsidios y el despido de empleados públicos, mientras que una

reforma tributaria permitía aumentar los ingresos del estado, gracias a la concentración de esos ingresos en el IVA y el impuesto a las ganancias, y el combate a la evasión. Si la reactivación económica y el consiguiente aumento de las importaciones incrementaron el déficit de la balanza comercial, eso fue compensado con la entrada de nuevos capitales extranjeros. El aumento de las inversiones, tanto de capital nacional como extranjero, y la importación de bienes de equipo permitieron aumentar la productividad de la industria (a un promedio del 7 por ciento anual) y también la del sector agropecuario, con la incorporación de capital y tecnología.

Durante esos años, el principal problema fue el aumento de la desocupación. La expulsión de empleados del sector público no fue compensada por su absorción en el sector privado. El capital extranjero fue invertido en sectores que demandaban poca mano de obra (petróleo, minería); las grandes empresas preferían también invertir en tecnologías que les permitieran ahorrar mano de obra y muchas pequeñas empresas (talleres, comercios minoristas) fueron desapareciendo ante la competencia. En 1994, la desocupación afectaba ya a un 12 por ciento de la población activa y seguiría aumentando. Mientras tanto, el gobierno aprovechaba esta etapa para concretar sus planes de reforma del estado.

Achicar el estado

Las funciones que desempeñaba el estado en la Argentina -como en los demás

países capitalistas-, se habían ido ampliando desde 1930, momento en que todavía era un estado-gendarme, a cargo de la defensa, la seguridad, la justicia y la educación. Luego de la guerra en Europa –y con el peronismo en la Argentina- se había desarrollado el estado-providencia (un estado que, como Dios, se encargaba de todo: salud, vivienda, previsión...) y el estado empresario (a cargo de servicios públicos, acero, petroquímica...) Aunque los gastos habían ido aumentando constantemente, no había ocurrido lo mismo con los ingresos, de modo que el déficit fiscal crónico se financiaba con endeudamiento o emisión. El tándem Menem-Cavallo se propuso poner fin a ese factor de estancamiento reduciendo drásticamente las funciones del estado.

Una ley de emergencia económica y social estableció la suspensión de subsidios y subvenciones del estado a empresas privadas, así como de los regímenes de promoción industrial y regional y de la preferencia del “compre nacional”. Se declaró la prescindencia del personal jerárquico de la administración pública y el fin de regímenes de remuneraciones privilegiados para el personal del poder legislativo y judicial. Pasados los seis meses de vigencia, la ley fue prorrogada por un plazo similar y se introdujeron medidas complementarias: supresión de secretarías de estado, disponibilidad del personal en condiciones de jubilarse, eliminación del doble empleo. Otra ley, de reforma del estado, declaró en situación de emergencia a la prestación de servicios públicos y a las empresas estatales, autorizando su intervención y su privatización.

Ambas leyes contaron con el apoyo de las entidades patronales: el Consejo Empresario Argentino (que reunía a varias empresas multinacionales), la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural (que aprovechaba para pedir la supresión de las retenciones) y la UIA (con algunas reservas motivadas por la suspensión de la promoción industrial y del “compre nacional”). La Unión del Centro Democrático (Ucedé), dirigida por Alsogaray, las apoyó en el Congreso junto a los representantes peronistas; las encuestas mostraban que tenían un amplio consenso en la opinión pública. La oposición a estas medidas se limitó, prácticamente, a los sindicatos de empleados del estado.

Las privatizaciones se llevaron a cabo rápidamente: Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, teléfonos, gas, electricidad, siderurgia, petroquímica, rutas, aeropuertos... La ineficiencia de las empresas públicas y la mala calidad de sus servicios hicieron que nadie lamentara demasiado su desaparición. El estado se sacaba de encima empresas deficitarias y recibía importantes fondos que le permitían transformar transitoriamente el déficit fiscal en superávit. Como buena parte de los pagos se hacía con títulos de la deuda pública, ésta se reducía. Los principales beneficiarios fueron los grandes grupos que compraron la mayor parte de las empresas privatizadas: Pérez Companc, Soldati/Techint, Astra entre los nacionales; Repsol, Iberia, Telefónica, Telecom, grupo Suez entre las extranjeras.

Otras formas de reducir los gastos del estado fueron el traspaso de los servicios de salud y educación a las provincias y municipios y la reforma previsional, con

el traslado paulatino de los aportes jubilatorios a fondos privados. Además, la reducción del servicio de la deuda externa gracias al Plan Brady y la baja de las tasas de interés internacionales contribuyeron a disminuir los gastos del estado, lo mismo que la reducción del personal de la administración pública. También las empresas privatizadas reducían drásticamente su plantilla (se estima un total de 200 mil empleos perdidos): la desocupación iba aumentando.

Gracias a la reactivación de la economía, aumentaba la recaudación fiscal (el IVA pasó a representar un 6 por ciento del PIB, frente al 2,5 por ciento en los años 80; el impuesto a las ganancias pasó del 1 al 2,5 por ciento del PIB). Todo esto permitió reducir el déficit fiscal de un 8 por ciento del PIB en 1989 y 1990 a un 0,5 por ciento entre 1990 y 1994. Asimismo, el comercio exterior fue estimulado por la supresión de cuotas de importación y la reducción de aranceles: de un promedio del 26 por ciento en 1989 a uno del 10 por ciento en 1990. Las exportaciones también crecieron gracias al aumento de la demanda mundial de cereales, la caída del valor del dólar en relación con otras monedas y el comienzo de exportaciones de combustibles (gas y petróleo): su valor se multiplicó por cuatro. La formación del Mercado Común del Sur (Mercosur), iniciada con el Tratado de Asunción en 1991, se concretó en la reunión de los cuatro presidentes en Ouro Preto en 1995 y representó un vuelco importante en las relaciones comerciales: Brasil se convirtió en el principal comprador y proveedor: comienzo de la “Brasil-dependencia”, ya que las variaciones coyunturales de su economía y, sobre todo, del valor de su moneda, tendrán fuertes repercusiones en la Argentina.

Resuelto el problema de la inflación y del crecimiento, encaminada la reforma del estado y la apertura económica, Menem podía concentrarse en sus planes políticos.

El pacto de Olivos

En 1993, gracias a la estabilidad monetaria y al crecimiento de la economía, el gobierno de Menem gozaba de una popularidad que le permitió al PJ imponerse sin dificultades en las elecciones legislativas de octubre, incluso –por primera vez- en la Capital Federal. Fue el momento elegido para lanzar la campaña por una reforma constitucional que permitiera la reelección del presidente.

Pero para convocar una convención constituyente se necesitaba el voto de dos tercios de los diputados, cosa que el PJ y sus aliados no reunían. Ante la reticencia de los radicales, el gobierno amenazó con convocar a un plebiscito sobre el tema y, ante la posibilidad de que lo ganara, Alfonsín se decidió a negociar. El resultado de esas negociaciones fue el llamado “pacto de Olivos”, por el cual los radicales decidieron apoyar la convocatoria y los dos partidos mayoritarios llegaron a un acuerdo sobre las reformas a efectuar, conocido como “núcleo de coincidencias básicas”.

Ambos partidos coincidían en reducir el mandato presidencial a cuatro años, con la posibilidad de reelección limitada a un segundo mandato. El presidente sería elegido por voto directo, con una segunda vuelta si fuera necesario. Se creaba la figura de un jefe de gabinete o ministro coordinador, en quien el

presidente podría delegar algunas de sus funciones y que mantendría contactos regulares con el Parlamento. Se aumentaba el número de senadores a tres por provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría, elegidos en forma directa. También se establecía la iniciativa popular para presentar proyectos de ley y la posibilidad de consultas vinculantes (referéndum) y no vinculantes (plebiscito). Las atribuciones presidenciales aumentaban con la posibilidad del veto parcial de las leyes y la de firmar decretos de necesidad y urgencia. Por último, se establecía un Consejo de la Magistratura como órgano de control del poder judicial.

Cada uno de los pactantes obtenía importantes ventajas: Menem, la posibilidad de ser reelegido; Alfonsín, la de contar con una presencia en el Senado y en el Consejo de la Magistratura. Ante el temor de que, una vez obtenido lo suyo, la otra parte no cumpliera con lo pactado, se decidió que las reformas serían votadas en bloque, formando un solo paquete, el “paquete cerrado”. Muchos hablaron entonces de una *democracia de dos*, donde el acuerdo de los dos dirigentes volvía inútiles la elección y las discusiones.

Alfonsín sufrió fuertes críticas en el seno de su partido, y la UCR salió debilitada del acuerdo, como pudo verse en las elecciones legislativas de abril de 1994, en las que ese partido sólo logró un tercer puesto en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, ante el avance del Frente Grande dirigido por Carlos “Chacho” Álvarez, que desplegaba una actitud opositora mucho más clara.

Como estaba previsto, la convención constituyente reunida en Santa Fe y

Paraná entre mayo y agosto de 1994 aprobó las reformas pactadas, y el 14 de mayo de 1995 Menem fue reelegido con un 50 por ciento de los votos.

El fin de la bonanza económica

La reelección se había producido justo a tiempo, porque desde 1995 el panorama económico cambiaría considerablemente. Otra vez, el problema se originó en México, donde una fuerte presión de la especulación globalizada condujo a corridas al dólar y a la depreciación del peso mexicano. Rápidamente, el llamado “efecto tequila” se trasladó al resto de América Latina. En la Argentina se tradujo en retiro de depósitos y transformación de pesos en dólares, por lo cual el Banco Central perdió un cuarto de sus reservas. En los primeros meses de 1995, los valores cotizados en la Bolsa de Buenos Aires cayeron un 50 por ciento y el riesgo-país -aumento de la tasa de interés que se aplica a los préstamos a un país, proporcional a los riesgos de insolvencia- creció de 8 a 55 puntos.

Un acuerdo con el FMI permitió enfrentar la situación en lo inmediato, pero ese año el PIB cayó un 4,5 por ciento y la desocupación trepó al 18,6 por ciento. En 1996, en medio de las luchas internas que se desataron en el gobierno, Cavallo renunció. Al año siguiente estalló la crisis del sudeste asiático y, a mediados de 1998, el *default* de Rusia –es decir, la suspensión del pago de los servicios de la deuda externa- confirmó la desconfianza de los mercados internacionales en los países *emergentes*.

Mientras tanto, Menem emprendía la segunda etapa de su plan de reformas. Se trataba, por un lado, de terminar las privatizaciones (Correo Central, Casa de Moneda, Polo petroquímico de Bahía Blanca, aeropuertos, Yaciretá...), lo que incluía la prestación de servicios periféricos, al tiempo que se suprimían los entes residuales que administraban los pasivos de las empresas privatizadas. Por otro lado, continuó la racionalización de la administración pública, con el pase a disponibilidad de 20 a 30 mil empleados; YPF contribuyó, por su parte, con 50 mil despidos. Un fondo de reconversión laboral del sector público nacional se encargaría de reubicar en el sector privado a los empleados públicos despedidos y una unidad de reforma y modernización del estado coordinaría estas políticas.

Pero los puntos más espinosos quedaban por abordar: la desregulación de las obras sociales y la flexibilización del mercado laboral. Las primeras constituían una enorme fuente de ingresos para los sindicatos que las administraban, poco dispuestos por tanto a desprenderse de ellas. El gobierno se limitó entonces a permitir que los afiliados optaran entre las diversas obras sociales, dejando para una segunda etapa la apertura a la competencia con las entidades privadas de medicina pre-paga. El proyecto de flexibilización laboral modificaba la ley de convenciones colectivas que regía desde 1953, descentralizando las negociaciones (que se harían por empresa y no por rama), cambiando el sistema de indemnizaciones por despido y permitiendo acordar el monto y la oportunidad del pago de remuneraciones, la duración y oportunidad de las vacaciones anuales, el pago del aguinaldo en tres cuotas, etcétera. Menem no

consiguió que los diputados peronistas votaran este proyecto.

Los dos proyectos encontraron fuertes resistencias en el movimiento sindical. Junto a la CGT unificada se habían constituido otras dos centrales: la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que nucleaba a estatales, docentes y judiciales, y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), con los sindicatos vinculados al transporte. En 1994, las tres centrales convocaron a una Marcha Federal que contó con el apoyo de otras organizaciones y partidos, y en 1996 proclamaron un paro general.

Pero más características de este periodo son otras formas de protesta, que se desarrollaron sobre todo en provincias pobres, donde el estado era el principal empleador y los ajustes tenían efectos devastadores. Por lo general, estas protestas eran iniciadas por los empleados públicos provinciales, quienes reclamaban el pago de salarios atrasados o protestaban contra reestructuraciones y despidos. Pronto se les sumaban otros sectores de la población, con sus propias reivindicaciones y protestas, y la ciudad entera entraba en ebullición: manifestaciones, enfrentamientos con la policía, incendio de edificios públicos y aun de viviendas de políticos locales. Hubo puebladas de este tipo en Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy en 1993; en Ushuaia en 1994; en Córdoba y Alto Valle del Río Negro en 1995.

En localidades de Neuquén afectadas sobre todo por el retiro de YPF se formaron los primeros piquetes, que cortaban las carreteras en demanda de puestos de trabajo (Cutral-Có, Plaza Huincul, en 1997). Víctima de la represión,

la joven maestra Teresa Rodríguez se convertiría en un símbolo de esos piqueteros. Esa forma de protesta se extendió también por el norte del país (Tartagal, General Mosconi), y finalmente por el Gran Buenos Aires y la Capital. Es que la desocupación, que afectaba a unos 700 mil trabajadores en 1991, se extendió hasta alcanzar los tres millones al comienzo de la década siguiente. Frente a este problema, el gobierno estableció un subsidio, en forma de planes Trabajar, que aliviaba la situación de algunos desocupados.

Otra forma de protesta original fue el apagón, convocado en 1996, en la ciudad de Buenos Aires, por un foro multisectorial: a una hora determinada, se apagaron todas las luces, los coches tocaban sus bocinas y la gente golpeaba cacerolas en puertas y balcones. Seguido por mucha gente, su efecto fue impresionante.

Mientras tanto, la oposición política se vio reforzada por la Alianza de la UCR con el Frepaso (coalición de centro-izquierda formada por el Frente Grande y otros partidos), que ganó las elecciones en la nueva ciudad autónoma de Buenos Aires (ex Capital Federal) en junio de 1996, y llevó al radical Fernando de la Rúa a la jefatura del gobierno.

El descontento reflejaba en gran medida la desaceleración del crecimiento económico desde 1995 (1,5 por ciento promedio entre ese año y 1999); el aumento de la deuda externa, que se duplicó (de 66 mil a 123 mil millones de dólares) y la profundización de las desigualdades sociales, puesto que aumentó el número de pobres estructurales y de nuevos pobres. Tres millones de

desocupados era una cifra nunca antes alcanzada en el país: el miedo a perder el empleo se fue transformando en la principal preocupación. A medida que disminuía la demanda de mano de obra, aumentaba la precariedad del empleo y por lo tanto el trabajo en negro, el empleo ocasional o el empleo a tiempo parcial. Los servicios sociales prestados por el estado (salud, educación, jubilaciones) se degradaban, y aumentaba la inseguridad frente a la delincuencia.

Esta situación contrastaba fuertemente con la exhibición de riqueza y el consumo ostentoso que mostraban la televisión y las revistas “del corazón” entre personajes de la *farándula*. Actores, deportistas, empresarios, derrochaban como nuevos ricos (“pizza con champán”) y, junto a ellos, lo mismo hacían muchos funcionarios del gobierno menemista. Esto último alimentaba las sospechas de corrupción que, según la encuestas, era la otra preocupación principal de los argentinos.

Corrupción y justicia

Desde las primeras privatizaciones (Entel, Aerolíneas Argentinas) hubo críticas por la falta de transparencia de los procedimientos y sospechas de corrupción. María Julia Alsogaray, encargada de la privatización de Entel y de Somisa, fue una de las principales sospechadas. A fines de 1990 estalló el *Swiftgate*, cuando el embajador norteamericano denunció que funcionarios del gobierno le habían pedido coimas a directivos del frigorífico Swift-Armour para agilizar los

trámites que realizaban. Desde entonces, los escándalos se sucedieron en la Aduana, el Concejo Deliberante de la Capital Federal, el PAMI (obra social de los jubilados), los contratos IBM- Banco Nación. Se trataba de sobornos a funcionarios, sobreprecios en contrataciones del estado, uso clientelístico de fondos sociales, evasión impositiva... Típico de la picaresca de la época fue el caso del diputado *trucho*, que votó la privatización de Gas del Estado en el Congreso... pero que no era diputado.

Como reconoció el dirigente sindical Luis Barrionuevo, titular de la Administración Nacional del Seguro de Salud, “en este país la plata no se hace trabajando” y “si queremos que este país se arregle tenemos que dejar de robar dos años”. Desde entonces, sus colegas lo llamaron “el filósofo”.

Las sospechas llegaban al círculo familiar del presidente (su cuñada y jefa de audiencias, Amira Yoma, se vio involucrada en una cuestión de tráfico de drogas), y él mismo sería indagado por la justicia en 2001 acerca del contrabando de armas a Croacia, que estaba sometida a un embargo internacional, y a Ecuador, país al cual Argentina no podía venderle armas porque era garante del tratado de paz de ese país con Perú. Se sospecha que la explosión de la fábrica militar de armas de Río Tercero en 1995, que produjo siete muertos, trescientos heridos y destruyó un barrio completo, sirvió para ocultar las faltantes producidas por las ventas ilegales de armas. El juicio duró once años y terminó como era previsible: los seis militares acusados fueron sobreseídos.

Uno de los factores que alimentaban sospechas era la forma en que el gobierno manejaba a los funcionarios y organismos encargados de controlar el uso de los fondos. El Procurador General de la nación había sido reemplazado sin acuerdo del Senado; el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de Empresas, disueltas y reemplazadas por otros organismos; los cargos de Procurador del Tesoro y de Inspector General de Justicia, cubiertos por incondicionales del presidente.

Los escándalos llegaron hasta la Suprema Corte, a la que, al poco tiempo de asumir, Menem había ampliado de cinco a nueve miembros. De ese modo, nombró jueces adictos que le permitían obtener una *mayoría automática* que votaría siempre a su favor. En 1993, dos de los ministros denunciaron la desaparición de una sentencia contra el Banco Central, con la aparente intervención de Cavallo. Éste los calificó de “ladrones y corruptos” y atribuyó el incidente a un complot radical.

Por otra parte, la reestructuración de la Corte había sido una de las condiciones planteadas por Alfonsín para acceder al pacto de Olivos, poniendo nuevamente en evidencia el carácter político de los nombramientos de sus miembros. Todo esto contribuía a la deslegitimación de dirigentes, partidos, instituciones, en una palabra, a la pérdida de credibilidad y a la desconfianza generalizada que acompañaron los últimos años del gobierno menemista.

Dos acontecimientos especialmente mortíferos, aunque originados fuera de las fronteras del país, sembraron dudas sobre la complicidad de elementos de los

servicios de información y de las fuerzas policiales argentinos. En 1992 se produjo el atentado contra la embajada de Israel, que dejó veintidós muertos y doscientos cincuenta heridos; en 1994, la bomba que estalló en la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) produjo ochenta y cinco muertos y centenares de heridos.

Se inició entonces una larga “investigación”, ejemplo del funcionamiento de la justicia argentina. La causa durmió diez años en los cajones del juez, y cuando finalmente llegó al Tribunal Oral, en septiembre de 2004, éste debió absolver a todos los acusados porque los supuestos indicios habían sido totalmente fabricados. Se comprobó entonces que el juez a cargo de la causa había pagado 400 mil dólares a un presunto testigo para que involucrara a un grupo de policías bonaerenses como cómplices del atentado. Se trataba de una pista falsa, destinada a desviar la investigación y detenerla ante un supuesto resultado. El tribunal señalaba entonces la responsabilidad del juez y los fiscales, pero también del jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) -que proveyó el dinero-, del ministro del Interior (Carlos Corach), que no podía ignorar la operación y aun del presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Pero ¿qué se trataba de encubrir y por qué? Los nuevos fiscales de la causa acusaron del planeamiento y la ejecución del atentado a los más altos funcionarios del gobierno iraní de la época, incluyendo el presidente y varios ministros, contra quienes se dictó orden de captura internacional. Éstos habrían

actuado en venganza por el incumplimiento por parte de Menem de un supuesto compromiso de proporcionar tecnología nuclear a ese país (¿a cambio de qué?). La intención de ocultar esos hechos explicaría las presiones del gobierno sobre la justicia para desviar la investigación.

Otro caso que conmocionó la opinión pública fue el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, culpable de haber investigado demasiado sobre un empresario vinculado a las privatizaciones y otros negocios de la época menemista (Alfredo Yabrán, denunciado por Cavallo como cabeza de las mafias que actuaban en el gobierno). La complicidad de elementos de la policía bonaerense con los custodios del empresario y el intento de encubrir a los asesinos provocó una oleada de protestas e indignación (“No se olviden de Cabezas”).

Un nuevo clientelismo

Con el incremento de la extrema pobreza y el abandono de funciones protectoras por parte del estado reapareció –bajo nuevas formas- un fenómeno político tradicional: el clientelismo.

A fines del siglo XIX, cuando el voto era voluntario y *cantado*, los electores eran reclutados por caudillos locales, dependientes de un candidato, a quien se solía llamar “el doctor”. Los *guapos* al servicio del caudillo no sólo votaban por *el doctor* sino que también defendían –con las armas en la mano cuando era

necesario- el acceso de sus partidarios al atrio electoral. A cambio de eso recibían del caudillo una serie de favores: podía sacarlos de la cárcel en caso de desgracia, ponerles un abogado que los defendiera cuando tenían problemas con la justicia, conseguir un puesto de maestra para sus hijas... A su vez el caudillo, gracias a la influencia del *doctor*, podía obtener un puesto en la administración pública o favores del gobierno para sus negocios particulares. Así, cuando el *doctor* era elegido diputado o senador, retribuía los servicios electorales prestados por sus caudillos. En esta especie de pirámide feudal, la importancia de cada uno dependía del número de clientes que podía aportar.

Con la Ley Sáenz Peña de 1912, el voto se volvió secreto y obligatorio, pero las relaciones clientelares no dejaron de funcionar alrededor de los comités radicales y conservadores. El asado del día de elecciones, el vino y las empanadas en el comité, sólo eran los aspectos folclóricos de lazos más complejos que unían a los beneficiarios de la mal afamada política.

Las unidades básicas peronistas mantuvieron algunas de las funciones del viejo comité, aunque con el voto femenino cambiaron en gran medida sus servicios y pasaron a dar cursos de corte y confección y ayuda escolar a los niños, por ejemplo. Además, ya no constituían un elemento central del sistema: las necesidades básicas de los electores eran cubiertas por su salario, complementado por los servicios del estado (hospitales, educación...) y por los sindicatos (obras sociales). A cambio, el *pueblo peronista* votaba por el gobierno que aseguraba esos servicios, por lo cual se ha hablado de un

clientelismo de estado. La Fundación Eva Perón, por su parte, llegaba con su ayuda directa a los sectores más pobres de la población, no incluidos en los sindicatos.

Con la caída del peronismo, esos sectores quedaron prácticamente librados a su suerte. Sólo la ayuda caritativa de algunas organizaciones católicas llegaba a algunos de ellos. Pero el número de desocupados era relativamente escaso y los salarios, aunque en constante disminución, permitían cubrir las necesidades básicas, lo que, sumado a la presencia del estado y sus servicios, permitió que la *cultura de la pobreza* se estabilizara durante muchos años.

Todo esto terminó con la *revolución* menemista. Al tiempo que aumentaba la desocupación, el subempleo, el trabajo en negro o precario, el estado abandonaba las funciones sociales que había desempeñado, y una parte cada vez mayor de la población quedaba totalmente desprotegida. Empezaron entonces a aparecer organizaciones, como los comedores comunitarios, destinados a cubrir necesidades básicas: alimentación, medicamentos, materiales de construcción para la vivienda... En el Gran Buenos Aires fueron los intendentes peronistas los que comenzaron a organizar estas redes, auxiliados por punteros y por manzaneras que actuaban como intermediarios en las villas miseria y los barrios más carenciados. Más adelante, cuando se establecieron subsidios al paro, fueron también ellos los que se encargaron de distribuirlos.

Así, mediante el uso de recursos del estado, intendentes y punteros fueron

constituyéndose una clientela que constituiría una parte importante de su capital político. Cuanto más numerosa, mayor era la cantidad de partidarios que podían movilizar en actos y marchas, o en las elecciones internas del PJ, y mejores sus posibilidades de ubicación en la política local. Este sistema permitía mantener en funcionamiento la maquinaria del PJ y lo volvía imbatible en las elecciones. A la cabeza de estas redes, Eduardo Duhalde y su esposa, “Chiche”, pudieron controlar la mayor parte del conurbano bonaerense y disputarle a Menem el control del partido.

La re-reelección

Si bien los constituyentes habían especificado que sólo se autorizarían dos mandatos sucesivos de cuatro años, en 1998 el círculo menemista comenzó a argumentar que el mandato que terminaba el presidente era su primer mandato de cuatro años y que, por lo tanto, era reelegible por cuatro años más. Para validar sus pretensiones, contaban con la *mayoría automática* de la Corte Suprema, capaz de aprobar cualquier interpretación alambicada, aunque contradijera el espíritu y la letra de la Constitución.

Pero el círculo menemista no contaba con el apoyo del PJ: si un congreso celebrado en julio de ese año había respaldado sus pretensiones, en él no habían participado los delegados que respondían a Eduardo Duhalde ni a Carlos Reutemann. Duhalde amenazó entonces con convocar un plebiscito sobre el tema en la provincia de Buenos Aires y, ante el peligro de perderlo,

Menem renunció a su candidatura. Pero cuando consiguió la autorización de un juez, volvió a insistir, con el apoyo de varios gobernadores.

Finalmente, la re-reelección no consiguió el visto bueno del bloque de diputados peronistas, y el vencimiento de los plazos legales para presentar la candidatura la tornó imposible. El tortuoso proceso había provocado un fuerte enfrentamiento entre Menem y Duhalde: el primero había puesto en juego todos los recursos de que disponía como presidente de la nación y del partido para debilitar al candidato peronista. Ya que no podía ser reelegido en 1999, prefería pasar los cuatro años siguientes como jefe de la oposición a que Duhalde llegara al poder y se consolidara en él durante cuatro -u ocho- años.

Cacerolazos y puebladas

Entre la asunción de la presidencia por Fernando de la Rúa, el 10 de diciembre de 1999, y la de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, se desarrolla el periodo más agitado e inestable desde la restauración de la democracia. El único presidente elegido en comicios regulares debe renunciar ante la presión de la calle y le suceden cuatro presidentes provisorios, según la línea de sucesión o elegidos por el Congreso. Graves problemas económicos, sociales y políticos constituyen el telón de fondo de esta rápida sucesión de gobernantes.

Desde el punto de vista económico, la convertibilidad del peso se había vuelto insostenible: su sobrevaluación dificultaba las exportaciones, favorecía las importaciones y desequilibraba la balanza comercial. Pero, ¿cómo salir de la convertibilidad sin despertar al temido fantasma de la inflación incontrolable? Y, en lo inmediato, ¿cómo evitar que la previsible devaluación del peso provocara una corrida al dólar que pusiera en peligro al sistema bancario?

Por otra parte, el servicio de la deuda externa absorbía las pocas divisas disponibles y se había convertido en un cepo que impedía el crecimiento. El FMI podía imponer sus condiciones para financiar los pagos y el riesgo-país se convirtió en una referencia cotidiana seguida por especialistas y profanos. Finalmente, el inevitable *default* dejó al país al margen de los circuitos financieros internacionales.

La cuestión social atañía a los sectores que la *modernización* menemista había

dejado de lado: desocupados, regiones enteras del interior... En estas últimas, se multiplicaban los piquetes con cortes de rutas, que luego se extenderían también al conurbano bonaerense y a las calles de la capital. Los piqueteros se organizaron y pasaron a formar parte del nuevo escenario social. Los sectores medios, afectados sobre todo por las limitaciones al retiro de depósitos bancarios (el “corralito” y sus variantes), que los pequeños ahorristas vivían como una expropiación, salieron también a la calle y protestaron al ritmo de sus cacerolas, exponiendo sus reivindicaciones en las asambleas barriales.

Ninguna fuerza política parecía capaz de encauzar estos descontentos. Por el contrario, la que había triunfado con el apoyo de sectores medios y populares contra el menemismo, terminaría por recurrir a las mismas políticas económicas, encarnadas en la persona de Domingo Cavallo. Desde la renuncia de Carlos Álvarez a la vicepresidencia, el Frepaso y la Alianza habían comenzado un proceso de disgregación. El peronismo tampoco ofrecía una alternativa más creíble: en las elecciones presidenciales de 2003 se presentaron tres candidatos peronistas. Todo esto llevaba al descrédito de la clase política en su totalidad, que se expresó en el denominado “voto bronca” y en la consigna “que se vayan todos”. Sin embargo, el sistema democrático se mantuvo pese a todo, en medio del escepticismo general.

Formación de la Alianza

El bipartidismo peronista-radical, establecido en 1946 y restaurado en 1983, no

sobrevivió a esos cambios y dejó lugar a una oferta política más diversificada, con la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Ésta resultó de dos procesos convergentes: por un lado, la declinación de la UCR, que la obligó a buscar aliados para sobrevivir; por otro, la coalición de peronistas disidentes y partidos menores de centro-izquierda, bien implantados en la Capital y la provincia de Buenos Aires, pero que carecían de estructuras en el interior.

En cuanto a la UCR, recordemos que en las elecciones de 1989, aun en medio de la catastrófica situación económica en que terminaba su gobierno, había obtenido un 39 por ciento de los votos. En las legislativas de 1993, sólo conservaba un 30 por ciento, y en las presidenciales de 1995 había bajado a un 17 por ciento. Al recuerdo de la precipitada salida del gobierno de Alfonsín se unía el del pacto de Olivos, que desdibujaba el papel opositor del partido, la borrosa figura del candidato presidencial (Horacio Massaccesi) y las divisiones internas que debilitaban a la formación. En esas condiciones, algunos dirigentes como Federico Storani y Rodolfo Terragno planteaban la necesidad de buscar alianzas para mantener la presencia del radicalismo en la escena política.

Por otro lado, dentro del peronismo se había formado un grupo, dirigido por Carlos “Chacho” Álvarez, que desde 1983 se expresaba a través de la revista *Unidos* y que se oponía a la dirección del PJ, ejercida por los “mariscales de la derrota” y burócratas sindicales. A fines de 1985, éstos habían sido desplazados por el triunfo de los llamados “renovadores”, dirigidos por Antonio

Cafiero. Pero algunas de las primeras medidas del gobierno de Menem -como los indultos- llevaron a los diputados de ese grupo (conocido como el “grupo de los ocho”) a separarse del bloque justicialista en 1990. Al año siguiente, algunos de ellos dejaron el partido y formaron una corriente que, con la incorporación de grupos provenientes del PI, el PC, Democracia Popular (Carlos Auyero) y organismos de derechos humanos (Graciela Fernández Meijide) se transformó en Frente.

El Frente Amplio uruguayo, organizado en 1971 como alternativa de centro-izquierda al bipartidismo tradicional, servía en alguna medida de modelo. Tanto más cuanto que, reorganizado después de la caída de la dictadura militar, había ganado la intendencia de Montevideo en 1989 y se proyectaba como futura mayoría nacional.

Ante la actitud conciliadora del alfonsinismo, el Frente se fue convirtiendo en la principal fuerza de oposición al menemismo, al que criticaba desde el punto de vista ético (frente a la corrupción) y de los valores republicanos (frente al autoritarismo y la manipulación de las instituciones). En 1993, su fusión con el Frente del Sur, de Fernando “Pino” Solanas, dio lugar a la constitución del Frente Grande, que al año siguiente – a pesar de la separación de Solanas y del PC- obtendría el primer lugar en la elección de convencionales constituyentes por la Capital Federal, con el 37 por ciento de los votos. En el resto del país, en cambio, sólo cosechó un 13 por ciento frente al 20 por ciento de la UCR: esas cifras indicaban el camino a seguir para crecer electoralmente.

Políticamente, el Frente Grande se opuso al pacto de Olivos, reforzando así su perfil opositor.

A fines de 1994, la alianza del Frente Grande con el dirigido por el ex gobernador de Mendoza, José Octavio Bordón, dio lugar a la formación del Frente País Solidario (Frepaso), al que se incorporaría luego la Unidad Socialista (PSD, PS Popular). De este modo, comenzaba a concretarse el llamado de Álvarez a la “transversalidad”, es decir, la confluencia de sectores democráticos, progresistas y populares, rediseñando las identidades políticas y permitiendo también una renovación generacional.

Al mismo tiempo, el encuentro de El Molino entre Álvarez, Bordón y Storani iniciaba las conversaciones entre frentistas y radicales. También en este caso existía un antecedente latinoamericano de coalición centrista: la Convergencia chilena, reunida contra el plebiscito convocado por Pinochet en 1988 y que había impuesto su candidato presidencial al año siguiente.

Elegidos por internas abiertas –una novedad en nuestro sistema político: podían votar todos los ciudadanos no afiliados a otro partido- la fórmula Bordón-Álvarez obtuvo un 29 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 1995. Al año siguiente, Bordón se separó del Frepaso, mostrando el carácter todavía endeble de la coalición, que reunía militantes de ideologías y tradiciones políticas diferentes y cuya organización estaba poco estructurada.

Esto no impidió que continuaran sus éxitos electorales, a través, sobre todo, de Graciela Fernández Meijide (miembro de la APDH y ex secretaria de la

Conadep), que fue elegida senadora por la Capital con un 45 por ciento de los votos. Al año siguiente fue elegida presidenta de la Asamblea Estatuyente de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, los electores porteños prefirieron al radical Fernando de la Rúa como jefe de gobierno de la nueva ciudad autónoma, valorando una experiencia político-administrativa de la que carecía la candidata frepasista.

En octubre de 1995, la UCR y el Frepaso apoyaron la candidatura del radical Ángel Rozas a la gobernación del Chaco: fue el primer triunfo electoral conjunto. En septiembre de 1996, ambas fuerzas impulsaron el apagón de protesta contra la política económica y, al año siguiente, un cacerolazo contra el aumento de las tarifas telefónicas.

Estas protestas coincidían con otras, originadas en distintos sectores de la sociedad: en 1996 la CGT declaró tres paros generales y los docentes instalaron una carpa frente al Congreso en defensa de sus reivindicaciones. El consenso que había logrado el menemismo en su primer gobierno se diluía.

En estas condiciones, el Frepaso intentó una maniobra audaz: desafiar al peronismo en la provincia de Buenos Aires, feudo indiscutido de Eduardo Duhalde. Para eso, Fernández Meijide renunció a su banca de senadora y se presentó como cabeza de la lista común de candidatos a diputados que presentaron la UCR y el Frepaso. Para enfrentarla, el gobernador promovió la candidatura de su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde. Se trataba de una prueba de fuego para el Frepaso, ya que su éxito implicaba debilitar al probable candidato

presidencial del peronismo en 1999. La campaña fue previsiblemente intensa: la oposición identificaba la política de Duhalde con la de Menem; el oficialismo denunciaba la intromisión de la “paqueta de Barrio Norte” en una provincia ajena.

En medio de esta campaña decisiva, el 2 de agosto de 1997, la UCR y el Frepaso anunciaron la formación de la Alianza y la presentación de listas comunes en la mayor parte de las provincias.

Cuanto más alto subimos...

La lista encabezada por Fernández Meijide obtuvo un 48 por ciento de los sufragios, frente al 41 por ciento de “Chiche” Duhalde: la Alianza se mantenía en pie. Pudo presentar listas comunes en quince provincias, pero en nueve de ellas no se alcanzó un acuerdo. Las cifras mostraron que, sin las estructuras y los cuadros radicales del interior, la Alianza no podía ir más allá de la provincia de Buenos Aires. El aporte radical le permitió triunfar en otras cinco provincias, pero seguía lejos del PJ, victorioso en diez. El porcentaje de votos a nivel nacional era equivalente: 36 por ciento el PJ y otro tanto la Alianza. A dos años de la elección presidencial, nada estaba entonces definido.

Las elecciones de gobernadores realizadas durante 1999 tampoco fueron muy alentadoras para la Alianza: aunque ganó en siete provincias, el PJ se impuso en catorce. Más importante aún: Fernández Meijide fue derrotada en la provincia de Buenos Aires por el candidato menemista Carlos Ruckauf (con el

41 y el 48 por ciento de los votos respectivamente). Éste sostenía un discurso basado en el reclamo de mayor seguridad y mano dura contra la delincuencia, y contaba con el apoyo de la Ucedé y la Acción por la República, partido creado por Cavallo. También influyó la Iglesia: cuando Fernández Meijide declaró su apoyo a la despenalización del aborto, nueve obispos llamaron a votar contra esa propuesta y el menemismo aprovechó para denunciar a la candidata *atea* y *abortera*. El triunfo de Aníbal Ibarra (Frepaso) como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al año siguiente, mejoró un poco las perspectivas de la Alianza.

Mientras tanto, se habían decidido las candidaturas presidenciales de las dos grandes formaciones. En el PJ, como hemos visto, el proceso fue traumático y Duhalde llegó a la candidatura debilitado por su enfrentamiento con Menem. En la Alianza, el problema se planteaba en términos diferentes: designación del candidato por consenso o por elecciones internas. El primer procedimiento evitaría los enfrentamientos internos, pero iba en contra de la imagen de transparencia y de participación que la formación pretendía dar. El segundo, más democrático y movilizador, amenazaba con profundizar las divisiones y crear otras. Como en 1995, se optó por las internas abiertas, en las que participaron dos millones trescientos mil votantes. De la Rúa se impuso sobre Fernández Meijide con un 63 por ciento de los votos.

Así se llegó a la elección presidencial del 29 de octubre de 1999: De la Rúa fue elegido con un 48 por ciento de los votos, frente al 38 por ciento de Duhalde y

un 10 por ciento de Cavallo.

Más de lo mismo

De la Rúa asumió el 10 de diciembre de 1999. Sólo dos de los ministros pertenecían al Frepaso (Fernández Meijide, en Desarrollo social, y Alberto Flamarique, en Trabajo); los demás procedían del radicalismo y el ministro de Educación, Juan José Llach, había sido colaborador de Cavallo, lo que provocó las protestas de legisladores frepasistas, estudiantes radicales (Franja Morada) y sindicalistas docentes. El banquero Fernando de Santibáñez, amigo personal de Fernando de la Rúa y muy vinculado a los medios empresarios, ocupó la dirección de la SIDE.

El ministro de Economía, José Luis Machinea, empezó por una ley de reforma tributaria que elevaba el impuesto a las ganancias y generalizaba el IVA. En medio de una recesión que se prolongaba desde el último trimestre de 1998, estos aumentos contribuyeron a la caída del consumo y, por consecuencia, de la recaudación fiscal. Entonces, el ministro recurrió a la rebaja de las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos (12 a 15 por ciento). También se suprimieron los planes Trabajar, que aliviaban la situación de muchos desocupados. Poco después, el ministro firmó un acuerdo con el FMI que comprometía al gobierno a un programa de ajustes fiscales y reformas laborales.

Estas últimas seguían las pautas de flexibilización y desregulación del mercado

de trabajo que había dejado inconclusas Menem ante la resistencia de la CGT. Incluían la ampliación del periodo de prueba hasta un año para los aspirantes a un puesto de trabajo, lo que contribuía a la precarización del empleo, y la anulación de la *ultra- actividad* de los convenios colectivos, que implicaba su vigencia mientras las partes no acordaran uno nuevo. Autorizaban, además, la negociación de los convenios colectivos por empresa o por regiones, y no por rama de actividad, lo que significaba una reducción del poder de las direcciones sindicales centralizadas.

La disposición de un sector de la CGT a negociar el proyecto con el gobierno provocó la división de la central en una CGT oficial, dirigida por Rodolfo Daer (Alimentación) e integrada por los sindicatos más poderosos, conocidos como “los gordos”, y una CGT disidente (ex MTA), liderada por el camionero Hugo Moyano. También el bloque de diputados de la Alianza se dividió, con nueve legisladores que votaron contra el proyecto del gobierno.

En el Senado, la mayoría peronista introdujo algunas modificaciones que limitaban la descentralización de la negociación de los convenios. Así y todo, la ley sólo pudo ser aprobada en virtud de un soborno que se pagó a varios senadores radicales y peronistas, lo que provocó el mayor escándalo de corrupción del periodo. El titular de la SIDE y el ministro de Trabajo fueron acusados de haber comprado el voto de varios senadores: “A los senadores los arreglo con la Banelco” habría dicho Flamarique. Denunciado por un periodista, el asunto fue planteado en el Senado el 13 de julio y llevó a una reorganización

del gabinete al mes siguiente. El respaldo de De la Rúa a los funcionarios sospechados fue uno de los factores que llevaron a la renuncia de Carlos Alvarez el 6 de octubre del 2000, lo que inició la disgregación de la Alianza.

Mientras tanto, los sindicatos habían realizado varias manifestaciones de oposición a la política económica del gobierno. El 24 de febrero del 2000, la CGT disidente realizó un paro con movilización a la Plaza de Mayo, mientras la CTA protestaba frente al Congreso. A fines de mayo, ante nuevos anuncios de reducción de salarios de los empleados públicos, una marcha de protesta reunió a la CGT disidente, la CTA, el PJ, organismos de derechos humanos y sectores del Frepaso, con el apoyo de varios obispos. El 9 de junio, un paro general fue acompañado con marchas y piquetes en todo el país.

Nada de esto impidió que De la Rúa persistiera en su política de ajuste y reemplazara a Machinea por el radical Ricardo López Murphy: el solo anuncio de los proyectos del nuevo ministro provocó tales reacciones que éste debió renunciar a los dos días, y el 6 de marzo de 2001 fue sustituido por el mismísimo Cavallo.

Se inició entonces la política del “déficit cero”: la prioridad del servicio de la deuda obligaba a reducir todos los demás gastos del estado: salud, educación, planes sociales. Esto agravaba la situación de los desocupados (que representaban ya un 20 por ciento de la población activa), y se multiplicaron los piquetes. Mientras tanto, el riesgo-país alcanzó niveles récord y el índice Merval de la Bolsa de Valores de Buenos Aires estaba en su punto más bajo de los

últimos diez años. La recesión duraba ya cuarenta meses y la producción industrial había caído casi un 10 por ciento entre octubre del 2000 y el mismo mes de 2001. Ese año el PIB se redujo un 4,4 por ciento. El descenso del consumo y, en consecuencia, de la recaudación fiscal (IVA), hizo que la reducción del déficit sólo se lograra con sucesivos ajustes que, a su vez, profundizaban la recesión. En cuanto a la deuda externa, el megacanje de títulos permitió una reprogramación de vencimientos a un alto costo. Los únicos beneficiarios de ese canje fueron los bancos, que recibieron una comisión de 150 millones de dólares. La deuda externa, en cambio, aumentó en 55 mil millones de dólares.

En estas condiciones se llegó a las elecciones legislativas de octubre de 2001, en las que se renovaba la totalidad del Senado y parte de Diputados. No es de extrañar que el PJ haya triunfado en 17 de los 24 distritos, manteniendo la mayoría en la Cámara Alta y alcanzándola en la Baja. La Alianza perdió cinco millones de votantes, aunque no todos pasaron al PJ: las dos formaciones, que en 1999 habían reunido casi el 80 por ciento de los votos, sólo representaban dos años después un 66 por ciento (PJ: 40 por ciento, Alianza: 26 por ciento). El partido del ministro de Economía obtuvo el 1,5 por ciento de los sufragios.

Algunos de los votos fugitivos beneficiaban a nuevas formaciones, sobre todo a la Alternativa por una República de Iguales (ARI) creada por Elisa Carrió, que obtuvo el 8 por ciento y, en menor medida, a formaciones de izquierda: Polo Social, Izquierda Unida, Autodeterminación y Libertad. Pero más de la mitad de

ellos se transformaron en el llamado “voto bronca” (1.6 millones en blanco y 2.2 millones nulos), que constituían el 21 por ciento de los votos expresados; eran la primera minoría en la Capital y Santa Fe y ocupaban el segundo lugar en la provincia de Buenos Aires. Si a eso les sumamos las abstenciones (26 por ciento), vemos que casi la mitad del padrón no se sentía representado por ninguna de las fuerzas políticas existentes.

Además, la campaña electoral mostró una transversalidad *sui generis*: la política económica del gobierno no fue criticada, en general, por los candidatos menemistas, cavallistas o radicales (el “partido único del ajuste”), pero fue fuertemente condenada, en cambio, por los candidatos frepasistas, alfonsinistas y duhaldistas, que recibieron la mayoría de los votos. Nada de esto impidió que el tándem De la Rúa-Cavallo insistiera en sus recortes presupuestarios y que las protestas se extendieran de las organizaciones sindicales y de piqueteros a nuevos protagonistas, como los jubilados, y aun a organizaciones patronales.

En este contexto, el FMI decidió suspender el desembolso previsto para diciembre, argumentando el incumplimiento por el gobierno argentino de las condiciones pactadas; el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) congelaron otros créditos. El viaje de Cavallo a Nueva York no logró convencer al FMI de que apoyara sus proyectos de refinanciación de la deuda y el fantasma del *default* se veía cada vez más cercano, así como el del fin de la convertibilidad y la devaluación del peso. Esta última posibilidad provocaba el retiro de depósitos bancarios: tres mil millones de dólares en

octubre, mil millones en las primeras semanas de noviembre. Entonces, para “preservar el ahorro de los argentinos” frente a “los ataques especulativos de quienes buscan una devaluación”, como dijo Cavallo, el 30 de noviembre se puso un límite a esos retiros. Durante un periodo de noventa días –que luego se prolongaría hasta fines de 2002 en el caso de las cuentas a la vista y de ahorro (“corralito”) y hasta marzo de 2003 en el caso de los depósitos a plazo fijo (“corralón”) – sólo podrían retirarse 250 pesos por semana.

En una economía en que gran parte de los pagos se hacían en efectivo, eso implicaba una iliquidez que afectaría a los pequeños comerciantes y a todos los servicios que se pagaban en negro y que representaban un sector importante de la actividad: la llamada “economía informal”. En total, eran unos 65 mil millones de dólares que quedaban así bloqueados, salvando a los bancos pero reforzando la depresión. En cuanto a las víctimas, el 75 por ciento eran pequeños ahorristas que tenían depósitos de hasta mil pesos. Los grandes capitales ya habían sido retirados y enviados al exterior de diversas maneras, burlando los controles a la transferencias de fondos. Desde entonces, las manifestaciones y cacerolazos de estos ahorristas estafados constituyeron la expresión más visible –y audible- de la protesta urbana.

En estas circunstancias, las dos CGT y la CTA llamaron a un paro general para el 13 de diciembre, que tuvo amplia repercusión. Incluso la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias se sumó a la protesta, propiciando un bocinazo. El día anterior, la Asamblea piquetera había convocado a una jornada

de lucha; el 14 de diciembre comenzaron los ataques a supermercados. Estos acontecimientos condensaban, en pocos días, tres de los principales factores de la crisis: el descontento sindical, la exasperación de los desocupados y la urgencia de las necesidades de quienes se hallaban en la extrema pobreza. A esto se sumaban los cacerolazos de los pequeños ahorristas atrapados en el corralito, todo lo cual constituyó una combinación explosiva.

La reunión convocada por la Iglesia para el día 19 de diciembre, con la participación de miembros del gobierno, dirigentes justicialistas y radicales y representantes de las organizaciones sindicales y patronales para constituir un gobierno de unidad nacional no tuvo éxito: la suerte del gobierno de la Alianza estaba echada. Desde el día anterior se habían multiplicado los asaltos a supermercados en el Gran Buenos Aires y en varias ciudades del interior. El 19 continuaron, y ciertos empresarios intentaron organizar formas de defensa privada. Algunos pequeños comerciantes rechazaron a balazos a los grupos sospechosos que se acercaban a su mercadito: la guerra de pobres contra pobres se sumaba al caos general.

La declaración del estado de sitio no hizo más que agravar la situación. Las manifestaciones de protesta que rodearon la casa de Cavallo y otros lugares simbólicos confluyeron después a Plaza de Mayo. El gobierno ordenó reprimir y durante todo el 20 de diciembre la Plaza y el microcentro se convirtieron en un campo de batalla, donde murieron 39 manifestantes. Sólo entonces Cavallo y De la Rúa renunciaron, dejando el país en una situación caótica.

El mes de los cuatro presidentes

Diciembre de 2001 quedará probablemente en la historia argentina como el mes de los cuatro presidentes. Dado que, debido a la renuncia de Carlos Álvarez, no había vicepresidente, se hizo cargo provisoriamente de la presidencia de la nación el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, quien convocó a una reunión conjunta de ambas cámaras: la Asamblea Legislativa. Ésta eligió presidente provisorio al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, “el Adolfo”, hasta la celebración de elecciones en marzo.

El nuevo presidente contaba con el apoyo del Grupo Federal del peronismo, integrado principalmente por los gobernadores de las provincias menores. Una de sus primeras medidas fue la suspensión del pago de los servicios de la deuda externa, el tan temido *default*. Anunció también el mantenimiento de la convertibilidad y una serie de medidas tendientes a calmar la protesta social: aumento del salario mínimo; restitución del 13 por ciento descontado a los trabajadores del sector público; eliminación de ministerios y tope para el salario de funcionarios y la creación de un millón de puestos de trabajo (sic). Pero no llegará a concretarlas: el nombramiento de Carlos Grosso (ex intendente menemista de la Capital, sospechado de corrupción) como jefe de gabinete produjo nuevos cacerolazos frente al Congreso, el palacio de Tribunales, la residencia de Olivos.

Rodríguez Saá buscó entonces el apoyo de los gobernadores peronistas: sólo seis de los catorce invitados asistieron a la reunión que convocó en

Chapadmalal y entre ellos no estaban los gobernadores de las provincias más importantes. El 30 de diciembre renunció y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, se hizo cargo de la presidencia de la nación (es el cuarto presidente en un mes) y convocó a la Asamblea Legislativa que, el 1º de enero de 2002 eligió a Eduardo Duhalde para completar el mandato presidencial hasta diciembre de 2003.

Es sintomático que, en medio de esta situación que tanto se parecía a un vacío de poder, a nadie se le haya ocurrido pensar en lo que entre 1930 y 1983 hubiera sido la salida obvia. Nadie pensó que las fuerzas armadas tuvieran ningún papel en la resolución del problema político, y éste se desarrolló siguiendo las reglas constitucionales hasta encontrar a quien tenía suficiente respaldo para gobernar. Duhalde tenía el apoyo de la mayoría de los gobernadores y legisladores peronistas, de parte del radicalismo (Alfonsín) y del Frepaso (Aníbal Ibarra), de la UIA y de la CGT. Con ellos debía afrontar el problema del momento:

¿Hay una vida después del default ?

Casi todos los economistas pensaban que el *default* llevaría a la economía argentina a una situación terminal; que, marginada de los circuitos financieros internacionales, caería en un estancamiento del que le costaría mucho salir. Con esta siniestra perspectiva inició Duhalde su gestión.

Casi cuatro años de recesión habían destruido buena parte del sistema

productivo, en especial, pymes. La industria sólo utilizaba un 50 por ciento de su capacidad instalada. Los ingresos fiscales, provenientes en gran parte del IVA, se habían reducido junto con el mercado interno. El déficit fiscal de la nación y las provincias equivalía a un 6 por ciento del PIB. Hasta la implantación del corralito, los bancos habían perdido un 22 por ciento de los depósitos; en los últimos meses de 2001 el Banco Central había tenido que liquidar el 45 por ciento de sus reservas. Se calcula que unos 117 mil millones de dólares habían salido del país, en la mayor fuga de capitales de la historia argentina. Después del *default* no había posibilidad de recurrir al crédito de los organismos internacionales y el riesgo-país alejaba también el crédito de los bancos privados.

El programa de Duhalde no era modesto: afirmaba que con su gobierno terminaba “la alianza del estado con el capital financiero” (1989-2001), y comenzaba una etapa de “alianza del estado con la producción y el trabajo”. Es lo que se llamó la “reindustrialización”. Pero, además, era necesario negociar con el FMI para volver a recibir créditos de los organismos financieros internacionales. Como decía el canciller Carlos Ruckauf: “para el mundo, nos fuimos a África; ahora tenemos que volver a América”. Las exigencias de esos organismos no siempre eran compatibles con el crecimiento de la economía ni con las expectativas de “la gente”. Como diría el segundo ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, había que “caminar por el medio, entre las exigencias del FMI y los reclamos de la gente”. Sólo en algunos puntos coincidían ambas partes, como la eliminación de las cuasi-monedas: bonos del

estado nacional y de los gobiernos provinciales que se usaban en los pagos a los proveedores y a los empleados públicos y luego circulaban como moneda, creando dificultades a quienes los recibían.

El FMI exigía un plan económico sustentable, con reducción del déficit fiscal, aumento de la presión impositiva, acuerdos de coparticipación federal con las provincias para que éstas redujeran sus déficits fiscales. Tanto sus autoridades como las de la Reserva Federal norteamericana no ocultaban su escepticismo sobre el logro de esos objetivos y no se dejarían convencer fácilmente.

En cuanto a *la gente*, sus reclamos eran numerosos y diversos. Por un lado, después de diez años de políticas *modernizadoras* y cuatro de recesión, quedaban 18 millones de pobres (un 51 por ciento de la población) y, entre ellos, 8 millones de indigentes (22 por ciento de la población). Un 21 por ciento de desocupados, algunos de ellos organizados en las distintas agrupaciones piqueteras que reclamaban, en primer lugar, trabajo o, en su defecto, subsidios que les permitieran sobrevivir. Junto a estos sectores marginados, los obreros ocupados vieron reducirse abruptamente sus salarios reales como consecuencia de la devaluación y la inflación que le siguió (30 por ciento en el primer semestre de 2002) y trataban de recuperarlos a través de las dos CGT y la CTA.

Por otro lado, los pequeños ahorristas atrapados por el corralito reclamaban – cada vez con más vehemencia – la restitución de sus depósitos. Para calmarlos, Duhalde había prometido que quienes habían depositado en dólares

recuperarían sus haberes en la misma moneda, cosa que los bancos consideraban imposible.

La mayor parte del *establishment*, en especial los bancos y las empresas privatizadas, con Menem y la Ucedé a la cabeza, reclamaban la dolarización de la economía, lo que implicaba llevar la convertibilidad a sus últimas consecuencias y adoptar lisa y llanamente el dólar como moneda nacional. Otros empresarios y economistas reconocían, en cambio –más o menos abiertamente- la necesidad de una devaluación.

Entre estas presiones cruzadas tuvo que gobernar Duhalde. Tenía el apoyo de catorce gobernadores peronistas (entre los cuales los más importantes: José Manuel de la Sota, de Córdoba, y Carlos Reutemann, de Santa Fe) y de cinco gobernadores radicales. Tenía el respaldo de la mayoría de los diputados y senadores peronistas, alfonsinistas y frepasistas (en su primer gabinete incorporó tres ministros radicales y un frepasista). Las dos CGT y una parte de la CTA (Víctor De Gennaro, estatal) también lo apoyaban porque lo consideraban, en medio de la gravedad de la situación, como el mal menor.

La Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, aprobada el 6 de enero (y apodada, por eso, “Plan Reyes Magos”) autorizaba la devaluación del peso y una flotación *sucia* de su valor (es decir, con intervención del Banco Central para evitar que el valor del dólar se disparara); establecía la “pesificación” de las deudas y de las tarifas de los servicios públicos; preveía acuerdos entre la nación y las provincias para reducir los déficit fiscales y la

desaparición de los bonos provinciales que circulaban como cuasi-moneda y establecía retenciones sobre las exportaciones, entre las que el petróleo adquiriría importancia. La deuda pública externa sería renegociada y se trataría de atenuar la pobreza y ampliar el mercado interno mediante una serie de programas sociales: plan alimentario, de medicamentos, de subsidios a los desocupados. La ley otorgaba, además, amplios poderes al Ejecutivo para reestructurar el sistema financiero, bancario y cambiario.

Armados de esta ley, Duhalde y su primer ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunciaron el fin de la convertibilidad y la devaluación del peso. Por un tiempo, habría un mercado cambiario oficial, con el dólar a 1,40 pesos, y otro libre, donde su valor sería flotante. Luego, sólo quedaría este último. Las deudas en dólares se pesificaban a 1 dólar=1 peso y los depósitos se convertían a 1 dólar=1,40 pesos. Esta “pesificación asimétrica” favorecía a las pequeñas empresas y particulares endeudados en dólares, pero era fuertemente criticada por los bancos y las empresas privatizadas que, al no poder actualizar sus tarifas, veían recortados sus beneficios. Se mantenía el corralito, aunque flexibilizando el retiro de las cuentas salariales, y se establecía un cronograma para devolver los fondos congelados en tres años. Todo esto provocó nuevas protestas de los pequeños ahorristas: asambleas barriales, cacerolazos, enfrentamientos con la policía.

En estas circunstancias, la Corte Suprema menemista, a la que se había iniciado juicio político en Diputados el 27 de enero, advirtió súbitamente que el

corralito era inconstitucional, y desde el 1º de febrero comenzó a hacer lugar a los recursos de amparo que permitían retirar los depósitos bloqueados. Esta decisión –y la jurisprudencia que sentaba- amenazaba al sistema bancario y fue considerada como un golpe institucional por el gobierno. A fines de marzo, con los depósitos recuperados, cientos de personas hacían fila frente a las casas de cambio para comprar dólares a 4 pesos. Al mes siguiente renunció Remes Lenicov y, el 26 de abril, fue reemplazado por Roberto Lavagna.

De origen peronista, keynesiano heterodoxo, el nuevo ministro había sido secretario de Industria durante el gobierno de Alfonsín y representante ante organismos internacionales como el GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles). Incorporó a su equipo economistas radicales y frepasistas. La situación económica y social con la que se encontró este equipo no podía ser peor. Después de 45 meses de recesión, el PIB había caído un 20 por ciento y la inversión un 60 por ciento. Esto acarrearba la supresión de puestos de trabajo, con el consiguiente aumento de la desocupación (21 por ciento) y del subempleo (18 por ciento). Entre los trabajadores ocupados, más de la mitad tenían empleos precarios (ocasionales, temporarios, en negro); había 150 mil cartoneros y vendedores ambulantes.

En el 2000 se había iniciado un movimiento de emigración que alcanzó a 90 mil personas; se redujo un poco en 2001 con el atentado a las torres gemelas en Nueva York y las medidas restrictivas a la inmigración instauradas en los Estados Unidos, y alcanzó su récord en 2002, con 90 mil nuevos emigrantes..

En los primeros meses del 2003, salieron otros 20 mil, llegando así a un total de 263 mil. La mayor parte de estos emigrantes eran de clase media; muchos profesionales y técnicos que representaban una fuga de cerebros y se llevaban con ellos lo que el estado había invertido en su formación.

La deuda externa había subido a 186 mil millones de dólares (un 169 por ciento del PIB); si se pagara, su servicio absorbería el 50 por ciento de los ingresos del estado. Las reservas del Banco Central se habían reducido a apenas 10 mil millones de dólares. La balanza de pagos mantenía un saldo favorable sólo gracias al *default* y a la reducción de las importaciones, debidas al estancamiento de la industria y la caída del consumo (20 por ciento). Ante la caída del salario real, las dos CGT y la CTA reclamaban aumento del salario mínimo y control de precios, reforzando esos pedidos con paros parciales y cuatro huelgas generales. Más frecuentes eran las concentraciones (asambleas barriales, cacerolazos, marchas) que movilizaban en especial a los pequeños ahorristas atrapados en el corralito y el corralón. Se levantaron carpas de protesta (como la carpa docente de 1997) y se generalizaron también los “escraches” frente a los bancos.

El 26 de junio, un enfrentamiento entre piqueteros y policías bonaerenses en el Puente Pueyrredón terminó con el asesinato a mansalva de dos piqueteros en la estación Avellaneda. Al día siguiente, las manifestaciones de protesta llegaron a la Plaza de Mayo; desde entonces, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán serán recordados como mártires del movimiento piquetero y el castigo

de los responsables políticos de su asesinato será una de las reivindicaciones permanentes.

Ante la gravedad de la situación y el incremento de la violencia, Duhalde decidió anticipar la convocatoria a elecciones presidenciales de octubre a marzo de 2003. El 24 de junio se reunió una comisión intersectorial convocada por el Ministerio de Trabajo, en la que participó la CGT oficial (que representaba al 60 por ciento de los trabajadores sindicalizados), y nueve centrales patronales (entre ellas la UIA, la Cámara de Comercio, la de la Construcción, la Asociación de Bancos, etcétera). Esta comisión propuso un aumento general de cien pesos para los trabajadores del sector privado (un 50 por ciento del total). Esto representaba un aumento promedio del 12 por ciento, mientras que la inflación del primer semestre de 2002 había sido del 30 por ciento.

En diciembre, el gobierno decretó un nuevo aumento general de cincuenta pesos y la restitución a los empleados públicos del descuento del 13 por ciento que había aplicado el gobierno de la Alianza y que la Corte Suprema había declarado inconstitucional. El 57 por ciento de la población estaba entonces por debajo del umbral de la pobreza. Casi dos millones de personas recibían los subsidios establecidos en el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, creado en febrero. Aunque sólo cobraban 150 pesos mensuales, el subsidio permitía reducir el nivel de indigencia, que a fines del año afectaba a cinco millones de personas. Estos planes fueron muy criticados debido su implementación arbitraria y opaca, que ponía la distribución de los subsidios en manos de

gobernadores, intendentes, punteros políticos, o de jefes de organizaciones piqueteras y daba lugar a su utilización como forma de clientelismo. El programa Reparar proporcionaba medicamentos genéricos a precios reducidos, distribuidos también, en su mayor parte, a través de las redes clientelares.

Saliendo del infierno

A mediados de 2002, lentamente, la situación económica empezó a cambiar. El precio del dólar, que se había disparado después de la devaluación, se estabilizó entre 3,60 y 3,70 pesos. Eso permitió que la inflación se desacelerara, estableciéndose en alrededor del 40 por ciento anual. El PIB, que había caído un 16 por ciento en el primer semestre, aumentó levemente en el segundo (cosa que no ocurría desde 1998), reduciendo la caída anual a un 10 por ciento. Una de las causas de ese aumento era la reactivación de la industria, cuya producción creció un 7,5 por ciento en el segundo semestre. Eso implicó la creación de 330 mil puestos de trabajo, que junto con 530 mil planes sociales, redujeron la desocupación a un 17,8 por ciento en octubre y un 15,6 por ciento en mayo de 2003. Eso permitió que los salarios, que habían caído un 40 por ciento en los últimos nueve meses, recuperaran un 10 o 15 por ciento en los seis siguientes. Aumentó entonces el consumo y la recaudación fiscal (50 por ciento). Dado que el gasto público se mantuvo estable, hubo superávit en las cuentas fiscales.

En cuanto al sector externo, la devaluación estimuló las exportaciones y

desalentó las importaciones, de manera que la balanza comercial era excedentaria. El alza del precio de los cereales –en especial de la soja- en los mercados internacionales mejoró los términos del intercambio. Se restablecieron retenciones sobre las exportaciones tradicionales (10 por ciento para los granos y 5 por ciento para los productos derivados) y se impuso un 20 por ciento de retención para el petróleo crudo y un 5 por ciento para los derivados, lo que contribuyó a aumentar los ingresos fiscales y financiar los planes sociales. Sólo la crisis financiera brasileña interrumpió esta expansión: al caer las exportaciones a Brasil un 30 por ciento, las exportaciones totales se redujeron un 10 por ciento, otro ejemplo de la Brasil-dependencia.

Con el superávit de la balanza comercial y la suspensión del servicio de la deuda externa hubo también un excedente en la balanza de pagos. Aumentaron entonces las reservas del Banco Central, lo cual permitió normalizar el sistema financiero: se puso fin al corralito, el retiro de depósitos se frenó, los bancos recuperaron liquidez y fueron autofinanciándose.

En suma, hacia el mes de octubre se había alcanzado una meseta, desde la cual era posible vislumbrar una luz al final del túnel: había signos de vida después del *default*. Pero las negociaciones con el FMI no avanzaban: los funcionarios de la institución, que habían clasificado como *populistas* al presidente y su ministro de Economía, no mostraban ninguna prisa en llegar a un arreglo. Mientras tanto, el gobierno había ido satisfaciendo las exigencias del FMI. Con la visita del director-gerente de la institución se había logrado una

extensión de los vencimientos por un año, hasta junio. Pero tanto las autoridades del FMI como de la Secretaría del Tesoro norteamericano continuaban sosteniendo que era imposible llegar a un acuerdo porque el gobierno argentino no presentaba un plan económico sustentable. Fueron finalmente las presiones de acreedores europeos (Francia, Italia, España) y el temor a una extensión de la crisis al Mercosur (fuerte alza del dólar en Brasil, fuga de capitales en Uruguay) las que llevaron al FMI a flexibilizar sus posiciones.

Así, el 16 de enero de 2003, ante el vencimiento de los compromisos con el FMI, el BM y el BID, se firmó una Carta de Intención con el primero. La Argentina se comprometía a no aumentar el gasto público, a no rebajar los impuestos ni emitir bonos utilizables como moneda y a alcanzar un superávit fiscal del 2,5 por ciento del PIB en 2003. A cambio de ello, el FMI cubriría los vencimientos inmediatos y reprogramaría los otros durante un periodo de ocho meses, refinanciando las deudas con el BM y el BID. Esto significaba el fin del *default* con los organismos financieros internacionales y permitía negociar con los acreedores privados en mejores condiciones. A partir de entonces, toda la atención se concentró en las elecciones convocadas para abril.

Poco antes de traspasar el poder, Duhalde dispuso el indulto de ocho militares y diecisiete civiles; entre los primeros estaban Mohamed Alí Seineldín y otros *carapintadas*; entre los segundos, Enrique Gorriarán Merlo y otros atacantes de La Tablada. Ni los organismos de derechos humanos ni Néstor Kirchner

aprobaron la medida, que parecía resucitar la teoría de los dos demonios y justificar otras impunidades.

La caja de sorpresas

En vísperas de las elecciones del 27 de abril de 2003, el panorama era incierto. Hasta diciembre, un 50 por ciento de los encuestados declaraba que votaría en blanco o anularía su voto: resabios del “voto bronca”. Los partidos políticos no hacían mucho por recuperar su credibilidad.

El peronismo era incapaz de presentar un candidato único: Carlos Reutemann, que era el que reunía más consenso, no aceptó la candidatura; Menem, en cambio, el que producía más rechazo dentro y fuera del partido, se aferraba a la suya; Adolfo Rodríguez Saá hacía lo mismo. Néstor Kirchner, el menos conocido, sólo registraba una intención de voto del 15,8 por ciento en enero. Para evitar unas elecciones internas que serían manejadas por Menem, como presidente del partido, una reunión de notables (ministros, gobernadores, intendentes, legisladores) convocada por el PJ bonaerense proclamó la candidatura de Kirchner. De los grandes electores, éste contaba solamente con el apoyo de Duhalde.

En la UCR las cosas no eran más sencillas. Debilitada por las escisiones y el

mal recuerdo del gobierno de Fernando de la Rúa, tuvo que suspender las elecciones internas que enfrentaban a Rodolfo Terragno y Leopoldo Moreau ante las denuncias de fraude hechas por el primero.

La derecha neoliberal no menemista estaba representada por el Movimiento Federal Recrear, dirigido por Ricardo López Murphy. El ARI de Elisa Carrió atraía a muchos ex frepasistas. Algunos partidos de izquierda influían sobre movimientos piqueteros, pero su presencia electoral era muy limitada. Tampoco el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modín), creado por el teniente coronel Aldo Rico e integrado por muchos ex *-carapintadas*, tenía demasiada importancia en términos electorales. Lo mismo podía decirse del partido organizado por el ex comisario de la policía bonaerense Luis Abelardo Patti, procesado por desapariciones y torturas y aun así elegido intendente de Escobar en 1994 y reelegido en 1998. Ambos expresaban sobre todo la extendida demanda de “mano dura” contra la delincuencia.

Las organizaciones sindicales no tendrían un peso sustancial en estas elecciones. La CGT oficial, dividida entre menemistas y duhaldistas, no apoyó a ninguno de los candidatos, como tampoco lo hizo la CTA, aunque por otras razones, mientras que la CGT disidente se inclinaba por Adolfo Rodríguez Saá.

En cuanto a las organizaciones sociales, como se pudo ver en su Primera Asamblea Nacional de julio de 2001, estaban divididas en varias tendencias. La más importante era la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), dirigida por Luis D’Elía, integrada a la CTA. Su principal aliado era la Corriente Clasista y

Combativa (CCC), relacionada con el PCR: las diferentes posturas frente al gobierno de Kirchner (apoyo de la FTV, oposición de la CCC) llevaron a que esta alianza se rompiera en 2004. El otro grupo era el Bloque Piquetero, integrado por organizaciones vinculadas al PC, al Partido Obrero, al grupo Quebracho y otros. Estas organizaciones movilizaban a muchos miles de adherentes y podían ganar la calle fácilmente, pero tampoco tenían un gran impacto electoral.

Una parte del voto, imposible de calcular, estaba determinada –sobre todo en el conurbano bonaerense- por las redes clientelísticas manejadas por los caudillos locales, casi siempre intendentes.

Tres gritos de corazón

Las elecciones fueron una verdadera caja de sorpresas, empezando por la participación de los electores: casi un 78 por ciento del padrón. El porcentaje de abstenciones (22 por ciento) no se diferenciaba demasiado del registrado en las anteriores elecciones presidenciales. Los votos en blanco representaron un 0,89 por ciento y los nulos 1,62 por ciento. Recordemos que en 2001 ambos sumaban un 21 por ciento; desde entonces, el lema “que se vayan todos” no había dejado de aparecer en todas las manifestaciones y muchos políticos no osaban mostrarse en público por miedo de ser agredidos. ¿Qué había ocurrido entre ambas elecciones?

Primero, se habían producido los acontecimientos de diciembre de 2001, con

su desfile de presidentes efímeros y la sensación de desgobierno que eso provocaba. En medio de calles y rutas cortadas por piquetes, manifestaciones y cacerolazos, la sociedad parecía desintegrarse. La imagen de pequeños comerciantes defendiendo a balazos sus mercaditos contra los saqueadores parecía condensar una lucha más amplia de todos contra todos, sin reglas y sin límites. Los argentinos se habían asomado a ese abismo sin fondo y se habían asustado: lo que los llevó a reconciliarse provisoriamente con la clase política “no fue –entonces- el amor sino el espanto”.

Luego, poco a poco, el gobierno de Duhalde había ido restableciendo el orden, a un costo menor del que podía haberse esperado. Desde mediados de 2002, la economía comenzó a dar signos de recuperación y, después de la larga depresión, muchos se aferraban a esa módica esperanza.

La mayor parte de los votos (el 60 por ciento) fue a los tres candidatos peronistas. Pero el peronismo estaba dividido por la misma línea que dividía al conjunto de la sociedad argentina: los partidarios del modelo neoliberal impuesto en 1976 y reforzado en 1989, por un lado, y sus oponentes “populistas” o neodesarrollistas por el otro. Los primeros, aliados como siempre con la Ucedé, obtuvieron un 24 por ciento de los votos para Menem. Una buena parte de la clase media, nostálgica de la época del “déme dos”, mantenía su fidelidad a quien la había hecho posible. En cambio, la mayor parte de los sectores populares, que lo había votado en 1989 y 1995, ahora lo relacionaba con la desocupación y la pobreza.

Estos sectores populares identificaban al peronismo con sus políticas tradicionales: mejoramiento de las remuneraciones y las condiciones de vida de los trabajadores; creación de empleos, con disminución del paro y el subempleo; reducción de los niveles de pobreza e indigencia. Esto era, principalmente, lo que esperaban de los otros dos candidatos peronistas: Kirchner, que obtuvo el 22 por ciento de los votos, y Adolfo Rodríguez Saá, que obtuvo el 14 por ciento. La diferencia entre ambos no era muy definida desde el punto de vista ideológico y parecía residir, en parte, en su inserción regional: Rodríguez Saá en Cuyo, Kirchner en la Patagonia y, gracias a su alianza con Duhalde, en el conurbano bonaerense. Se percibía también una diferencia de estilo: claramente demagógico en el caso de Rodríguez Saá, más *progre* en el caso de Kirchner; no es sorprendente, entonces, que el primero atrajera al electorado más pobre del interior y el segundo a sectores de la clase media ilustrada.

Recrear obtuvo un 16 por ciento de los votos: sumados a los de Menem, los neoliberales representaban un 40 por ciento del total. Pero, a pesar de las coincidencias ideológicas, tanto las tradiciones políticas como las características personales de ambos candidatos hacían imposible una alianza. Los que habían soñado con una opción entre Menem y López Murphy en la segunda vuelta (es decir, la mayor parte del *establishment*) se sintieron muy decepcionados. Al día siguiente de la elección, el índice Merval -que mide la evolución de los valores en la Bolsa de Buenos Aires-, cayó un 8,62 por ciento, lo que reflejaba la desazón del mundo de los negocios ante la posibilidad del

triunfo de uno de los candidatos “populistas”.

El ARI obtuvo un 14 por ciento de los votos, y los partidos de izquierda porcentajes muy menores. La extrema derecha, representada por el Modin, sólo obtuvo un 0,17 por ciento de los sufragios. Las demás pequeñas agrupaciones no alcanzaban en ningún caso el 1 por ciento. Ése parecía ser también el destino de la UCR, duramente castigada por el recuerdo del gobierno de De la Rúa, que sólo obtuvo un vergonzoso 2,34 por ciento.

Preparándose para la segunda vuelta, Kirchner (con su peculiar sintaxis) resumía lo que estaba en juego de este modo: “Todo el pueblo sufrió la angustiosa década de 1990 en la consolidación de ese proyecto que nació en el 76 [...] El pueblo tiene que optar entre dos modelos diferentes: el de la concentración económica, que trajo el hambre y la falta de trabajo a nuestro pueblo, y el modelo de la producción y el trabajo”. Menem, por su parte, afirmaba: “Hay dos opciones: la Argentina de la paz, de la seguridad, del desarrollo; o una Argentina similar a Cuba [...] Con Kirchner vuelve el peronismo de la violencia, el de los años 70”.

Pero no hubo segunda vuelta: Menem anunció que no se presentaría al *ballottage*. Todas las encuestas le auguraban un número de votos similar al que había recibido en el primer turno, así como el apoyo de casi todas las otras fuerzas políticas a su oponente. Kirchner quedó así electo presidente con el 22 por ciento de los votos: “La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año”, comentaba *La Nación*, poniéndolo en boca de un asistente al Consejo de las

Américas en Washington.

Pingüinos en la Rosada

el nuevo presidente había militado en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, que luego se integraría a la JUP, cosa que no dejaban de recordar sus enemigos, calificándolo de “montonero”. Había estado detenido unos pocos días en La Plata y en Río Gallegos después del golpe de 1976. Desde entonces, ejerció la abogacía e hizo política en Santa Cruz, su provincia natal, de la que era gobernador desde 1991.

Algunos de sus colaboradores en la Casa Rosada procederán, entonces, de la provincia patagónica. Los ministros eran todos de origen peronista, aunque algunos habían pasado por el Frepaso. Cuatro de ellos habían sido ministros de Duhalde, lo que revelaba cierta continuidad.

La asunción de la presidencia por Néstor Kirchner recordaba, en algunos aspectos, a otra asunción realizada treinta años atrás, aunque las consignas eran más moderadas y prudentes. Entre los mandatarios extranjeros sobresalía la presencia de Fidel Castro, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Hugo Chávez. Es que el triunfo de Kirchner se inscribía en una ola que recorría América Latina, que se había iniciado con la elección de Chávez en Venezuela (1999), de Lula en Brasil (2002) y que continuaría después con la victoria del Frente Amplio en Uruguay (2004), de Michelle Bachelet en Chile (2006), de Evo Morales en Bolivia (también en 2006) y de Rafael Correa en Ecuador (2007). Tan

diferentes entre ellos como lo eran las realidades de sus respectivos países, todos representaban reacciones contra el modelo neoliberal, el “pensamiento único” y el Consenso de Washington, que habían predominado durante la década de 1990.

Escoba nueva...

Una de las primeras medidas del nuevo presidente fue la remoción del jefe de estado mayor del ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, fuertemente cuestionado por los organismos de derechos humanos. A Brinzoni se le acusaba de haber participado en la masacre de Margarita Belén, Chaco, en diciembre de 1976, cuando un supuesto traslado de presos políticos terminó con el asesinato de veintidós de ellos y cinco no identificados, durante un frustrado intento de fuga. En ese momento, Brinzoni era secretario general de la intervención en la provincia.

El nombramiento de oficiales de menor antigüedad al frente de las tres fuerzas determinó el pase a retiro de diecinueve generales, trece almirantes y doce brigadieres. Entre ellos estaban los más comprometidos con los crímenes del “Proceso” y los más acérrimos defensores de la impunidad. Esta decisión abrió el camino para avanzar en el procesamiento de los acusados por violación de los derechos humanos.

Luego, le llegó el turno a la Corte Suprema menemista. Su presidente, Julio Nazareno, había sido designado por Menem en 1990, y desde entonces seguía

fielmente las directivas de su jefe. Kirchner se dirigió al Congreso en un discurso público, pidiéndole que avanzara en el juicio político; Nazareno fue perdiendo el apoyo de los otros jueces y terminó por renunciar. El vicepresidente de la Corte y otro de los jueces fueron depuestos por mal desempeño en sus funciones y los otros dos miembros de la *mayoría automática*, siempre bajo la amenaza del juicio político, renunciaron.

Mientras tanto, un decreto había limitado las atribuciones del presidente para designar a los miembros de la Corte, sometiéndolas a mecanismos de transparencia que implicaban un escrutinio de los candidatos por diversas instituciones sociales. Siguiendo estas normas, Kirchner nombró a Eugenio Raúl Zaffaroni, prestigioso jurista de ideas progresistas, y a dos mujeres (!), una de las cuales se declaró, además, atea y partidaria de la despenalización del aborto, algo imposible de concebir siquiera unos años atrás. Aunque la Iglesia hizo todo lo posible para impedir el nombramiento de Carmen Argibay, no lo logró, y ésta asumió su cargo.

El tema del aborto volvió a escandalizar en febrero de 2005, cuando el ministro de Salud se mostró favorable a su despenalización y a la distribución de preservativos para luchar contra el vih-sida. El obispo castrense comentó: “Merecería que le cuelguen una piedra de molino al cuello y que lo tiren al mar”. Confirmado por el Vaticano a pesar del pedido del gobierno, fue destituido de su cargo por decreto. Desde entonces, hubo diversos roces entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica, encabezada por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que

se opuso también a la introducción de la educación sexual en la enseñanza y a la ley nacional de educación.

También los organismos de seguridad, gravemente afectados por la corrupción, fueron depurados. En la Policía Federal, diez de los doce comisarios generales pasaron a retiro y los jefes de las 53 comisarías fueron sometidos a una evaluación, en la que participó el CELS (para las denuncias de torturas, por ejemplo). En octubre de 2003, el jefe de la Policía Federal fue destituido por corrupción, y en abril del año siguiente toda la plana mayor de Investigaciones Complejas (que incluye la división anti-secuestros) pasó a retiro. Poco después, otros oficiales pasaron a disponibilidad o a retiro, totalizando 582 durante el primer año de gobierno de Kirchner.

Más intrincada fue la limpieza de la bonaerense, conocida como la “maldita policía” por el avanzado grado de corrupción que la caracterizaba. En junio de 2003, a partir de las revelaciones de un arrepentido sobre los robos de autos y la protección de los desarmaderos –que constituían, junto con el juego clandestino y la prostitución, una de las principales fuentes de recursos de muchos comisarios bonaerenses- el gobierno de la provincia ordenó una investigación sobre los bienes de estos funcionarios. El primero en caer fue el jefe de la institución, al que siguieron veinte de los cuarenta y cuatro comisarios, que no podían justificar sus ingresos y que fueron juzgados por enriquecimiento ilícito. Entonces comenzaron a proliferar los secuestros extorsivos; se sospechaba que los principales responsables eran, paradójicamente, los

especialistas de la brigada anti-secuestros, cuyo jefe fue efectivamente detenido y procesado.

El problema de la bonaerense generó roces entre el gobierno provincial y el nacional, que exigía el desmantelamiento de las redes de complicidad entre policías e intendentes corruptos. En mayo de 2004, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos León Arslanian, dispuso la expulsión de 303 oficiales y suboficiales de los 1.200 sumariados por gatillo fácil, torturas, violaciones, robos o pedidos de coimas. Se comprometió también a vigilar que los expulsados no se convirtieran en “mano de obra desocupada” que se sumara a las bandas delictivas. En marzo de 2007, el total de policías bonaerenses dados de baja era de 2.500.

La inseguridad se convirtió en el principal motivo de inquietud para la clase media del área metropolitana. La protesta del padre de uno de los secuestrados y asesinados, el empresario textil Juan Carlos Blumberg, provocó un amplio movimiento de solidaridad: 150 mil personas lo acompañaron el 1º de abril de 2004 en su presentación ante el Congreso. Poco después, el gobierno anunciaba un plan estratégico de justicia y seguridad que recogía algunas de las demandas de Blumberg: reformas de la legislación (endurecimiento de penas) y de la justicia (para aumentar su eficacia y agilizar sus procedimientos).

En agosto de 2003, le llegó el turno al Servicio Penitenciario Federal: sesenta y nueve funcionarios pasaron a retiro, entre ellos cinco de los siete integrantes de la cúpula y los directores de las dos cárceles más importantes. Así como los

encargados de combatir los secuestros se dedicaban a secuestrar, los responsables de las cárceles dejaban salir a los presos para que robaran e incluso mataran. Tres meses después, a raíz de la denuncia de un preso al que habían dejado salir de la cárcel para que asesinara a un juez, pasaron a retiro otros treinta jefes de penales. Por otra parte, las condiciones de detención seguían siendo insoportables y eso se traducían en periódicos amotinamientos, duramente reprimidos, como el que arrasó el penal de Magdalena en octubre de 2005 y dejó treinta y tres muertos.

La depuración de las fuerzas de seguridad provocó reacciones, a veces violentas, de los despedidos. Por ejemplo, durante el sitio a la Legislatura porteña por parte de comerciantes ambulantes, prostitutas y travestis durante el tratamiento de reformas al código de convivencia, el 16 de julio de 2004, se produjeron violentos incidentes. El grado de organización y violencia desplegados en el episodio hizo sospechar la presencia de provocadores de los servicios de inteligencia y/o de policías despedidos.

Otro foco de corrupción que el gobierno atacó fueron las obras sociales, empezando por la más importante, la de los jubilados. El PAMI tenía cuatro millones de afiliados y manejaba 4.200 millones de pesos anuales. Los dos directores que representaban a la CGT de “los gordos” resistían los intentos de transparentar el manejo de esos fondos; entonces, el gobierno intervino el organismo.

Sintomático del funcionamiento de la justicia fue el final del juicio por el atentado

contra la AMIA. Después de diez años, terminó con la absolución de todos los acusados ante la evidencia de que las pruebas presentadas habían sido fabricadas por el juez y los fiscales, protegidos por el ministro del Interior y el jefe de la SIDE del gobierno de Menem y con la complicidad, incluso, de dirigentes de la comunidad judía. El juez que había instruido la causa fue removido por el Consejo de la Magistratura, y el estado admitió su responsabilidad por el fracaso de la investigación.

La lucha por la justicia

A lo largo de toda su carrera política, incluyendo la campaña electoral, Kirchner nunca se había mostrado especialmente sensible al problema de los crímenes de la dictadura militar y su impunidad. Pero a los pocos días de asumir tuvo una larga entrevista con los representantes de ocho organismos de defensa de los derechos humanos: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH, el CELS y el Serpaj. Al salir, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, declaró: “Nos equivocamos. No todos son lo mismo, como habíamos creído”.

Esto se confirmaba con el nombramiento de Eduardo Luis Duhalde (defensor de presos políticos, exiliado durante la última dictadura y autor de *El Estado terrorista argentino*) como Secretario de Derechos Humanos. Jorge E. Taiana,

quien después de pasar en la cárcel los siete años del “Proceso”, coordinó el Centro de Estudios Sociales del Serpaj en América Latina y se desempeñó como secretario ejecutivo de la CIDH, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores y luego canciller. El ex ministro del Interior de Cámpora, Esteban Righi, fue designado procurador general de la nación.

Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos, a las que se añadieron HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), Hermanos de desaparecidos y la Asociación de ex detenidos-desaparecidos, lucharon por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos, y por la reanudación de los juicios a los responsables de los crímenes de la última dictadura. Hasta entonces, sólo se había procesado a algunos de los responsables de la apropiación de bebés, hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio (unos 560), delito no contemplado en los decretos de indulto: Videla y Massera cumplían detención domiciliaria por esa causa.

El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, convalidada poco después por el Senado. Eso permitió la reapertura de las causas de la ESMA y del Primer Cuerpo del ejército: Alfredo Astiz y otros catorce militares fueron detenidos por la primera; dieciséis militares, policías y agentes de la SIDE por la segunda. En 2006, la causa de la ESMA se amplió, con el procesamiento de doce nuevos represores y la atribución de nuevos delitos a otros veintiuno.

En Chaco, diez oficiales del ejército, tres de ellos en actividad, fueron citados por el juez que investigaba la causa de Margarita Belén y el jefe del arma les ordenó presentarse. En Córdoba, se abrió una causa a Luciano Benjamín Menéndez y otros cinco represores por las torturas y desapariciones en el campo de La Perla, y en Tucumán fue detenido Antonio D. Bussi, intendente electo de la ciudad, acusado de los crímenes cometidos en el centro clandestino de Arsenales.

En julio de 2003 el gobierno derogó los decretos de De la Rúa que impedían la extradición de acusados por violación de derechos humanos y comenzó a tramitarse el pedido del juez español Baltasar Garzón, relativo a cuarenta y cinco militares y un civil por genocidio, terrorismo y torturas contra ciudadanos de esa nacionalidad. Poco después, el gobierno argentino adhirió a la convención internacional sobre la no prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que, aprobada por el Congreso, pasó a tener el carácter de cláusula constitucional.

Tres de los principales protagonistas del “Proceso” –Harguindeguy, Bignone y Díaz Bessone- debieron presentarse ante un Consejo de Guerra a causa de sus declaraciones, donde incurrían en apología de la tortura y las desapariciones. El primero y el tercero, junto con otros treinta militares, fueron procesados también por su participación en el Plan Cóndor (acuerdo entre las tres dictaduras del Cono Sur –Argentina, Chile y Uruguay- para perseguir y eventualmente desaparecer a los *subversivos* de esas nacionalidades en otro país).

Al año siguiente, Kirchner decidió la creación de un Museo de la Memoria, simbólicamente emplazado en las instalaciones de la ESMA. El jefe de la Armada justificó la cesión del predio al afirmar, en un discurso público, que allí se habían ejecutado “hechos calificados como aberrantes y agraviantes de la dignidad humana, la ética y la ley, para acabar convirtiéndose en un símbolo de barbarie e irracionalidad”. A diferencia del ejército, que había asumido sus responsabilidades en la represión ilegal a través de un documento de su jefe de estado mayor, el teniente general Martín Balza, en 1995, hasta entonces la marina nunca se había hecho cargo de su participación en esos hechos.

Rodeado por familiares de desaparecidos en la ESMA, el presidente dijo en la inauguración del museo, ante unos 40 mil asistentes: “Vengo a pedir perdón de parte del estado nacional por la vergüenza de haber callado, durante veinte años de democracia, tantas atrocidades”, afirmación que le valió un entredicho con Alfonsín. Otros gestos simbólicos fueron la instalación de placas recordatorias en la base aeronaval de Trelew (donde se habían producido los fusilamientos de 1972) y en todas las unidades militares donde hubo centros de detención clandestinos. En Campo de Mayo se habilitó un Museo de la Memoria y otro en el ex centro de La Perla, en Córdoba.

Mientras tanto, los pasos que llevaban a la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida sólo avanzaban lentamente en la justicia. A fines de enero de 2003, la sala Segunda de la Cámara Federal porteña, al juzgar al ex general Suárez Mason y otros doce militares, declaró inválidas e

inconstitucionales esas leyes, basándose en que secuestros y desapariciones eran crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no amnistiables. Confirmaba así los fallos de varios jueces y el caso pasaba a la Corte Suprema.

Pero recién en junio de 2005 la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad; y fue preciso esperar hasta abril de 2007 para que la Cámara Federal hiciera lo mismo con el indulto de los condenados en el juicio a las juntas. Sólo dos sobrevivían, Videla y Massera; los demás habían muerto en su casa. Por fin, en agosto de 2007, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del indulto al ex general Santiago Omar Riveros, sentando jurisprudencia para los otros casos. A fines de 2005, había 1.004 causas abiertas por violación de derechos humanos, 503 acusados y 204 detenidos, siete de ellos militares en actividad.

La conmemoración del 30º aniversario del golpe, el 24 de marzo de 2006 – declarado feriado nacional, como Día de la Memoria- dio lugar a múltiples manifestaciones de repudio a la dictadura militar. Por su parte, varios grupos de militares retirados, junto con familiares de víctimas de la subversión, organizaron actos recordatorios y de crítica a la política de derechos humanos del gobierno (el 24 de mayo de 2006 en Plaza San Martín y el 20 de junio del mismo año en el Círculo Militar). El número de víctimas de la subversión recordado en esos actos, desde Aramburu hasta La Tablada, formaba una lista de 133 militares, lo que recuerda el carácter asimétrico de la supuesta guerra antisubversiva.

En agosto de 2006 se produjo la primera condena en los juicios abiertos

después de la anulación de las leyes de impunidad: Julio Simón, apodado “el turco Julián”, suboficial de la Policía Federal, uno de los torturadores que actuó en El Olimpo y otros centros clandestinos de detención, fue condenado a veinticinco años de cárcel por secuestros, homicidios y apropiación de bebés. Al mes siguiente, el comisario de la bonaerense Miguel Etchecolatz, que había secundado al general Ramón J. Camps en la represión en la provincia de Buenos Aires, fue condenado a reclusión perpetua por los mismos delitos, “en el marco de un genocidio” (según estableció el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en su sentencia).

Uno de los testigos, Jorge Julio López, desapareció durante el proceso, el 18 de septiembre de 2006. Un año después de su desaparición el caso seguía sin aclarar. Como sintetiza una militante de la organización *Justicia, ya!*, nos encontramos frente a una “mezcla de inoperancia, encubrimiento y complicidad de los funcionarios y las fuerzas de seguridad”. Proliferaron entonces las amenazas contra jueces, fiscales y testigos de los otros casos abiertos. Los servicios de informaciones y seguridad no hicieron nada por descubrir su origen: 4.505 testigos citados en casos de lesa humanidad quedaron en la inseguridad más absoluta.

El clima de temor e incertidumbre creado por estos hechos logró su objetivo inmediato: los juicios por violación de derechos humanos se paralizaron. Sólo diez meses después de la desaparición de López se reiniciaron los juicios orales, con el del ex capellán de la policía bonaerense en la época de Camps,

Christian von Wernich.

A fines de 2006, la detención de varios acusados permitió reabrir la causa de la Triple A. Sus crímenes fueron declarados de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, y dos jueces ordenaron la captura de “Isabel” Perón, uno de ellos por asociación ilícita. La aparición de testimonios según los cuales el propio Perón habría estado al tanto de la organización de la banda provocó una ola de protestas que no excluían alguna amenaza (“No jodan con Perón”, decía el cartel de La Fraternidad).

En febrero de 2007 estaban presos 256 acusados por violación de los derechos humanos -70 de ellos en detención domiciliaria a causa de su edad- y había 43 prófugos con orden de captura. Sólo se habían producido dos condenas: los dos policías antes mencionados; un médico de la ESMA y un matrimonio habían sido juzgados por apropiación de un bebé. Ningún militar había sido condenado.

¿Dónde estaban los procesos abiertos? Durmiendo en los diversos juzgados: en varias provincias “la constante excusación de jueces que se pasan los casos unos a otros paraliza los juicios” decía el fiscal general, a cargo de la recién creada Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violación de los derechos humanos. 193 recursos estaban frenados en la Cámara de Casación Penal, algunos durante más de tres años. Muchos de los jueces habían sido nombrados por la dictadura; otros, compartían su ideología.

Respetando la división de poderes, el gobierno que había hecho de la justicia

una de sus promesas más reiteradas no encontraba la forma de evitar esa parálisis. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, a quienes correspondía intervenir, no hacían mucho por acelerar los procesos. Los responsables de los peores crímenes de nuestra historia morían en su casa, sin ser condenados; la resistencia pasiva de la corporación judicial tenía el efecto de una amnistía disimulada.

Entre Lula y Chávez

En política internacional, la prioridad continuó siendo la alianza con Brasil en el marco del Mercosur. Ambos países eran igualmente reticentes ante el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por los Estados Unidos. Pero las relaciones con ese país fueron buenas hasta enero de 2004, cuando el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado salió a criticar la política cubana del gobierno argentino (el canciller, en visita a La Habana, no había recibido a disidentes). Se trataba probablemente de presionar al gobierno para que cambiara su posición con respecto a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU: el año anterior había pasado de la condena a la abstención y Washington temía que hiciera lo mismo en 2004, que fue lo que efectivamente ocurrió.

En junio de ese año, unas declaraciones atribuidas al mismo funcionario provocaron nuevamente la irritación del gobierno argentino: señalaban el peligro que representaban los piqueteros, la esterilidad del enfrentamiento Kirchner-

Duhalde, y comentaban que el primero viraba hacia el chavismo (refiriéndose a la política de Hugo Chávez). El canciller argentino rechazó duramente esa intromisión en la política nacional. Desde entonces, varios viajes a los Estados Unidos de Kirchner y su esposa y algunas entrevistas con Bush trataron de calmar la situación. Pero la incorporación de Venezuela al Mercosur y las frecuentes entrevistas de Kirchner y Hugo Chávez no mejoraban la imagen del presidente argentino ante Washington.

Las relaciones económicas con Venezuela fueron adquiriendo creciente importancia. Durante la crisis energética de 2004, ese país aportó el combustible necesario para enfrentarla. Además, sus compras de maquinaria agrícola representaban un fuerte impulso a esa industria argentina, y Venezuela era uno de los principales mercados para la colocación de bonos de la deuda pública.

El triunfo del centro-izquierdista Frente Amplio en Uruguay, en 2005, parecía favorecer un acercamiento con el gobierno argentino, pero éste fue perturbado por la instalación de plantas de celulosa sobre la margen oriental del río Uruguay, en Fray Bentos, resistidas por los ribereños argentinos de Gualeguaychú, que denunciaban la contaminación de las aguas y cortaron los puentes durante largos períodos.

El viaje de Kirchner a China fue un paso importante en la consolidación de las relaciones económicas con ese país, que compraba el 60 por ciento de la soja y el 20 por ciento de los aceites exportados por la Argentina. La visita del

presidente chino a Buenos Aires, en noviembre de 2004, fue acompañada por el anuncio de inversiones por 20 mil millones de dólares en diez años. Casi al mismo tiempo estuvo el presidente de Corea del Sur, que anunció el otorgamiento de un crédito, el primero que recibía Argentina de un país extranjero después del *default*.

Las relaciones con los Estados Unidos fueron puestas a prueba durante la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en noviembre de 2005. Allí, los Estados Unidos y sus aliados estaban dispuestos a concretar la formación del ALCA, pero se enfrentaron con la oposición de Venezuela y las reticencias de Brasil y Argentina. Estos últimos reclamaban una reducción de los subsidios agrícolas norteamericanos, que perjudicaban sus exportaciones; también se oponían a cualquier resolución precisa con respecto al ALCA. El documento final puso de manifiesto la falta de consenso y los puntos de vista diferentes de ambas partes, y postergó cualquier decisión concreta.

Paralelamente, se celebraba la Cumbre de los Pueblos, con la participación de todo tipo de organizaciones anti-imperialistas, que aplaudieron entusiastas a Hugo Chávez y organizaron marchas y concentraciones de repudio a la presencia de Bush.

En noviembre de 2005, Jorge Taiana reemplazó a Bielsa en Cancillería y Carlos Álvarez a Duhalde como presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, confirmando así la orientación de la política exterior.

La elección de Evo Morales en Bolivia contribuyó a la formación del “eje del mal” (como llamaba George W. Bush a los gobiernos no gratos a los Estados Unidos) en Latinoamérica: Cuba, Venezuela, Bolivia. La elección de Michelle Bachelet en Chile, en cambio, reforzó la tendencia a un reformismo moderado en el Cono Sur y Brasil. Los presidentes de todos esos países se reunieron en la Cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Córdoba en julio de 2006, con la presencia de Fidel Castro, quien contrastó la situación actual de América Latina con la que había dispuesto la expulsión de Cuba de la OEA en 1959.

Creecer o pagar

Kirchner conservó a Roberto Lavagna como ministro de Economía, reconociendo así los resultados de su gestión durante la presidencia de Duhalde. Lavagna no sólo había evitado el tan temido estallido inflacionario después de la devaluación, también había frenado el alza del dólar, que en mayo de 2003 se cotizaba a 2,79 pesos y cuya tendencia a la baja el Banco Central intentaba desde entonces contener. El fuerte saldo positivo de la balanza comercial – gracias al bajo nivel de las importaciones y al alza del precio internacional de la soja, los cereales y el petróleo– aumentaba la recaudación y permitía transformar el tradicional déficit fiscal en superávit. Aunque lentamente, desde mediados de 2002 la producción industrial había vuelto a crecer.

Pero ese crecimiento chocaba con la necesidad de refinanciar el pago de los

intereses de la deuda externa y, para eso, de llegar a un acuerdo con el FMI. Si se dedicaba la mayor parte del superávit fiscal a cumplir con los acreedores extranjeros, como pretendía esa institución, poco quedaría para las inversiones necesarias para promover la reactivación del mercado interno. Si la economía no crecía, el superávit tampoco lo haría: éste era el círculo vicioso que el gobierno tenía que romper.

El fuerte crecimiento del PIB (8,7 por ciento en 2003) lo llevó a un nivel superior al de 2001, anterior a la devaluación. Aunque al año siguiente volvió a aumentar más de un 8 por ciento, era todavía inferior al de antes de la recesión; recién en 2005 (gracias a un nuevo crecimiento del 8,5 por ciento) superaría levemente al de 1998. Durante más de cuatro años, de marzo de 2002 a fines de 2006, el PIB aumentó un 48 por ciento: fue el periodo más largo de fuerte crecimiento de nuestra historia reciente.

Aunque el motor principal de ese crecimiento eran las exportaciones, impulsadas por el aumento de la demanda y de los precios de los *commodities* en el mercado mundial, también crecía la producción industrial, destinada al mercado interno y financiada con inversiones privadas nacionales. En 2003, la producción industrial aumentó un 16,3 por ciento. Ese aumento se debía en gran medida al crecimiento de la inversión (38 por ciento, compensando lo que había caído en 2002). Al año siguiente, la inversión aumentó aún un 12,6 por ciento y representaba un 18 por ciento del PIB.

Ante la reticencia de los bancos privados, el Banco Nación abrió una línea de

créditos hipotecarios, a la producción (pymes), a la exportación y al consumo, destinados a la reactivación del mercado interno. Todo esto influyó en un nuevo aumento de la producción industrial (10,7 por ciento en 2004, 7,7 por ciento al año siguiente), impulsada sobre todo por el sector automotor (53 por ciento de crecimiento en 2004, 26,7 al año siguiente) que respondía al aumento de la demanda interna (que se duplicó) y externa (México, Chile, Brasil). Desde mediados de 2002, la producción industrial aumentó un 56 por ciento, y a fines de 2005 la utilización de la capacidad instalada total se estimaba en un promedio del 70 por ciento.

Finalmente, el 10 de septiembre de 2003, las largas y duras negociaciones con el FMI culminaron con un acuerdo por tres años, bastante satisfactorio para el gobierno. El acuerdo contemplaba la refinanciación de las deudas con el Fondo, el BM y el BID, sin pagos netos de capital con reservas. Los intereses se pagarían con superávit fiscal, que se fijaba en un 3 por ciento del PIB. No había compromisos en cuanto a las tarifas de las empresas privatizadas ni en cuanto a compensaciones a los bancos por la pesificación asimétrica y las metas fiscales para los años siguientes se dejaban abiertas, supeditadas a la marcha de la economía.

En junio de 2004, el BID anunció un programa de créditos por 5 mil millones de dólares para el período 2004-2008, destinados principalmente al sector social y las infraestructuras. Síntoma de la nueva situación, desde el segundo trimestre de ese año comenzaron a volver al país algunos de los capitales argentinos

fugados al exterior durante la crisis: por primera vez en treinta y tres meses, el movimiento de capitales arrojó un saldo positivo.

La tercera revisión del acuerdo con el FMI se vió dificultada por nuevas exigencias del organismo. Éste pretendía ahora que se mejorara la oferta a los acreedores privados y que se permitiera la revalorización del peso, para que el superávit se tradujera en mayor cantidad de dólares. Pero eso implicaba una baja en la competitividad de las exportaciones sobre las que se basaba el crecimiento de la economía. Las discusiones se suspendieron y la idea de liberarse de la pesada tutela pagando la totalidad de lo adeudado al FMI fue haciendo su camino.

Finalmente, en diciembre de 2005 Kirchner anunció el pago de ese total (9.810 millones de dólares) con las reservas líquidas disponibles del Banco Central. Eso permitiría ahorrar intereses y, en especial, evitar la intromisión de los burócratas del Fondo en la política económica nacional. Así se cerraba un ciclo, iniciado cincuenta años antes, durante el cual la relación con el organismo internacional había ocupado siempre el centro de la escena de la política económica.

Mientras tanto, el gobierno había negociado el canje de la deuda con los acreedores privados, casi veinte veces más importante que la pagada al FMI. Para eso, ofreció una variedad de bonos que combinaban quitas, plazos y tipos de interés. Después de largas negociaciones, en febrero de 2005 la mayoría de los bonistas (el 76 por ciento) había aceptado el canje, y Kirchner pudo

proclamar el fin del *default*. Con las quitas logradas la deuda externa pasó de 191 mil a 125 mil millones de dólares, de un 113 a un 72 por ciento del PIB. Fue uno de los mayores éxitos de la gestión Kirchner-Lavagna.

En febrero de 2004, se autorizó el primer aumento de tarifas, tan reclamado por las empresas privatizadas, los países de origen de sus capitales y el FMI. Esto no impidió que la falta de inversiones y el aumento del consumo desencadenaran una crisis energética en abril, con cortes de agua y electricidad. Un mes después, el gobierno presentó un Plan Energético Quinquenal, que incluía la finalización de las obras hidroeléctricas de Yaciretá; de la central atómica de Atucha II; la construcción de gasoductos y la creación de una empresa nacional: Energía Argentina SA (Enarsa). Esas inversiones serían financiadas con un aumento de las retenciones a la exportación de petróleo crudo, gas natural y licuado y gasolinas.

Esas retenciones (junto con el préstamo del BID) financiarían también el Plan Nacional de Obras Públicas, por unos 10 mil millones de pesos, anunciado en julio, que se centraba en la construcción de viviendas, escuelas y cárceles y que permitiría dar trabajo a numerosos desocupados. En el mismo sentido, un Plan Federal de Construcción de Viviendas contemplaba inversiones públicas por 3.900 millones de pesos para la construcción de 120 mil unidades, creando unos 360 mil puestos de trabajo, directos e indirectos.

El alza del precio del petróleo en el mercado mundial llevó al establecimiento de retenciones móviles: el porcentaje de retención aumentaba en la misma medida

que el precio internacional del crudo. De esa manera, se trataba de evitar el traslado del aumento a los precios internos y el desabastecimiento, incrementando al mismo tiempo la participación del estado en la renta petrolera. Con los mismos objetivos, a fines de 2005 aumentaron las retenciones a la exportación de carnes. Por supuesto, ni las empresas petroleras ni la Sociedad Rural estuvieron de acuerdo con estas medidas.

La deuda interna

La bonanza fiscal y el crecimiento del mercado interno permitieron una recomposición de los salarios y las jubilaciones, desde el bajísimo nivel al que habían caído luego de la devaluación de 2002.

Sucesivos aumentos de la jubilación mínima, que cobraban dos millones de personas, sumaron un 40 por ciento durante el primer año de gobierno de Kirchner. Los que cobraban jubilaciones superiores a la mínima e inferiores a mil pesos –un millón de personas- también recibieron aumentos, los primeros en trece años.

En cuanto al salario mínimo, que repercutía sobre el resto de la pirámide salarial porque constituía el básico de convenio, pasó de doscientos pesos en mayo de 2003 a ochocientos pesos en noviembre de 2006. También recibieron aumentos los estatales de menores ingresos. Esas medidas apuntaban a incrementar la demanda y apoyar la reactivación del mercado interno: en promedio, el poder adquisitivo de los salarios aumentó un 12 por ciento durante

el primer año de gobierno.

Frente a las críticas de los empresarios a los aumentos por decreto, el gobierno decidió resucitar al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, integrado por las principales entidades patronales, la CGT y la CTA, que no se reunía desde 1993 y que se encargaría en adelante de fijar el salario mínimo.

En cuanto a los convenios colectivos, los firmados en 2004 beneficiaban a 1.100.000 trabajadores del sector privado (un 26 por ciento de los declarados) e incluían distintos niveles de aumentos salariales. Al año siguiente, 568 convenios fijaban las remuneraciones de 2.200.000 trabajadores. Estos aumentos permitieron que el salario real promedio del sector privado (en blanco) creciera un 10,3 por ciento en 2004 y un 6,1 por ciento al año siguiente. A fines de ese año equivalía al existente a fines de 2001, antes de la devaluación.

Claro que estas medidas sólo concernían a los trabajadores registrados; en 2004, los no declarados se estimaban en 4,9 millones. Desde entonces, su número disminuyó levemente debido al aumento de la oferta de trabajo declarado y una mayor vigilancia por parte del gobierno (el Ministerio de Trabajo nombró cuatrocientos inspectores, que luego se ampliaron a novecientos, y abrió delegaciones en todo el país). Aun así, a mediados de 2007 los trabajadores “informales” constituían un 40,4 por ciento de los ocupados y su salario promedio seguía representando un 40 por ciento del de los registrados. Además, los trabajadores informales no tenían cobertura médica, asignaciones

familiares, ni cotizaban a la caja de jubilaciones Del 10 por ciento más pobre de la población, el 90 por ciento estaba formado por trabajadores en negro; el resto, por desocupados.

En mayo de 2003, la desocupación afectaba a un 15,6 por ciento de la población activa. Pero ese porcentaje no incluía a los beneficiarios de los Planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que eran en ese momento entre un millón y medio y dos millones, de los cuales sólo un 20 por ciento realizaba una contraprestación laboral. Si se considera a esos planes como un subsidio y no como un trabajo genuino, el porcentaje de desocupados era similar al de mediados de 2002 (21 por ciento). Los subocupados, que trabajaban menos de treinta y cinco horas semanales contra su voluntad, eran unos 2.600.000, el 15,7 por ciento de la población activa a fines de 2003.

El número de trabajadores ocupados, en blanco, creció en forma lenta pero continuada durante tres años consecutivos: 4,3 por ciento en 2003, 6,7 en 2004, 10,1 en 2005, y en septiembre de 2005 superaba al de 2001. La industria manufacturera (22 por ciento) y la construcción (18 por ciento) eran las actividades que más empleos creaban, en especial en el Gran Buenos Aires y el Gran Córdoba. De ese modo, el porcentaje de desocupados sin subsidios bajó a un dígito a fines de 2006 y equivalía al de 1993, anterior a la devastación neoliberal.

Muchos de los empleos creados eran precarios o con muy bajas remuneraciones: a fines de 2003 el salario medio era inferior en un 18 por

ciento al de 2001; también lo era el consumo. A mediados de 2004, los salarios nominales habían aumentado alrededor de un 30 por ciento en un año, pero su poder adquisitivo seguía siendo inferior al de 2001. Recién en 2005, con un aumento promedio del 18,9 por ciento, recuperaron el poder adquisitivo anterior a la devaluación.

En ese momento, el precio de la canasta básica familiar, límite de la pobreza, se calculaba en 770 pesos: sólo los trabajadores declarados tenían la posibilidad de alcanzar ese umbral. En cuanto a la canasta básica alimentaria, límite de la indigencia, estaba alrededor de los 350 pesos. Los índices de pobreza e indigencia, aunque en disminución desde la segunda mitad de 2002 seguían siendo abrumadores: 11 millones de pobres, 4,7 de indigentes en 2003; 6,4 millones de pobres y 2 millones de indigentes en 2006. La mayoría de los pobres eran desocupados o trabajadores en negro. En 2003, en la región Nordeste, los pobres constituían un 64,5 por ciento de la población y los indigentes un 33,9 por ciento; en el Noroeste 60,3 y 26,2. Sólo las provincias patagónicas tenían índices inferiores a la media nacional.

“Ni planes ni palos”

Frente al problema de los desocupados, el gobierno prefirió la creación de empleos a la multiplicación de subsidios de carácter asistencial, que tendían a derivar en clientelismo. Al mismo tiempo, la política de no reprimir la protesta social se mantuvo con esfuerzo y fue duramente criticada por la oposición, pero

permitió el acercamiento de algunas organizaciones piqueteras al gobierno.

La relación entre ambos dependió en gran medida de la disposición al diálogo de las organizaciones sociales y ésta, a su vez, de la orientación ideológica de sus dirigentes y de su vinculación a partidos políticos. Algunas organizaciones mantenían buenas relaciones con el gobierno, como Barrios de Pie y la FTV. Junto con otras, convocaron, en junio de 2004, una Primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, de la que participaron unas treinta organizaciones que apoyaban la política social de Kirchner.

En febrero de 2006, el principal dirigente de la FTV, Luis D'Elía, fue nombrado subsecretario nacional de Tierras para el Hábitat Social; otros militantes ocuparon varias direcciones nacionales o fueron designados funcionarios o asesores en la Secretaría General de la presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social. Pero la colaboración de Luis D'Elía con el gobierno duró poco: en noviembre de ese mismo año, mientras la justicia argentina pedía la captura de altos funcionarios iraníes por su presunta participación en el atentado contra la AMIA, el funcionario (que tenía fluida relación con el embajador de Venezuela) se presentó a la embajada de Irán para expresar su solidaridad y, ante el revuelo que provocó su actitud, se vio obligado a renunciar. Más prudente, Jorge Ceballos, de Barrios de Pie, continuó desempeñándose como subsecretario de Organización y Capacitación Popular en el Ministerio de Desarrollo Social.

En cambio, los sectores duros asumieron muchas veces actitudes violentas. En

febrero de 2004 militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD, dirigido por Raúl Castells) ocuparon el Ministerio de Trabajo durante una semana y el Bloque Piquetero declaró una jornada nacional de protesta, con unos cien cortes de rutas. En junio, el MIJD ocupó nueve McDonald's reclamando libros y leche para comedores escolares. Los cortes de calles se volvieron frecuentes en la ciudad de Buenos Aires. Numerosas voces surgieron entonces reclamando mayor represión, entre ellas la de Duhalde y la del presidente de la UIA, junto con la mayor parte de los medios de comunicación. Esas voces expresaban una reacción que se iba extendiendo en la clase media porteña: los que en 2001 habían gritado "piquete y cacerola, la lucha es una sola", tres años después despotricaban contra "esos negros de mierda que me hacen llegar tarde". En este contexto, la prevención (vallas, numeroso personal policial desarmado, camiones hidrantes) fue el método utilizado para controlar marchas y concentraciones sin tener que lamentar víctimas.

En cuanto al movimiento sindical, a mediados de 2004 se produjo la reunificación de la CGT, que sería dirigida provisoriamente por un triunvirato formado por Hugo Moyano (camionero, de la rama disidente) y dos de los "gordos" –José Luis Lingieri (obras públicas) y Susana Rueda (sanidad): ¡una mujer en la conducción de la CGT!. Kirchner –que hasta entonces no había recibido a los "gordos"- se entrevistó con la nueva conducción. Poco después, recibía también a los dirigentes de la CTA, que contaba con un millón de afiliados, quienes solicitaron el reconocimiento de su personería gremial, a lo

que se oponía la CGT, y no lo consiguieron. Desde julio de 2005, Moyano quedó como secretario general único de la CGT y mantuvo buenas relaciones con el gobierno, lo mismo que la conducción de la CTA, comandada por Víctor De Gennaro (estatal), a quien reemplazó Hugo Yasky (docente) en noviembre de 2006.

En este marco, en 2005 reaparece un fenómeno olvidado desde comienzos de la crisis: los trabajadores del subterráneo porteño inician ¡una huelga! Es el síntoma de un progresivo regreso a cierta normalidad. Telefónicos, docentes y otros gremios tratarán también de recuperar sus salarios sin esperar la ayuda del gobierno. El miedo a la desocupación dejaba de ser paralizante.

“La madre de todas las batallas”

Ni la política de derechos humanos ni la mano de seda con los piqueteros eran bien vistas por quien había sido el principal aliado de Kirchner en la conquista del poder. Cuando Duhalde comenzó a criticar estos y otros aspectos de la política del gobierno, ambos dirigentes se fueron alejando: quienes habían creído que Kirchner sería el “Chiolita” de Duhalde (muñeco de ventrílocuo), pronto tuvieron que desengañarse.

Durante las elecciones de gobernadores de 2003, Kirchner y Duhalde apoyaron a candidatos opuestos en Catamarca y Misiones. También en la ciudad de Buenos Aires el apoyo presidencial fue determinante para el triunfo del jefe de gobierno saliente, Aníbal Ibarra (Frepaso), frente a Mauricio Macri, que contaba

con el sostén del PJ porteño. Fue un ejemplo de la “transversalidad” de la que comenzaba a hablarse, es decir, de la coincidencia alrededor de ciertas candidaturas por encima de los límites partidarios, basada fundamentalmente en la identificación con las políticas del gobierno nacional. El intendente de Córdoba, opuesto a De la Sota, y el de Rosario, socialista, también formaban parte de esta corriente.

En total, nueve gobernadores fueron reelegidos y otros once sucedidos por un candidato del oficialismo local. En la Cámara de Diputados dominaba ampliamente el PJ con 132 bancas (aunque 40 correspondían a la provincia de Buenos Aires y sólo 30 eran kirchneristas seguros); también dominaba el Senado con 41 escaños.

El principio de acuerdo entre Kirchner y Duhalde para promover a la presidencia del PJ al gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, se vio frustrado en octubre por un trágico incidente: dos militantes de la CCC fueron asesinados por la policía en Ledesma (Jujuy), lo cual provocó una violenta pueblada. Fellner recién fue nombrado presidente del PJ en el Congreso Nacional de marzo de 2004. Pero ése fue el Congreso de la discordia: hubo choques entre “Chiche” Duhalde y Cristina Fernández; esta última no pudo hablar entre los abucheos, gritos y acusaciones de “traidores”, “infiltrados”, y terminó diciendo: “No es la primera vez que no me dejan hablar, pero quizá sea la última vez que nos encontramos”. Casi todos los gobernadores renunciaron a los cargos partidarios; lo mismo hizo Fellner. El PJ quedó prácticamente acéfalo.

En junio, lo que produjo el enfrentamiento del PJ bonaerense con Kirchner fueron los reclamos del gobernador Felipe Solá, respaldados por Duhalde, acerca de los fondos de coparticipación de la provincia. Kirchner respondió refiriéndose al obstáculo que representaba “la burocracia política de la provincia de Buenos Aires” para la gobernabilidad del país, mientras estrechaba vínculos con otros gobernadores e intentaba aislar a Duhalde. Al mismo tiempo, comenzaba una campaña de cooptación de intendentes del conurbano.

Desde mediados de 2004, Kirchner y Duhalde pusieron sordina a sus roces. Esto se debía en parte a que los proyectos de transversalidad parecían haber encontrado su límite. En todo caso, no constituían apoyo suficiente para enfrentar a los aparatos provinciales del PJ en las elecciones del año siguiente. Una recomposición de las relaciones con el duhaldismo parecía entonces aconsejable para el presidente; Duhalde, que enfrentaba rebeliones en su propia provincia, también estaba interesado en llegar a un acuerdo.

En este contexto, Solá se alejó de Duhalde, acercándose a Kirchner y, a medida que fracasaban las negociaciones para la presentación de listas únicas, muchos intendentes empezaban a cambiar de bando, pasándose a las filas del presidente. La ruptura se hizo pública con el lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández a senadora por la provincia de Buenos Aires, el 7 de julio. Poco después se lanzó la candidatura de “Chiche” Duhalde, quien invitó a dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante: anticipaba así su alianza con Patti.

Para el gobierno, estas elecciones legislativas no sólo eran la oportunidad de

conseguir una mayoría propia en el Congreso, ahora que no podría contar con el apoyo de los legisladores duhaldistas. Eran vistas también como un plebiscito sobre los dos primeros años de gobierno, y se esperaba que confirmaran los altos índices de aprobación que revelaban las encuestas.

La coalición oficialista, Frente para la Victoria (FpV), destacaba entonces los principales logros de la gestión presidencial: crecimiento de la economía, disminución del paro, mejoramiento de salarios y jubilaciones, firmeza en la negociación de la deuda externa. La oposición, por su parte, no dejaba de señalar el autoritarismo del presidente y su “sobreactuación”, que llevaban a la “crispación” de la vida política, así como la falta de diálogo con la oposición, la interferencia de la interna justicialista en los asuntos del estado, la tendencia a la hegemonía peronista. Desde la derecha, se le reprochaba la inseguridad ciudadana, el caos provocado en el centro de Buenos Aires por las frecuentes manifestaciones y piquetes, una demagogia salarial que había despertado la inflación. Desde la izquierda, se señalaba la falta de una verdadera política de redistribución del ingreso, con la perpetuación de las desigualdades e injusticias de siempre.

Los distritos claves en esta elección eran la ciudad y la provincia de Buenos Aires, tanto por la cantidad de legisladores que les correspondía como por su valor simbólico. En la ciudad se enfrentaban los principales representantes de la oposición centro-izquierdista, Elisa Carrió y de la derecha, Mauricio Macri, con un miembro prominente del gobierno, Rafael Bielsa: las encuestas los ponían

en un pie de igualdad. En la provincia, eran las dos líneas principales del peronismo (kirchnerista y duhaldista) las que se disputaban las bancas en el Senado; pero también el otro líder de la derecha, López Murphy, probaba allí sus fuerzas.

En las provincias del interior, Kirchner practicaba lo que se llamó “transversalidad desde arriba”, buscando alianzas con caudillos locales peronistas, radicales o de partidos provinciales, sin dar mucha importancia a las afinidades ideológicas y menos aún a las trayectorias o las cualidades éticas de los aliados. Se trataba, simplemente, de los gobernadores “con los que se puede hablar”. La diferencia entre la *nueva política* postulada por el presidente y la antigua parecía cada vez más desdibujada; el objetivo de ganar las elecciones oscurecía cualquier otra motivación.

El 23 de octubre de 2005 el FpV, con sus diversos aliados, ganó en casi todos los distritos, salvo la ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo la mayoría el Pro de Mauricio Macri, y las provincias de Santa Fe, donde triunfó el Frente Progresista del socialista Hermes Binner, y Neuquén, donde se impuso el Movimiento Popular Neuquino de Jorge Sobisch. El FpV consiguió así un 54 por ciento de las bancas en juego, pero no alcanzó las necesarias para tener quórum propio en Diputados.

Algunos impresentables perdieron en sus respectivas provincias: Menem en La Rioja, que sólo obtuvo un escaño por la minoría, y Bussi en Tucumán. La Cámara de Diputados rechazó la incorporación de Patti (que integraba la lista

del PJ bonaerense), por “falta de idoneidad moral”, pero el Senado aceptó la de Menem, que conseguía así la inmunidad parlamentaria hasta que prescribieran los numerosos procesos que se le habían abierto. Alfonsín desistió de presentar su candidatura a la presidencia del Comité Nacional de la UCR (partido que obtuvo un 14 por ciento de los votos allí donde se presentó solo), pero no dejó de reaparecer al año siguiente lanzando la candidatura de Lavagna a la presidencia. En la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández se impuso con una diferencia de 26 puntos sobre “Chiche” Duhalde (46 por ciento obtuvo la primera y 20 por ciento la segunda). Los Kirchner volaban ya con sus propias alas.

EPÍLOGO

Como lo indica su título, este relato se detiene en 2005. Aunque el corte es tan arbitrario como cualquier otro, no por eso carece de justificación. Al promediar su mandato presidencial, Kirchner se había consolidado en el poder, alcanzando un grado de legitimidad que las circunstancias de su elección no permitían prever. Las grandes líneas de su política económica, social, internacional y de derechos humanos estaban trazadas y nada indicaba que fueran a cambiar en lo inmediato. La probable elección de Cristina Fernández como su sucesora invitaba a pensar más en la continuidad que en el cambio.

Sin embargo, algunas dudas asomaban en el horizonte. El éxito de la política económica de Kirchner y Lavagna se debió, sin duda, a medidas acertadas, como el mantenimiento del valor del peso a un nivel competitivo, pero también a una coyuntura muy favorable de la economía mundial. Si, por alguna razón por el momento imprevisible, ésta cambiara –por ejemplo, si cayeran la demanda y los precios de los *commodities* que exportamos-, ¿qué factor reemplazaría al comercio exterior como motor del crecimiento? ¿Puede éste basarse indefinidamente sobre la exportación de soja, cereales, petróleo y minerales? Recordemos lo que le pasó a la Argentina agro-exportadora, tan bien adaptada al mercado mundial, cuando éste cambió brutalmente en los años 30.

Nadie puede objetar que se aproveche la coyuntura para crecer, reducir

deudas, distribuir una parte del superávit fiscal, invertir otra. Pero ¿acumular reservas es suficiente para prevenir los golpes que podrían venir del exterior? Por otra parte ¿hay alguna proyección de la política económica que vaya más allá del corto plazo? ¿El grupo gobernante, ha presentado alguna propuesta seria acerca del modelo de país que se quiere construir a mediano o largo plazo?

Una alternativa al crecimiento basado en la expansión del sector externo debería pasar necesariamente por la ampliación del mercado interno. También en este caso la política económica del gobierno ha contribuido considerablemente a estimularlo: inversiones públicas, créditos a las pymes, aumento del poder adquisitivo de asalariados y jubilados... Pero una gran parte de la población sigue reducida a un nivel de subsistencia que hace poco relevante su consumo.

La disminución del número de desocupados y de trabajadores en negro –y, por lo tanto, de pobres e indigentes- fue otro logro del gobierno kirchnerista. Consecuencia principalmente del crecimiento de la economía –y el consiguiente “derrame”- fue favorecida también por los sucesivos aumentos del salario mínimo, las jubilaciones y otros ingresos. Sin embargo, algunas cifras siguen siendo intolerables: ¿puede un país “serio”, como el que postula Kirchner, tener un 40 por ciento de asalariados trabajando en negro? ¿Puede la Argentina tener casi un tercio de su población por debajo del umbral de la pobreza? Si la deuda externa fue en gran parte reembolsada o canjeada, la deuda social sigue

esperando.

La redistribución de la riqueza, frecuentemente aludida en el discurso presidencial, no ha ido hasta ahora mucho más allá de lo permitido por el excedente fiscal, con el aumento de las jubilaciones y de salarios pagados por el estado. No se habla, en cambio, de reformar el sistema tributario, uno de los más regresivos del mundo, que al basarse esencialmente en el IVA –que pagan todos por igual- hace que los que más tienen sean proporcionalmente quienes menos pagan y viceversa. En tanto, las retenciones sobre las superganancias de los exportadores, que permiten al estado –y a través de él a la sociedad- participar en los beneficios de la coyuntura del comercio internacional, son fuertemente resistidas por los principales beneficiarios de esa renta extraordinaria.

En el terreno político, la llamada “convergencia plural” no parece avanzar hacia una alianza estable y duradera, basada en afinidades ideológicas y coincidencias programáticas. Toda la actividad política parece limitarse a acuerdos electorales de corto plazo, más o menos efímeros, que giran alrededor del liderazgo personal del presidente. Tampoco es posible prever las consecuencias de la reorganización del PJ: ¿dejará de ser una confederación de gobernadores y caudillos regionales para transformarse en un partido orgánico, democráticamente organizado, que elabore proyectos a mediano y largo plazo?

En cuanto a la limpieza de las fuerzas de seguridad, iniciada con tanta energía

en los primeros meses de gobierno, ya ha comenzado a mostrar sus limitaciones. El caso de Jorge Julio López, que más de un año después de su desaparición no ha sido resuelto, revela a las claras que la depuración de los servicios de informaciones y seguridad ha sido, por lo menos, incompleta. Elementos de esas instituciones han contribuido a asegurar la impunidad de los secuestradores, poniendo en peligro a los testigos de los juicios por violación de derechos humanos.

Esos juicios avanzan con una lentitud exasperante y cada vez son más los represores que mueren tranquilamente en su casa sin haber sido condenados. Ni la Corte Suprema ni el Consejo de la Magistratura han hecho gran cosa para combatir esta resistencia pasiva de la corporación judicial.

Frente a las insuficiencias y debilidades del gobierno, la oposición, fragmentada, se limita a ofrecer una crítica sistemáticamente negativa de todos y cada uno de sus actos. En cambio, no propone alternativas viables capaces de disputar la hegemonía que atribuye al gobierno. De modo que, de no cambiar estas circunstancias, el modelo armado por los Kirchner podría terminar un segundo periodo, sin que se pueda aventurar qué pasará en 2011.

ANEXOS

Abreviaturas

ACIEL	Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres
AMIA	Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas
AOT	Asociación Obrera Textil
APDH	Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
APEGE	Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias
ARI	Alternativa por una República de Iguales
CdeO	Comando de Organización
CEAL	Centro Editor de América Latina
CEE	Comunidad Económica Europea
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CGE	Confederación General Económica
CGT	Confederación General del Trabajo
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Conadep	Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
Conintes	Conmoción interior del Estado
CNU	Concentración Nacional Universitaria
CTA	Central de Trabajadores Argentinos
ERP	Ejército Revolucionario del Pueblo
ESMA	Escuela Superior de Mecánica de la Armada
FAL	Fuerzas Armadas de Liberación
FAP	Fuerzas Armadas Peronistas
FAR	Fuerzas Armadas Revolucionarias
FCE	Fondo de Cultura Económica
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOTIA	Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera
Fredejuso	Frente por la Democracia y la Justicia Social
Frecilina	Frente Cívico de Liberación Nacional
Frejuli	Frente Justicialista de Liberación
Frepaso	Frente País Solidario
GAN	Gran Acuerdo Nacional
IVA	Impuesto al valor añadido

JP	Juventud Peronista
JSP	Juventud Sindical Peronista
JTP	Juventud Trabajadora Peronista
JUP	Juventud Universitaria Peronista
MID	Movimiento de Integración y Desarrollo
MON	Movimiento de Opinión Nacional
MTA	Movimiento de los Trabajadores Argentinos
OEA	Organización de Estados Americanos
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PC	Partido Comunista
PCP	Partido Conservador Popular
PCR	Partido Comunista Revolucionario
PD	Partido Demócrata
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PDP	Partido Demócrata Progresista
PEN	Poder Ejecutivo Nacional
PI	Partido Intransigente

PIB	Producto interior bruto
PJ	Partido Justicialista
PP	Partido Peronista
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PS	Partido Socialista
PSA	Partido Socialista Argentino
PSD	Partido Socialista Democrático
PSP	Partido Socialista Popular
SIDE	Secretaría de Informaciones del Estado
SMATA	Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor
SRA	Sociedad Rural Argentina
Triple A	Alianza Anticomunista Argentina
Ucedé	Unión del Centro Democrático
UCR	Unión Cívica Radical
UCRI	Unión Cívica Radical Intransigente
UCRP	Unión Cívica Radical del Pueblo
Udelpa	Unión del Pueblo Argentino
UES	Unión de Estudiantes Secundarios

UF	Unión Federal (partido) o Unión Ferroviaria (sindicato)
UIA	Unión Industrial Argentina
UOM	Unión Obrera Metalúrgica
UP	Unión Popular
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

PRESIDENCIAS

CONSTITUCIONALES

DE FACTO

PROVISORIAS

1955	23 sept.		Eduardo Lonardi
	13 nov.		Pedro E. Aramburu
1958	1º mayo	Arturo Frondizi	
1962	24 marzo		José M. Guido
1963	12 oct.	Arturo U. Illia	
1966	28 jun.		Juan Carlos Onganía
1970	8 jun.		Roberto Levingston
1971	23 marzo		Alejandro A. Lanusse
1973	25 mayo	Héctor J. Cámpora	
	13 jul.		Raúl Lastiri
	12 oct.	Juan D. Perón	

1974	1º jul.	M.E.Martínez de Perón	
1976	24 marzo		Jorge R. Videla
1981	28 marzo		Roberto Viola
	11 dic.		Leopoldo F. Galtieri
1982	1º jul.		Reynaldo Bignone
1983	10 dic.	Raúl Alfonsín	
1989	8 jul.	Carlos S. Menem	
1999	1º dic.	Fernando de la Rúa	
2001	20 dic.		Ramón Puerta
	22 dic.		A. Rodríguez Saá
	31 dic.		Eduardo Camaño
2002	1º en.		Eduardo Duhalde
2003	25 mayo	Néstor Kirchner	

CRONOLOGÍA

1955	<i>sept.</i>	16	Levantamiento dirigido por el gral. Eduardo Lonardi
		23	Lonardi asume la presidencia provisional
	<i>nov.</i>	13	Deposición de Lonardi. El gral Pedro Eugenio Aramburu le sucede
1956	<i>jun.</i>	9	Sublevación de oficiales y suboficiales peronistas dirigidos por el gral. (R) Juan José Valle. Fusilamientos de civiles y militares
	<i>nov.</i>		Reunión de la Convención Nacional de la UCR. Proclamación de la fórmula Arturo Frondizi – Alejandro Gómez . División del partido : UCR Intransigente (Frondizi) y UCR del Pueblo (Balbín)
1957	<i>sept.</i>		Formación de las 62 organizaciones peronistas
	<i>dic.</i>		Convocatoria a elecciones. Negociaciones Perón – Frondizi
1958	<i>feb</i>	23	Elecciones presidenciales.
	<i>mayo</i>	1º	Asunción de Frondizi como presidente constitucional Ley de Asociaciones Profesionales
	<i>nov.</i>		Renuncia del vicepresidente Gómez
1959	<i>jun</i>		Álvaro Alsogaray ministro de economía
	<i>ag.</i>		Aparición del grupo guerrillero Uturuncos en los montes tucumanos
1960	<i>marzo</i>		Plan de conmoción interna del Estado (CONINTES)
1961	<i>feb.</i>	1º	Elección de Alfredo Palacios como senador nacional por la ciudad de Buenos Aires

1962	marzo	18	Elecciones legislativas y de gobernadores
		19	Intervención de las provincias donde triunfó el peronismo
		29	Deposición de Frondizi. José María Guido, presidente provisional del Senado, asume la presidencia de la Nación.
	abr.		Enfrentamientos entre militares: azules y colorados
	sept.	23	Los colorados se rinden ante los azules, comandados por el gral. Juan Carlos Onganía
1963	jul.	7	Elecciones presidenciales
	oct.	12	Asunción de Arturo Illia como presidente constitucional
1964	dic.	2	Operación Retorno
1965	dic.		El tte. gral. Pascual Pistarini reemplaza a Onganía como comandante en jefe del ejército.
1966	jun.	28	Derrocamiento de Illia. Onganía presidente <i>de facto</i> . Acta de la Revolución Argentina.
	jul.	2	Disolución de los partidos políticos
1968	marzo	30	Elección de Raimundo Ongaro como secretario general de la CGT. División de la CGT: Azopardo (Augusto T. Vandor) y CGT de los Argentinos (Ongaro)
	ag.	23	Alejandro A. Lanusse reemplaza a Julio Alsogaray como comandante en jefe del ejército
	sept.		Desbaratamiento de un grupo guerrillero en Taco Ralo.
1969	mayo		Manifestaciones estudiantiles de protesta
		29	Cordobazo

	<i>jun</i>	30	Asesinato de Vandor
1970	<i>en.</i>	3	Aparición pública de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)
	<i>mayo</i>	29	Secuestro de Aramburu: aparición pública de Montoneros
	<i>jun</i>	8	Deposición de Onganía. Lo reemplaza Roberto G. Levingston
	<i>jul</i>	4	José Rucci elegido secretario general de la CGT El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) crea su brazo armado: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
	<i>ag</i>	22	Asesinato del dirigente sindical José Alonso
	<i>sept</i>	16	Aniversario del golpe de 1955: 23 atentados con bombas
	<i>nov</i>	11	Seis partidos suscriben "La hora del pueblo"
	<i>dic</i>	15	Aparición pública de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
1971	<i>marzo</i>		Viborazo en Córdoba
		23	Renuncia de Levingston. Lo sucede A. Lanusse
	<i>abr</i>	1º	Levantamiento de la veda a los partidos políticos.
	<i>jul.</i>	1º	Ley Orgánica de los partidos políticos
	<i>sept</i>	3	Se hace pública la devolución de los restos de Eva Perón a su marido.
		17	Convocatoria a elecciones
	<i>dic</i>		María Estela Martínez de Perón ("Isabel") en Argentina.
1972	<i>marzo</i>		Secuestro del director general de FIAT por el ERP
	<i>ag</i>	15	Fuga de presos políticos del penal de Rawson

		22	Asesinato de 16 presos recuperados en Trelew.
	<i>nov</i>	17	Retorno de Perón a la Argentina
	<i>dic</i>	12	Formación del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). Candidatura de Héctor J. Cámpora – Vicente Solano Lima
1973	<i>marzo</i>	11	Elecciones presidenciales
	<i>mayo</i>	25	Asunción de Cámpora como presidente constitucional.
	<i>jun</i>	20	Regreso definitivo de Perón. Enfrentamientos armados entre grupos peronistas en Ezeiza.
	<i>jul</i>	13	Renuncia de Cámpora y Solano Lima Raúl Lastiri (presidente de la Cámara de Diputados) asume la presidencia.
	<i>ag</i>	11	Fórmula presidencial Perón-Perón
	<i>sept</i>	23	Asesinato de Rucci
	<i>oct</i>	12	Asunción de Perón como presidente constitucional
1974	<i>en</i>		Renuncia de Oscar Bidegain (gobernador de Buenos Aires) y Ricardo Obregón Cano (gob. de Córdoba)
	<i>mayo</i>	1º	Enfrentamiento entre los montoneros y Perón en la Plaza de Mayo.
	<i>jul.</i>	1º	Muerte de Perón. “Isabel” asume la presidencia
1975	<i>feb</i>		Operativo Independencia contra la guetilla del ERP en Tucumán.
	<i>jun</i>	5	Rodrigazo
	<i>jul.</i>	11	José López Rega renuncia al ministerio de Bienestar

		Social y abandona el país
	<i>dic</i>	23 Ataque del ERP al cuartel de Monte Chingolo
1976	<i>marzo</i>	24 Deposición de "Isabel" Perón. La Junta de comandantes en jefe designa a Jorge Rafael Videla presidente <i>de facto</i> Estatutos del Proceso de reorganización nacional
	<i>abr</i>	2 Plan económico de José Martínez de Hoz
	<i>sept</i>	16 Secuestro de estudiantes: la "noche de los lápices"
	<i>nov.</i>	Elección de James Carter en EE.UU.: nueva política de derechos humanos
1977	<i>mayo</i>	2 Fallo arbitral sobre el diferendo con Chile por el canal de Beagle
	<i>dic</i>	Primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
1978	<i>en</i>	25 El gobierno rechaza el fallo arbitral. Tensión con Chile
	<i>jul.</i>	Roberto Viola comandante en jefe del ejército
1979	<i>en</i>	El problema del Besgle es sometido a la mediación papal
	<i>sept</i>	6 Visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1980	<i>dic</i>	12 Saúl Ubaldini secretario general de la CGT
1981	<i>marzo</i>	29 Viola reemplaza a Videla en la presidencia
	<i>jun</i>	Los principales partidos políticos forman la Multipartidaria
	<i>dic</i>	11 Viola es reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri como comandante en jefe del ejército y presidente <i>de facto</i>
1982	<i>marzo</i>	30 Movilización de la CGT en la Plaza de Mayo
	<i>abr</i>	2 Ocupación de las islas Malvinas por el ejército

		argentino
	<i>mayo</i>	División de la CGT: Azopardo y Brasil (Ubal dini)
	<i>jun</i>	Visita del papa Juan Pablo II
		14 Las tropas argentinas se rinden a las británicas en Malvinas.
		Renuncia de Galtieri
	<i>jul</i>	1º Reynaldo Bignone asume como presidente <i>de facto</i> . Convocatoria a elecciones.
	<i>dic</i>	16 Marcha de la Multipartidaria
1983	<i>jul</i>	La Convención nacional de la UCR proclama la fórmula Raúl Alfonsín – Víctor Martínez
	<i>sept</i>	. El Congreso nacional justicialista proclama la fórmula
		4 Ítalo Luder - Deolindo Bitel
	<i>oct</i>	30 Elecciones generales
	<i>dic</i>	10 Asunción de Alfonsín como presidente constitucional
		15 Creación de la Comisión nacional sobre la desaparición de personas (CONADEP)
1984	<i>en.</i>	Unificación de la CGT
	<i>nov.</i>	25 Consulta popular no vinculante sobre el Beagle
1985	<i>abr</i>	22 Comienzo del juicio a los miembros de las juntas militares
	<i>sept</i>	Normalización de la CGT: Saúl Ubal dini secretario general
	<i>nov</i>	Hiperinflación: 385%
1986	<i>abr</i>	Anuncio de la intención de trasladar le capital federal a Viedma .
		Carmen de Patagones
	<i>dic</i>	23 Ley de Punto Final

1987	<i>abr</i>		Rebelión militar encabezada por el tte. cnel. Aldo Rico (semana santa)
	<i>jun</i>	4	Ley de obediencia debida
	<i>sept</i>	6	Elecciones legislativas y de gobernadores: triunfo del PJ en Buenos Aires y otras provincias
1988	<i>en</i>	16	Nuevasublevación de Aldo Rico en Monte Caseros
	<i>jul</i>	9	Proclamación de la fórmula Carlos S. Menem – Eduardo Duhalde por el PJ
	<i>dic</i>	3	Sublevación del cnel. Mohamed Alí Seineldín en Campo de Mayo
1989	<i>en.</i>	23	Ataque al cuartel de La Tablada por el movimiento Todos por la Patria.
	<i>feb</i>	7	Fuerte devaluación del peso: pánico y corridas (“golpe de mercado”)
	<i>mayo</i>	14	Elecciones presidenciales
		19	Saqueos y asaltos a supermercados en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
	<i>jun.</i>		Hiperinflación: 200%
	<i>jul.</i>	1º	Renuncia de Alfonsín y Martínez
		8	Asunción de Menem como presidente consstitucional
	<i>dic.</i>		Indulto presidencial a 280 militares y civiles acusados de violación de derechos humanos durante la dictadura y de sublevación contra el gobierno de Alfonsín.
1990	<i>en.-marzo</i>		Hiperinflación : 230%
	<i>abr.</i>	5	Ampliación de la Corte Suprema de cinco a nueve miembros
	<i>ag.-sept.</i>		Leyes de reforma del Estado y de emergencia

		económica
	<i>nov</i>	Desnacionalización de Aerolíneas Argentinas (comprada por Iberia)
	<i>dic</i>	3 Nuevo levantamiento militar dirigido por Seineldín
		29 Indulto a los jefes militares de la dictadura y al dirigente montonero Mario E. Firmenich
1991	<i>en</i>	Domingo Cavallo ministro de economía
	<i>marzo</i>	26 Acuerdo de Asunción sobre el Mercosur
		27 Convertibilidad
	<i>dic</i>	5 Duhalde renuncia a la vicepresidencia
1992	<i>marzo</i>	17 Atentado contra la embajada de Israel
1993	<i>nov</i>	Pacto de Olivos (Menem y Alfonsín) sobre reforma de la constitución.
	<i>dic</i>	Movimientos de protesta en Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy
1994	<i>mayo</i>	25 Reunión de la Convención Constituyente en Santa Fe
	<i>jun.</i>	6 Marcha Federal organizada por la Mesa de Enlace Sindical : Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) y Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA)
	<i>Jul.</i>	18 Bomba en la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA)
	<i>ag</i>	22 Sanción de la reforma constitucional
1995	<i>en.</i>	1º Puesta en marcha del Mercosur
	<i>mayo</i>	14 Elecciones presidenciales
	<i>jun</i>	Movimientos de protesta en Córdoba
	<i>jul.</i>	8 Menem asume su segundo periodo presidencial
	<i>sept.</i>	Movimientos de protesta en Río Negro

1996	<i>jun.</i>	30	Fernando de la Rúa elegido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
	<i>jul.</i>	26	Renuncia de Cavallo
	<i>ag.</i>	8	Paro general (CGT, CTA y MTA) contra el modelo neo-liberal
	<i>oct.</i>	1º	Estatuto de la ciudad autónoma de Buenos Aires
	<i>dic.</i>		17,5% de desocupados
1997	<i>abr</i>		.Movimientos de protesta en Neuquén (Cutral-Có , Plaza Huincul): primeros piquetes
	<i>ag.</i>		La UCR y el Frente País Solidario (Frepaso) forman la Alianza por el trabajo, la justicia y la educación.
1998	<i>jul.</i>	17	El congreso justicialista gestiona ante la justicia la autorización para la re-reelección. Oposición dentro y fuera del partido.
		21	Menem desiste de la re-reelección
	<i>nov</i>	29	La Alianza elige la fórmula De la Rúa – Carlos “Chacho” Álvarez como candidatos apresidente y vice
1999	<i>oct</i>	24	Elecciones presidenciales
	<i>dic.</i>	1º	De la Rúa asume como presidente constitucional.
		3	Ley de reforma tributaria: “impuestazo”
2000	<i>en</i>	29	Acuerdo con el FMI
	<i>feb</i>	22	División de la CGT: Rodolfo Daer – Hugo Moyano
	<i>mayo</i>	7	Aníbal Ibarra (Alianza) elegido jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
		29	Anuncio de un programa de ajustes fiscales y reestructuración del Estado

		31	Marcha opositora contra el ajuste
	<i>jun.</i>	9	Paro general. Protestas: marchas, piquetes
	<i>ag</i>		Escándalo de los sobornos en el Senado
	<i>oct</i>	6	. Renuncia de Álvarez a la vicepresidencia
2001	<i>marzo</i>	2	Ricardo López Murphy ministro de economía Fuertes reacciones contra sus anuncios. Debe dimitir Cavallo ministro de economía
	<i>jun</i>	1º	“Megacanje” de títulos de la deuda
	<i>jul.</i>		Aumento del riesgo-país. Caída de los valores en la Bolsa
	<i>oct.</i>	14	Elecciones legislativas: fuerte por entaje de votos en blanco y nulos (“voto bronca”)
	<i>dic</i>	1º	Tope al retiro de efectivo de las cuentas bancarias (“corralito”) Paro general contra la política económica Saqueos de comercios en el Gran Buenos Aires Estado de sitio. Cacerolazos: “Que se vayan todos”
		20	Renuncia de De la Rúa
		22	La Asamblea Legislativa designa presidente provisional a Adolfo Rodríguez Saá
		24	Anuncio de la suspensión de pagos de la deuda externa
		28	Cacerolazos
		30	Renuncia de Rodríguez Saá
2002	<i>en</i>	1º	La Asamblea Legislativa designa presidente a Eduardo Duhalde Fin de la convertibilidad. Fuerte devaluación del peso
		25	Cacerolazo en todo el país

	<i>abr</i>	27	Roberto Lavagna ministro de economía
	<i>jun</i>	26	Represión de piqueteros en Puente Pueyrredón: 2 muertos
	<i>jul</i>	2	Convocatoria a elecciones presidenciales
2003	<i>en</i>		Alianza de Néstor Kirchner con Duhalde
	<i>abr</i>	27	Elecciones generales
	<i>mayo</i>	14	Menem anuncia que no se presentará a la segunda vuelta
		25	Kirchner asume como presidente constitucional
		27	Pase a retiro de las cúpulas militares
	<i>jun</i>	27	Renuncia del presidente de la Corte Suprema
	<i>jul</i>	25	Derogación del decreto que se oponía a la extradición en las causas por violación de derechos humanos
	<i>sept.</i>	2	El Congreso anula las leyes de punto final y obediencia debida
	<i>oct.-nov.</i>		Triunfo del oficialismo en casi todas las elecciones provinciales
2004	<i>marzo</i>	29	Acto en la ESMA, transformada en Museo de la Memoria
	<i>dic</i>		Cierre del año con superávit en las cuentas nacionales y provinciales.
2005	<i>jun</i>	14	La Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida
	<i>jul.</i>		Ruptura de la alianza Kirchner-Duhalde
	<i>oct</i>	23	Triunfo del oficialista Frente para la Victoria en la mayoría de los distritos

BIBLIOGRAFÍA

Introducción

- Altamirano, Carlos. *Bajo el signo de las masas. 1943-73*. Buenos Aires (en adelante B.A.) Ariel. 2001
- Altamirano, Carlos; Caparrós, Martín y otros. *La izquierda en la Argentina*. B.A., Fondo de Cultura Económica (en adelante FCE). 1998
- Cavarozzi, Marcelo. *Autoritarismo y democracia*. B.A. Ariel. 2ª ed. 2006
- Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas. *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*. B.A. Ariel. 2ª ed. 2005
- INDEC. *Información sobre la evolución de la pobreza y de la indigencia en la Argentina*. B.A. 2002
- James, Daniel. *Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera. 1946-76*. B.A. Sudamericana. 1990
- Romero, Luis Alberto. *Breve historia contemporánea de la Argentina*. B.A., F.C.E., 2ª ed. 2001
- Rouquié, Alain. *Poder militar y sociedad política en Argentina. II. 1943-73*. B.A. Emecé. 1994

- Sidicaro, Ricardo. *Los tres peronismos. Estado y poder económico. 1946-55/ 1973-76/ 1989-99*. B.A. Siglo XXI. 2002
- Sigal, Silvia. *Intelectuales y poder político en Argentina. La década del 60*. B.A. Siglo XXI. 2002
- Torrado, Susana. *Estructura social de la Argentina*. B.A. Ed. de la Flor. 1992

1.1.

- Baschetti, Roberto. *Documentos de la resistencia peronista. 1955-70*. B.A. Puntosur. 1990
- Fraga, Manuel y Pandolfi, Rodolfo. *Aramburu. La biografía*. B.A. Vergara. 2005
- González Crespo, Jorge. *Memorias del almirante Isaac F. Rojas. Conversaciones*. B.A. Planeta. 1993
- Rodríguez Lamas, Daniel. *La Revolución Libertadora*. B.A., Centro Editor de América Latina (en adelante CEAL). 1985
- Spinelli, María Estela. *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la "revolución libertadora"*. B.A. Biblos. 2005

1.2.

- Altamirano, Carlos. *Arturo Frondizi, o el hombre de ideas como político*. B.A., F.C.E. 1998
- Fraga, Manuel. *El ejército y Frondizi (1958-62)*. B.A. Emecé. 1992
- Gambini, Hugo. *Frondizi. El estadista acorralado*. B.A. Vergara. 2006
- Rodríguez Lamas, Daniel. *La presidencia de Frondizi*. B.A., CEAL. 1984
- Smulovitz, Catalina. *Oposición y gobierno: los años de Frondizi*. B.A., CEAL . (2 vol.). 1988
- Szusterman, Celia. *Frondizi. La política del desconcierto*. B.A. Emecé. 1998
- Acosta, Maria Elena. *Gobierno y oposición en el Congreso durante la presidencia de Illia. (1963-66)*. B.A. Instituto Di Tella. 1999
- Sánchez, Pedro. *La presidencia de Illia*. B.A., CEAL. 1983
- Tcach, César y Rodríguez, Celso. *Arturo Illia: un sueño breve. El rol del peronismo y de los EE.UU. en el golpe militar de 1966*. B.A. Edhasa. 2006

1.3.

- Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín. *La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en Argentina*. B.A. Norma. 1997/98 (3 vol.)

- Ballvé, Beba y Beatriz. *El 69. Huelga política de masas. Rosariazo-Cordobazo- Rosariazo*. B.A. Contrapunto. 1989
- Botana, Natalio; Floria, Carlos y Bruno, Rafael. *El régimen militar (1966.72)*. B.A. La Bastilla. 1973
- Brennan, James. *El cordobazo.Las guerras obreras en Córdoba. (1955-76)*. B.A. Sudamericana. 1996
- Calveiro, Pilar. *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70 .*
B.A. Norma. 2005
- De Riz, Liliana. *La política en suspenso. 1966-76*. B.A. Paidós. 2000
- De Santis. Daniel. *A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos*. B.A. Eudeba.2000
- O'Donnell. *El Estado burocrático autoritario (1966-73)*. B.A. Ed. de Belgrano.1982
- Zamorano, Eduardo. *Peronistas revolucionarios. Un análisis político del apogeo y crisis de la organización Montoneros*. B.A. Distal. 2005

1.4.

- Bonasso, Miguel Angel. *El presidente que no fue. Los archivos ocultos del*

peronismo. B.A. Planeta. 1997

- Di Tella, Guido. *Perón-Perón. 1973-76*. B.A. Sudamericana. 1983

- Larraquy, Marcelo. *López Rega. La biografía*. B.A. Planeta. 2004

- Plis-Sterenbergh, Gustavo. *Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina*. B.A. Planeta. 2003

- Sáenz Quesada, María. *Isabel Perón. La Argentina en los años de María Estela Martínez*. B.A. Planeta. 2003

- Tcach, César (comp.). *La política en consignas. Memoria de los setenta*. Rosario. Homo Sapiens. 2003

- Torre, Juan Carlos. *Los sindicatos en el gobierno peronista. 1973-76*. B.A. CEAL. 1993

1.5.

- Abós, Alvaro. *Las organizaciones sindicales y el poder militar. 1976-83*. B.A. CEAL. 1984

- CONADEP. *Nunca más*. B.A. Eudeba. 7ª ed. 2006

- Duhalde, Eduardo Luis. *El Estado terrorista argentina*. B.A. Argos/Vergara. 1999

- Mignone, Emilio F. *Iglesia y dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de sus*

relaciones con el régimen militar. B.A. Univ. Nac. de Quilmes/ Página 12. 1999

- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. *La dictadura militar. 1976-82. Del golpe a la restauración democrática*. B.A. Paidós. 2003

- Pucciarelli, Alfredo (coord.). *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*. B.A. Siglo XXI. 2004

- Quiroga, Hugo. *El tiempo del "Proceso". Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983*. Rosario. Fundación Ross-Homo Sapiens. 2ª ed. 2004

- Verbitsky, Horacio. *La Argentina católica y militar*. B.A. Sudamericana. 2006

- Vezzetti, Hugo. *Pasado y Presente: guerra, dictadura y sociedad en Argentina*. B.A. Siglo XXI. 2002

2.1.

- Acuña, Marcelo Luis. *Alfonsín y el poder económico. El fracaso de la concertación y los pactos corporativos entre 1983 y 1989*. B.A. Corregidor. 1995

- Grinspun, Bernardo. *La evolución de la economía argentina desde diciembre de 1983 a septiembre de 1989*. B.A. Ed Judiciales. 1989

- Majul, Luis. *Por qué cayó Alfonsín. El nuevo terrorismo económico*. B.A.

Sudamericana. 1990

- Massum, Ignacio. *Alfonsín. Una difícil transición*. B.A. Métodos. 1999

- Melo, Artemio. *El gobierno de Alfonsín. La instauración democrática argentina*. Rosario. Homo sapiens. 1995

- Nino, Carlos S.. *Juicio al mal absoluto. Prólogo de R. Alfonsín*. B.A. Ariel. 2006

- Nun, José y Portantiero, Juan Carlos (comp.). *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*. B.A. Puntosur. 1987

2.2..

- Alaniz, Rogelio. *La década menemista*. Santa Fe. Univ. Nac. del Litoral . 2000

- Basualdo, Eduardo M. *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del 90*. Univ. Nac. de Quilmes! FLACSO/ IDEP. 2000

- Margheritis, Ana. *Ajuste y reforma en Argentina . 1989=1995*. Nuevo hacer= Grupo

editor latinoamericano. 1999

- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. *Política y poder en el gobierno de*

Menem. B. A. Norma. 1996

- Portantiero, Juan Carlos y otros. *Peronismo y menemismo. Avatares del populismo en Argentina*. B.A. El cielo por asalto. 1995
- Quiroga, Hugo. *La democracia que tenemos. Ensayo político sobre la Argentina actual*. Rosario. Homo Sapiens. 1995
- Quiroga, Hugo y Tcach, César (comp.). *A 20 años del golpe. Con memoria democrática*. Rosario. Homo Sapiens. 1995
- Senén González, Santiago. *El sindicalismo en tiempo de Menem. Los ministerios de trabajo en la 1ª. Presidencia de Menem: sindicalismo y Estado. 1989-95*. B.A. Corregidor. 1999
- Sidicaro, Ricardo. *La crisis del Estado y los actores políticos y socio-económicos de la Argentina*. B.A. Libros del Rojas. 2001
- Schvarzer, Jorge. *Implantación de un modelo económico. La experiencia entre 1975 y 2000*. B.A. A-Z ed. 1999

2.3.

- Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel. *De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina. 1999-2001*. Rosario. IHEAL/UBA/ Homo Sapiens. 2003
- Godio, Julio. *La Alianza. Formación y destino de una coalición proresista*. B.A.

Grijalbo. 1998

- Morales Solá, Joaquín. *El sueño eterno. Ascenso y caída de la Alianza*. B.A. Sudamericana.2001

- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. *Los caminos de la centroizquierda. Dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza*. B. A. Losada. 1998

- Ollier, María Matilde. *Las coaliciones políticas en Argentina. El caso de la Alianza*. B.A. F.C.E. 2001-

- Silletta, Alfredo. *Salir del infierno. Estrategia de un piloto de tormenta. La transición Duhalde. 2002-2003*. Biblos.2005

- Tresca, Gerardo. *El colapso de la convertibilidad y el nuevo modelo de desarrollo argentino*. B.A. Realidad argentina. 200

2.4./2.5.

- Curia, Walter. *El último peronista. La cara oculta de Kirchner*. B.A. Sudamericana.2006

- Liascovich, Carlos. *Lavagna. La biografía*. B.A. Planeta. 2005

- Quiroga, Hugo. *La Argentina en emergencia permanente*. B.A. Edhasa. 2005

- Quiroga, Hugo y Tcach, César (comp.). *Argentina 1976-2006. Entre la sombra*

de la dictadura y el futuro de la democracia. Rosario. Univ. Nac. del Litoral/
Homo Sapiens. 2006

- Tresca, Gerardo. *La recuperación argentina. Ensayo sobre la recomposición política,*

económica y social de la Argentina. B.A. Realidad argentina. 2005